

hic Julio

11826

ESCANFADO

18 SEP '19

JUICIO

DE AMPARO COMÚN

18 SEP 17 PM 10:48

ORIGINAL

QUEJOSA: DESARTMX, S.A. DE C.V.
PRIMERA REGIÓN
CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUADERNO PRINCIPAL

SE INTERPONE RECURSO
DE REVISIÓN PRINCIPAL EN
CONTRA DE LA SENTENCIA
DE 2 DE SEPTIEMBRE DE
2019.

18927



LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, POR CONDUCTO DEL C. JUEZ
SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DE LA PRIMERA REGIÓN
CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

2019 SEP 18 PM 9:00

CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE LA PRIMERA REGIÓN
22 (CERCA) MEXICO

Exento con firma autografiada
conforme a lo dispuesto en el artículo
172 del Código de Procedimientos

[REDACTED], abogado autorizado por la parte quejosa dentro del juicio de amparo al rubro citado¹, en términos amplios y con la personalidad que tengo reconocida en el juicio de amparo 65/2019, radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con número de Cédula Profesional [REDACTED] debidamente registrada en el sistema respectivo de ese Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 80 primer párrafo, 81, fracción I, inciso e), 83, 86 y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 21, fracción II inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos Primero, último párrafo y Segundo fracción III del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación², con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

Se interpone **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2019, notificada a la quejosa el día 3 de septiembre de 2019, a través del cual el C. Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera

¹ Conforme a la autorización presentada por el representante legal de la quejosa ante el propio Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México el día 8 de febrero de 2019 y cuya autorización fue reconocida por el propio Juzgado de Distrito mediante acuerdo del mismo 8 de febrero de 2019, publicado en las listas oficiales del Juzgado el día 11 de febrero de 2019.
² Publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013 Tomo 3, Página 217.

ESCANEADO


Región, con residencia en la Ciudad de México, sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la quejosa.

Ahora bien, antes de demostrar la ilegalidad en que incurrió el a-quo, en primer lugar, conviene demostrar la procedencia del presente recurso de revisión.

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.

I.- Procedencia por la materia del recurso.

De conformidad con el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, el recurso de revisión procederá en contra de las sentencias dictadas en el cuaderno principal que nieguen o concedan la protección constitucional.



En ese sentido, como podrá advertir esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presente recurso de revisión se interpone dentro de un juicio de amparo indirecto, en contra de sentencia de 2 de septiembre de 2019 (notificada al día siguiente), a través de la cual el C. Juez de Distrito sobreseyó en el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada, en contra del sistema normativo compuesto tanto por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos para el Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma.

Entonces, tenemos que el presente recurso de revisión es plenamente procedente por cuanto a la materia que se interpone.

II.- Procedencia por la competencia del ad-quem.

El artículo 83 de la Ley de Amparo³ señala que será competente para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia constitucional dictada por un Juez de Distrito en el que subsista el problema de constitucionalidad de normas generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También, esta competencia a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra prevista en el artículo 10, fracción II inciso a) en relación con el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

³ Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."

Por ello, al estar dirigido el presente recurso de revisión a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se cumple con el requisito requerido en los numerales antes citados.

III.- Procedencia respecto del plazo de interposición del recurso.

Por otro lado, la Ley de Amparo, en su artículo 86⁴, prevé que el recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de diez días, contados a partir de que la sentencia correspondiente haya sido notificada a la parte que le perjudique.

En ese sentido, la sentencia dictada por el Juez Segundo Auxiliar en la Ciudad de México se notificó a mi representada el día 3 de septiembre de 2019, por lo que el presente recurso de revisión se interpone dentro del plazo de diez días posteriores a su notificación⁵.

IV.- Procedencia por el órgano ante el que se interpone.

El artículo 86 de la Ley de Amparo prevé que el recurso de revisión se deberá interponer, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

Por lo tanto, el presente recurso se interpone por conducto del C. Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien fue el que dictó la sentencia ahora recurrida⁶.

V.- Procedencia por quien interpone el recurso de revisión.

Por último, el presente recurso de revisión también es procedente en virtud de que se interpone por una persona autorizada en términos amplios del artículo 12 de la


⁴ "Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida."

⁵ Descontando los días 7, 8, 14 y 15 de septiembre de 2019 por ser sábados y domingos, respectivamente, así como el día 16 de septiembre de 2019 por ser inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y Primero inciso i) del Acuerdo General 18/10213 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁶ Confirma la procedencia del recurso de revisión, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable a contrario sensu, que es de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN, LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO INTERRUMPE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO. Este Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 69, tesis P. XLVIII/98, de rubro: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE Poca IMPORTANCIA, DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.", en el sentido de que tales órganos jurisdiccionales deben corregir el error en la cita del número de expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que a través de su corrección permita la procedencia del juicio o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, en los casos en que se interpongan en la forma y dentro de los plazos que establece la propia ley en cada caso concreto. No obstante lo anterior, deben diferenciarse los errores de poca importancia, que pueden corregirse, de los que no lo son, por interferir en la procedencia del medio de impugnación. Así, puede establecerse que cuando el juzgador de amparo advierta un error numérico o alguno análogo, que no implique el desacato de las disposiciones legales que rigen la procedencia de la vía, deberá corregirlo, aplicando analógicamente el artículo 79 de la Ley de Amparo; pero este criterio no será aplicable cuando se trate de errores que, contraviniendo las disposiciones de la ley de la materia, repercutan en la procedencia del medio de defensa, como en el caso en que se presente un recurso de revisión ante un órgano jurisdiccional e autoridad distintos de aquel que dictó la sentencia recurrida, pues conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerse por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio o del Tribunal Colegiado de Circuito que dictó la resolución impugnada, sin que su interposición ante autoridad distinta interrumpa el plazo de diez días que concede la ley para hacerlo valer; esto es, el referido plazo debe computarse desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución recurrida, hasta el día en que el recurso se presentó ante el órgano que resolvió el juicio de amparo en primera instancia." Época: Novena Época, Registro: 191704, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P. LXXX/2000, Página: 43.

10
Ley de Amparo⁷ y, además, dicha personalidad le fue reconocida por el propio Juez de Distrito mediante auto de fecha 8 de febrero de 2019, publicado en las listas oficiales de dicho órgano jurisdiccional el día 11 de febrero de 2019, así como en diversas actuaciones procesales posteriores.

Confirma la procedencia del recurso, los siguientes criterios de ese Poder Judicial de la Federación, que son de rubro y texto siguientes:



"AUTORIZADO CON FACULTADES AMPLIAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. A QUIEN SE DEBE RECONOCER ESE CARÁCTER PARA EFECTOS DE LA ADMISION DEL RECURSO DE REVISION. Debe reconocerse el carácter de autorizado en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, para efectos de admitir el recurso de revisión que se interpone en contra de la sentencia de primera instancia, a quien el quejoso designe en su demanda de garantías, aunque en el auto admisorio no se le conceda tal carácter, sino únicamente el de autorizado en términos restringidos para oír notificaciones e imponerse de los autos, si en el escrito de revisión manifiesta tener registrada su cédula profesional en el juzgado del conocimiento y se advierte que en el curso del juicio se le reconoció la legitimación necesaria para ofrecer pruebas y se le tuvo como autorizado de la parte quejosa al tener por recibido el escrito de revisión, porque la valoración conjunta de estas circunstancias basta para generar la convicción de que se trata de un profesionista legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado."⁸

"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO LE HAYA RECONOCIDO ESE CARÁCTER. La primera parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo faculta al quejoso y al tercero perjudicado para designar a un autorizado, cuyas atribuciones son las de realizar cualquier acto en defensa de los intereses de su autorizante, como lo es la interposición de recursos. Ahora bien, tanto del texto de dicho precepto como de sus antecedentes legislativos se advierte que para que esta forma de mandato judicial surta efectos sólo se requiere la manifestación expresa del autorizante en ese sentido, sin mayores condiciones, excepto en las materias civil, mercantil y administrativa, en cuyo caso el autorizado debe acreditar que está legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado. En ese tenor, se concluye que si el agraviado presenta la demanda de garantías y en ella designa a su autorizado, delegándole las facultades procesales que prevé la indicada disposición, éste puede recurrir el auto de desechamiento emitido por el Juez de Distrito, aun cuando no se

⁷ Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.

⁸ Época: Novena Época, Registro: 2002g1, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Materia(s): Común, Tesis: P. LX/95, Página: 75.

le haya reconocido ese carácter, porque **su legitimación deviene de la voluntad del quejoso** y no del reconocimiento por parte del juzgador de amparo. Interpretar lo contrario significaría desconocer el texto expreso del citado artículo 27, contrariar la voluntad del quejoso expresada al resguardo de dicha norma, mermar sus posibilidades de defensa ante un acto de tanta trascendencia como lo es el desechamiento de la demanda de amparo, y consentir que una omisión sólo atribuible al Juez redunde en perjuicio del agraviado, todo lo cual vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ⁹

Así, como se advierte de los criterios sustentados por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el profesionista autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por el Juez de Distrito, tal como ocurre en el presente caso.

Una vez demostrada la procedencia del presente recurso de revisión, en primer término se estima necesario, a efecto de facilitar el análisis de los Agravios que se harán valer en el presente recurso y en los cuales se demostrará plenamente la ilegalidad de la sentencia recurrida, formular el siguiente:

GLOSARIO

SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación.
COFEPRIS	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Juez ó A-quo	Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.
Constitución ó Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Amparo	Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LGS	Ley General de Salud.
CPF	Código Penal Federal.
Lineamientos ó Lineamientos COFEPRIS.	Lineamientos para el Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos por el Comisionado Federal

⁹ Época: Novena Época, Registro: 1002552, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice da 2011, Tomo II, Procesos Constitucionales 1. Común, Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, Materia(s): Común, Tesis: 486, Página: 526

	para la Protección contra Riesgos Sanitarios el 30 de octubre de 2018.
Oficio COFEPRIS	Oficio 83300EL040837, emitido por el Subdirector de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
CBD	Cannabidiol.
THC	Tetrahidrocannabidiol.
Sentencia ó sentencia recurrida	La sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo [REDACTED].

Por otro lado, previo a demostrar la ilegalidad en que incurrió el Juez, conviene dejar claro cuál será la litis propuesta en el presente recurso así como una consideración previa respecto de las consideraciones no impugnadas en el presente recurso.

CONSIDERACIÓN PREVIA Y LITIS EN EL RECURSO.

A. En primer término, resulta importante destacar a ese Tribunal ad-quem, que no serán motivo de Agravio, las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito, contenidas en los Considerandos Cuarto y Sexto¹⁰ de la sentencia ahora recurrida.

En ese sentido, al no haber sido impugnadas estas consideraciones, sólo por lo que respecta a la certeza de los actos reclamados y la desestimación de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, conforme al criterio jurisprudencial 1º/J. 62/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹¹, deberán quedar firmes.

¹⁰ En el Considerando Cuarto, el Juez tuvo por ciertos los actos reclamados de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Ejecutivo Federal, consistentes en la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 235 Bis; 237, párrafo primero; 245, fracciones I, II, IV y V en su segundo párrafo y 290 de la ley mencionada, así como el diverso 19e, último párrafo, del citado código, porque aceptaron su existencia y ésta se corrobora con la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. También, se señaló que son ciertos los actos reclamados al Comisionado y al Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la emisión de los artículos 5, 8, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos el treinta de octubre de dos mil dieciocho y contenidos en el oficio SOO/143/29018 y del oficio 163300EL040837 de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, toda vez que así lo manifestaron en su informe justificado.

Por último, también en ese considerando se señaló que: "Sin que pasen desapercibidas para el suscrito las manifestaciones vertidas por el Comisionado y por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el oficio recibido en este órgano jurisdiccional el dos de mayo del año en curso (folio 501 a 502 de autos), en el sentido de que se actualiza una causa de sobrelimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al ser inexistente el acto que se les reclama consistente en la emisión de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma; lo anterior, en virtud de que mediante diverso oficio SOO/134/2019 de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se revocaron los referidos lineamientos dado que carecen de la debida formalización y publicidad para los efectos jurídicos conducentes.

Sin embargo, dicho acto debe tenerse por cierto, ya que al momento de la presentación de la demanda (quince de enero de dos mil diecinueve) no se había emitido el diverso oficio SOO/134/2019 de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve por el que se revocaron los referidos lineamientos.

Por su parte, en el Considerando Sexto de la sentencia se desestimaron todas y cada una de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables en el presente juicio de amparo.

¹¹ "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones,

En efecto, sólo en la parte no impugnada, esas consideraciones deberán quedar firmes.

B. Por otro lado, a efecto de facilitar el análisis de los Agravios hechos valer en el presente recurso, a través de los cuales se demostrará plenamente la ilegalidad en que incurrió el Juez de Distrito, conviene determinar cuál será la litis planteada en la presente instancia.

Así, en esencia, la litis que se planteará será la ilegalidad de la sentencia del Juez de Distrito, en donde consideró que:

1. El Juicio de Amparo es improcedente en contra de los Lineamientos COFEPRIS;
2. El sistema normativo impugnado resulta, supuestamente, apegado a nuestra Constitución Federal;
3. Resultan, supuestamente, inoperantes los Conceptos de Violación identificados como Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la demanda de amparo;
4. Resultaba innecesario analizar la prueba pericial, supuestamente, bajo el argumento de que las preguntas formuladas, van encaminadas a demostrar las características y diferencias entre la marihuana y el CBD, los efectos que tienen en el ser humano en caso de su consumo y si dichas sustancias pueden ser utilizadas con fines de investigación científica o médica y si las respuestas deben o no generar convicción al Juez de Distrito.
5. Dejó de analizar la ampliación de demanda y diversos Conceptos de Violación formulados en la demanda de amparo, específicamente los marcados con los numerales Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo.¹²

Así pues, después de haber formulado la consideración previa y determinado cuál deberá ser la Litis en el presente recurso de revisión, se demostrará, a través de los

pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no exprese agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme." Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 62/2006, Página: 185.


¹² Resulta aplicable el siguiente criterio de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO ANALIZADOS. OBLIGACIÓN DEL RESOLUTOR DE AMPARO DE ANALIZARLOS EN SU TOTALIDAD. De acuerdo con los principios fundamentales y reglamentarios que rigen al juicio de amparo, no es permitido a los jueces de Distrito resolver sólo en parte la controversia que se les plantea, sino que en la audiencia respectiva deben dictar sentencia en la que resuelvan sobre la cuestión constitucional propuesta en su integridad; en los conceptos de violación hechos valer, los cuales no son otra cosa que la relación razonada que el quejoso, por imperativo expreso del artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo debe establecer entre los actos que reclama y los preceptos constitucionales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos. En tales condiciones, resulta a todas luces contrario a la técnica que rige al juicio de amparo, que el juzgador constitucional analice sólo en parte, o deje de analizar en su totalidad, los multirreferidos conceptos de violación, pues no es lógico ni jurídico que se obligue al peticionario de amparo a cumplir con todos y cada uno de los requisitos del expresado artículo 116, entre los que se encuentra, la expresión del concepto o conceptos de violación, para luego hacer permisiva la omisión de tales conceptos de violación, por parte del resolutor de amparo; cuenta habida que también, por disposición expresa del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener, entre otras cosas, los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y para que esto último pueda satisfacerse, es menester que se analicen previamente y en su totalidad, las cuestiones propuestas en los conceptos de violación. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la audiencia constitucional, a efecto de que el a quo, lleve a cabo el estudio integral de los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." Época: Octava Época, Registro: 214654, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, Materia(s): Común, Tesis: Página: 408

10
Agravios correspondientes, que el Juez de Distrito actuó ilegalmente al sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

AGRAVIOS.

PRIMERO. Violación al artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, ya que el Juez de Distrito omitió analizar los actos reclamados, tal como fueron señalados en la ampliación de demanda correspondiente.

Ahora bien, para acreditar plenamente la ilegalidad en que incurrió el Juez de Distrito, conviene, en primer lugar, tener presente lo señalado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir su informe con justificación dentro del presente juicio de amparo; así, en dicho informe, en la parte que interesa, se señaló lo siguiente:



"III. El actos (sic) que se reclama, consistente en la aprobación del Código Penal Federal en su artículo 198, último párrafo, se tiene como NO CIERTO, toda vez que el mismo fue realizado por el Ejecutivo Federal en uno de las facultades que le fueron concedidas por Decreto de 2 de enero de 1931"

Como se advierte de lo anterior, la Cámara baja al rendir su informe con justificación señaló de forma por demás clara, que uno de los actos reclamados, consistente en la aprobación del artículo 198 último párrafo del CPF, no era cierto, en virtud de que dicho numeral había sido emitido por el Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias.

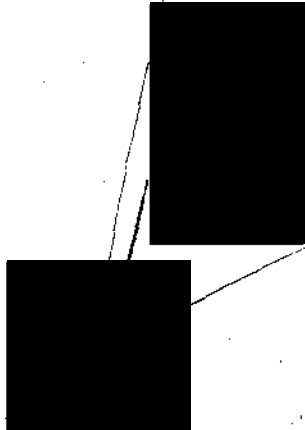
Ante dicha información, mediante escrito ingresado al Juzgado de Distrito el 12 de febrero de 2019, la quejosa ejerció su derecho a ampliar la demanda de amparo, derivado de lo señalado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al rendir su informe con justificación.

En dicha ampliación se señaló como actos reclamados los siguientes:

"IV ACTOS RECLAMADOS:

D. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la omisión de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de junio de 2017.

E. Del Ejecutivo Federal, la aprobación y expedición, en uso de facultades extraordinarias otorgadas mediante Decreto del 2 de enero de 1931, del Código Penal Federal en general y, en especial, del último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017."



También, se adicionó el Décimo Segundo Concepto de Violación, en el cual la quejosa demostró, ante el nuevo hecho dado a conocer en el informe justificado rendido por la Cámara de Diputados, que el artículo 198 último párrafo del Código Penal Federal resultaba violatorio del proceso legislativo previsto en la Constitución Federal, pues el mismo había sido aprobado por la Cámara de Senadores y, según lo aseverado por la Cámara baja en su informe justificado, aprobado por el Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias.

Sin embargo, de forma por demás ilegal, el Juez de Distrito, en el considerando tercero de la sentencia ahora recurrida, determinó lo siguiente:

"Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión negó el acto que se le atribuye consistente en la omisión de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

Negativa que se corrobora con el propio proceso legislativo que dio origen al Decreto que contiene las reformas al referido numeral, el cual se sustanció de la siguiente forma:

- 1) El veintiuno de abril de dos mil dieciséis el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad prevista en la fracción I, del artículo 71 constitucional, presentó ante la Cámara de Senadores la "Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 (sic) del Código Penal Federal"
- 2) El trece de diciembre de dos mil dieciséis la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen de primera lectura/Declaratoria de publicidad en el cual concluyó enviar a la Cámara de Diputados el expediente que contenía el *Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal*, por lo que remitió la minuta correspondiente.
- 3) El catorce de diciembre de dos mil dieciséis la minuta referida fue recibida en la Cámara de Diputados, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Salud para su dictamen el quince de diciembre siguiente.
- 4) El veintiocho de abril de dos mil diecisiete la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su carácter de Cámara revisora, aprobó el Dictamen a discusión, por lo que ordenó turnar al Ejecutivo Federal para sus efectos Constitucionales.

En este orden, cabe resaltar que del referido dictamen se advierte, particularmente en su artículo segundo, que se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

(se transcribe)

12

5) el dieciséis de junio de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, el Presidente de la República expidió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

6) El diecinueve de junio de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que nos ocupa.

De dicha publicación también se advierte que el Decreto referido fue suscrito en la Ciudad de México el veintiocho de abril de dos mil diecisiete por los Senadores Pablo Escudero Morales y Lorena Cuéllar Cisneros, como Presidente y Secretaria, respectivamente de la Cámara de Senadores y por los Diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez y Raúl Domínguez Rex, como Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Cámara de Diputados.

De lo anteriormente expuesto, queda corroborada la negativa expresada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto a la omisión de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de junio de dos mil diecisiete que se le atribuye, pues ha quedado evidenciada su intervención en el proceso legislativo correspondiente, en términos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, toda vez que quedó acreditada la inexistencia de la omisión reclamada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, este juzgador determina sobreseer en el juicio de amparo respecto de la omisión señalada y por lo que hace a la responsable indicada.

(...)

Primero. Se sobresee en el juicio en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia".

Como ese Alto Tribunal podrá advertir de la simple lectura a las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito en el Considerando Tercero de la sentencia ahora recurrida, determinó sobreseer en el juicio, en virtud de que quedó acreditada la inexistencia de la omisión reclamada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistente en la omisión de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo del CPF.

Sin embargo, dicha consideración fue emitida en contra de las propias constancias del expediente, pues como se señaló anteriormente, fue la propia Cámara de Diputados la que, al rendir su informe justificado señaló, expresamente que "El actos (sic) que se reclama, consistente en la aprobación del Código Penal Federal en su artículo 198, último párrafo, se tiene como NO CIERTO, toda vez que el mismo fue realizado por el Ejecutivo Federal".

Es decir, la propia autoridad responsable al rendir su informe con justificación señaló, claramente, que no había aprobado el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal reclamado.

No obstante dicha constancia que obra agregada al expediente, el Juez de Distrito determinó ilegalmente sobreseer en el juicio respecto a dicho acto reclamado, señalando simplemente que la omisión era inexistente.

Sin embargo, ello es ilegal, por lo siguiente:

1. El Juez dictó dicha consideración en contra de lo reconocido por la autoridad responsable Cámara de Diputados al rendir su informe con justificación;
2. **El Juez, en ningún momento, analizó la ampliación de demanda** hecha valer por el quejoso, es decir, no analizó los actos reclamados y los conceptos de violación que fueron motivo de la ampliación;
3. El Juez en ningún momento de la sentencia, analizó el acto reclamado objeto de ampliación marcado como inciso E del Capítulo de Actos Reclamados de la ampliación de demanda.

Ante ello, esta consideración del Juez de Distrito resulta por demás ilegal, ya que no sólo se emitió en contra de lo señalado por la propia autoridad responsable al rendir su informe con justificación sino que, además, se emitió en franca violación a las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, pues emitió su sentencia sin fijar de forma clara y precisa la litis (dejó de analizar la ampliación de demanda) y tampoco realizó un análisis sistemático de todos los conceptos de violación (en especial, el hecho valer en la ampliación de la demanda de amparo).

Por lo tanto, al haberse demostrado plenamente la ilegalidad en que incurrió el Juez de Distrito, lo procedente es revocar la resolución recurrida y, en su lugar, dictar otra en la que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada.

SEGUNDO.- Violación al artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, ya que el Juez de Distrito omitió analizar los actos reclamados, tal como fueron señalados en la demanda de amparo y en la ampliación de demanda correspondiente.

La sentencia que ahora se recurre, resulta por demás ilegal, ya que omitió por completo el análisis de diversos Conceptos de Violación hechos valer en la demanda de amparo y en la ampliación de la demanda de amparo.

En efecto, en la demanda de amparo, específicamente, en los Conceptos de Violación marcados como Décimo y Décimo Primero, el quejoso demostró plenamente la ilegalidad del oficio COFEPRIS en los siguientes términos:

DÉCIMO.- El oficio 183300EL040837 resulta contrario al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar una interpretación restrictiva del sistema normativo ahora impugnado.

En el caso de que ese órgano de control constitucional estime infundados los Conceptos de Violación hechos valer anteriormente, se hace valer el siguiente de forma cautelar.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una obligación a todas las autoridades del Estado Mexicano y que consiste, básicamente, en que las normas de derechos humanos deben interpretarse de forma amplia y progresiva, a efecto de favorecer la protección más amplia de los derechos humanos.

También, el propio numeral 1º de nuestra Carta Magna impone una obligación a todas las autoridades estatales, consistente en que deberán, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Merece especial atención la obligación de aplicar e interpretar las normas de derechos humanos de forma progresiva y que, desde este punto de vista, lo que también se obliga a las autoridades es a evitar la regresividad como aspecto negativo en materia de derechos humanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia contenido en la tesis 85/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹³, que es de rubro y texto siguientes:

(se transcribe).

No obstante esta obligación, impuesta por la Constitución a todas las autoridades del Estado Mexicano, entre las que, por supuesto, se encuentra el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la COFEPRIS, al momento de emitir el acto que se le reclama señaló lo siguiente:

(se transcribe)

Como se advierte de la lectura de este acto reclamado, el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta aplicó de forma restrictiva el derecho humano contenido en la reforma ahora impugnada, a efecto de negar la autorización solicitada por mi representada.

Ello es así, pues como se ha venido señalando a lo largo de la presente demanda y acreditado plenamente a lo largo de los Conceptos de Violación hechos valer, no existe justificación constitucional para excluir a mi representada de la posibilidad de

¹³ Época: Décima Época, Registro: 2015305, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.JJ. 85/2017 (10a.), Página: 189.

sembrar, cultivar y cosechar cannabis sativa L (cáñamo) a efecto de extraer de este el CBD y, además, destinarlo a fines industriales.

No obstante ello, el Subdirector ahora responsable negó a mi representada la autorización bajo el argumento que "no hay una permisión expresa en la Ley General de Salud, pero sí una limitación en el Código Penal Federal..." dejando de aplicar de forma progresiva los derechos humanos contenidos en la reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, publicada el 19 de junio de 2017

Ello, pues el propio Subdirector tenía la posibilidad de autorizar a mi representada la autorización solicitada, utilizando el fundamento contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal y aplicando de forma progresiva los derechos humanos.

Sin embargo, de forma por demás inconstitucional, el Subdirector aplicó de forma regresiva y restrictiva el artículo 198 del Código Penal Federal, a efecto de negarle a mi representada la autorización, bajo el argumento que no existe una permisión expresa en la Ley General de Salud y sí una prohibición expresa en el Código Penal.

Sin embargo, como ese órgano de control constitucional podrá advertir de la simple lectura al artículo 198 del Código Penal Federal, no existe prohibición expresa para que mi representada pueda llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) para extraer el CBD y destinarlo a fines industriales.

Por ello, si el Subdirector responsable aplica de forma regresiva la reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, lo procedente es que ese órgano de control constitucional conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión ahora solicitados.

DÉCIMO PRIMERO.- El oficio 183300EL040837, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta resulta contrario al derecho humano a la seguridad jurídica.

En efecto, en el acto reclamado al Subdirector ahora responsable, se negó a mi representada la autorización para llevar a cabo diversas acciones o actividades bajo el simple argumento que en la Ley General de Salud no existe una permisión expresa para llevarlas a cabo y, por el contrario, en el Código Penal Federal sí existe una prohibición expresa.

En ese sentido, el Subdirector señaló en la parte que interesa, lo siguiente:

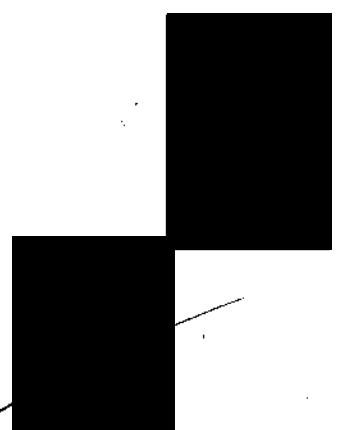
(se transcribe)

Así, de forma por demás inconstitucional el Subdirector determinó negar la autorización solicitada, en virtud de que en la Ley General de Salud no existe una "permisión" expresa para que mi representada lleve a cabo las actividades por las que solicitó la autorización.

Sin embargo, en franca violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Subdirector pasó por alto el principio de derecho consistente en



6



16

que el particular puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por una norma jurídica.

En cambio, la autoridad sólo podrá hacer lo que, expresamente, esté previsto y facultado conforme a una norma jurídica.

Por ello, si la razón de negar a mi representada la autorización solicitada consiste en que no existe "permisión" expresa en la Ley General de Salud, el Subdirector responsable olvida el principio general de derecho y que consiste en que mi representada podrá hacer cualquier actividad siempre y cuando no esté expresamente prohibida.

Es decir, el Subdirector aplica el principio que rige la actuación de cualquier autoridad en un Estado Democrático Constitucional de Derecho (que la autoridad sólo puede hacer lo que una norma le faculta expresamente para hacer) a un particular cuando, para este tipo de actuaciones rige el principio contrario, es decir, que el particular podrá hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por una norma.

Por lo tanto, si en la Ley General de Salud no existe una prohibición expresa para que mi representada pueda llevar a cabo las actividades por las que solicitó la autorización correspondiente; aplicando el criterio antes señalado, de que a los particulares sólo podrá impedírsele dedicarse a aquello que esté expresamente prohibido, al no haber prohibición expresa se debió autorizar la petición de mi representada."

Así pues, como ese Alto Tribunal podrá advertir de la simple lectura de los Conceptos de Violación marcados como Décimo y Décimo Primero de la demanda de amparo, el quejoso acreditó plenamente la ilegalidad del oficio COFEPRIS bajo los siguientes argumentos esenciales:

- El subdirector responsable aplicó en forma restrictiva el derecho humano contenido en la reforma, a efecto de negar la autorización solicitada;
- De la simple lectura al artículo 198 del Código Penal Federal, se advierte que no existe una prohibición expresa para que la quejosa pueda llevar a cabo la siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cañamo) para extraer el CBD y destinarlo a fines industriales;
- El subdirector responsable violó los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que pasó por alto al momento de emitir el acto a él reclamado, el principio de derecho consistente en que el particular puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido en una norma jurídica; es decir, si en la LGS no existe prohibición expresa para que mi representada pueda llevar a cabo las actividades por las que solicitó la autorización correspondiente, entonces, no se le puede impedir al particular dedicarse a esa actividad, bajo el argumento de que no existe una permisión expresa.



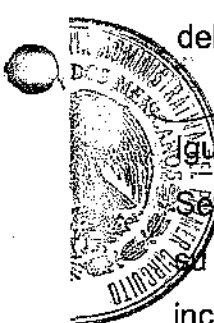
17

No obstante que en dichos argumentos se acreditó plenamente la inconstitucionalidad e ilegalidad del oficio COFEPRIS, el juez, en franca violación a las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, simplemente, omitió el análisis de estos Conceptos de Violación.

En efecto, en la sentencia ahora reclamada, el Juez de forma ilegal, se limitó a señalar lo siguiente:

"Negativa de amparo que procede hacer extensiva respecto de la aplicación de los actos reclamados referidos, en virtud de que dicho acto no se atacó por vicios propios, sino como una consecuencia directa de la aplicación de la norma impugnada."

Esta consideración resulta por demás ilegal, pues el Juez omite el análisis de los Conceptos de Violación marcados como Décimo y Décimo-Primero de la demanda de amparo, en los que se demostró plenamente la inconstitucionalidad e ilegalidad del oficio COFEPRIS.



La cual ilegalidad ocurre con el Concepto de Violación marcado como Décimo Segundo de la ampliación de demanda pues, en este caso, el Juez también omitió su estudio por completo, no obstante que en el mismo, se demostró la inconstitucionalidad del artículo 198, último párrafo del CPF, ante la transgresión al proceso legislativo correspondiente.


En efecto, en dicho Concepto de Violación se señaló, expresamente, lo siguiente:

DÉCIMO SEGUNDO.- La omisión de la Cámara de Diputados de aprobar las reformas al artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de junio de 2017, son contrarias al proceso legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


En efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su informe justificado, señaló que dicho cuerpo legislativo no aprobó las reformas al último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, en virtud de que *"el mismo fue realizado por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades que le fueron concedidas por Decreto de 2 de enero de 1931"*.

Es decir, la autoridad responsable señala que no aprobó ese acto reclamado sino que fue diversa autoridad, en este caso, el Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente:



- 18
1. La iniciativa de reformas se presentó por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores como cámara de origen el 21 de abril de 2016;
 2. El 13 de diciembre de 2016, se aprobó el Dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el Código Penal Federal en materia de uso de la marihuana.
 3. La Minuta correspondiente fue remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.
 4. La minuta se "aprobó" por la Cámara de Diputados el viernes 28 de abril de 2017.¹⁴
 5. El decreto de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, se promulgó por el Ejecutivo Federal y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017.



Así, tenemos que, conforme lo señala la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, si las reformas al último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal sólo fueron aprobadas por el Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias otorgadas mediante Decreto de 2 de enero de 1931, **existe una clara violación al proceso legislativo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, pues el artículo 198, último párrafo, hubiera sido aprobado por la Cámara de Senadores (conforme lo aceptó dicha autoridad en su informe justificado) **pero no fue aprobado por la Cámara de Diputados (así lo señaló dicha autoridad)** y fue aprobado, entonces, por el Ejecutivo Federal.

Con ello, quedaría clara la violación al proceso legislativo que regula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tendríamos que el artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal (reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017) no fue aprobada por la Cámara revisora (tal como lo señala la misma en su informe justificado).

No obstante esta violación al proceso legislativo, la reforma al artículo 198, último párrafo del Código Penal Federal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, en franca violación a los artículos 71 y 72 del Pacto Federal.

Se insiste, si la propia Cámara Revisora, al rendir su informe justificado señaló que las reformas al último párrafo del Código Penal Federal no fueron aprobadas por ella, entonces, se violó el proceso legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal y no podía ser publicada esa reforma sin la aprobación de la cámara revisora.

Por otro lado, al haberse demostrado la inconstitucionalidad de la omisión de aprobar la reforma al último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal por parte de la Cámara

15

revisora (tal como lo señaló en su informe justificado) también quedaría demostrada, en su caso, la inconstitucionalidad de la aprobación y expedición de dicho artículo por parte del Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias.

Ello es así, pues también sería inconstitucional el que el Ejecutivo Federal hubiera aprobado y expedido el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017) - tal como lo señala la Cámara de Diputados en su informe justificado- cuando la materia y objeto de la facultad extraordinaria ya se había agotado y, más aún, cuando la iniciativa correspondiente fue aprobada por la Cámara de Senadores como cámara de origen.

Por ello, en su caso, si como lo señala la Cámara de Diputados en su informe justificado, este artículo hubiera sido aprobado y expedido por el Ejecutivo Federal en uso de facultades extraordinarias, también este acto resultaría contrario al proceso legislativo previsto en los artículos 71 y 72 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante ello, en caso de no haberse aprobado estas reformas por la Cámara revisora pero sí publicadas en el Diario Oficial de la Federación, resulta evidente su inconstitucionalidad y, por lo tanto, deberá concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la ahora quejosa."

Como ese Tribunal ad-quem podrá advertir de la simple lectura del Concepto de Violación de referencia, en el mismo se acreditó plenamente la inconstitucionalidad del artículo 198, último párrafo, del CPF conforme a las manifestaciones expuestas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al rendir su informe con justificación, sin embargo, en franca violación a las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito omitió por completo el análisis, también, de este Concepto de Violación.

Por ello, al haberse acreditado plenamente la violación a las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, la ilegalidad de la sentencia ahora recurrida por la omisión de estudio y análisis de diversos Conceptos de Violación formulados tanto en la demanda como en la ampliación, lo procedente es revocar la misma y, en su lugar, dictar otra en la que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa.

TERCERO.- Violación a los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V y 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito, ilegalmente, sobreseyó el juicio respecto de los Lineamientos de COFEPRIS.


20

El Juez de Distrito, ilegalmente, estimó actualizada la causal de improcedencia consistente en no haber acreditado el interés jurídico para impugnar los Lineamientos de COFEPRIS, al determinar que no existió evidencia de un acto concreto de aplicación que actualice el perjuicio o agravio personal y directo, requerido para la procedencia del amparo bi-instancial.

Sin embargo, estas consideraciones resultan por demás ilegales, tal como se acreditará a continuación.

A. En primer lugar, a efecto de acreditar plenamente la ilegalidad en que incurrió el a-quo resulta necesario tener presentes las consideraciones vertidas en el Considerando Quinto de la sentencia que ahora se recurre.

Así, en dicho considerando el Juez de Distrito, ilegalmente, estimó lo siguiente:



"Quinto. Causales de improcedencia. En primer término, debe precisarse que la acción de amparo es un mecanismo de control constitucional –de índole jurisdiccional– a través del cual las personas pueden impugnar las normas generales, actos u omisiones de las autoridades que consideren violatorios de los derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, o bien, que menoscaben esos derechos y garantías al vulnerar el régimen de distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas, con el fin de restituir en el goce de los derechos violados.

Al respecto, el Alto Tribunal estableció, en términos generales, que la improcedencia en amparo es la imposibilidad de que dicha acción logre su objetivo, es decir, que el quejoso no obtenga la pretensión que pretende por existir un impedimento para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada.

De este modo, las causas de improcedencia suponen la actualización de alguna circunstancia de hecho o de derecho que impide resolver el fondo de la cuestión controvertida en el juicio, por lo que se trata de una institución jurídica procesal que por razones previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia de los tribunales federales, tiene como consecuencia que se deseche la demanda de amparo o se decrete el sobreseimiento en el juicio sin resolver el problema jurídico planteado.

Ahora, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus diferentes fracciones, contiene las diversas causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo. De este modo, con independencia de que el análisis de las causales de improcedencia amerite un estudio oficioso, la parte que proponga la actualización de alguna de ellas no debe limitarse a invocar el precepto legal que la prevé, sino que es necesario que desarrolle los argumentos mínimos con los que pretenda justificar su actualización en un caso concreto. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 174086 y rubro:

(se transcribe)



12

Conviene señalar que, tratándose de un juicio de amparo contra normas generales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 con registro 191311, sostuvo sustancialmente que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de un acto de aplicación concreto, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación.

En tal virtud, el juzgador debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio del peticionario de garantías y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. La jurisprudencia en comento es del rubro siguiente:

(se transcribe)

De ahí que este juzgador debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, es decir, si constituye el primero en perjuicio del peticionario de garantías de las hipótesis jurídicas controvertidas, y si al respecto no se actualiza alguna causa de improcedencia.

Así, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados, consistentes en los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no demostró la aplicación de dichas disposiciones en su perjuicio.

A efecto de demostrar la anterior aseveración es necesario imponerse del contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual dispone:

(se transcribe)

Por su parte, el artículo 5o, fracción I, de la legislación citada dispone lo siguiente:

(se transcribe)

De la lectura de dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere.

En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).

En el primer caso, resulta suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, el que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a la esfera

jurídica del promovente del juicio de amparo, sin ningún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

Por otro lado, se está frente a una disposición heteroaplicativa cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure el perjuicio de algún gobernado se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona en la hipótesis legal.

Para reclamar la constitucionalidad de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas.

En relación con esto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes:

(se transcribe)

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, si bien la Ley de Amparo en vigor establece como parámetros de procedencia del juicio de amparo tanto el interés jurídico como el interés legítimo, ello no conlleva que haya dejado de ser aplicable la distinción entre normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas, ya que esta distinción constituye un criterio formal y clasificador que resulta adaptable en función de diversas concepciones de agravio.

En el caso de que se reclame afectación al interés jurídico, el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que considera vulnerado por la autoridad responsable. En cambio, el interés legítimo permite reclamar un agravio diferenciado (no exclusivamente patrimonial) al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto.

En cuanto al interés legítimo, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)".

De modo que es posible sostener que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, el cual proviene de una afectación directa al particular o derivada de su situación particular frente al orden jurídico.

Es importante precisar que al promover juicio de amparo, el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis: esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o bien, aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no en ambos.

En este sentido, se debe examinar en cada caso la naturaleza de los actos reclamados y la afectación a su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de tal manera que sea posible identificar si es exigible el acreditamiento del interés jurídico o del interés legítimo.

En relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de agravio aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que la parte quejosa debe acreditar que le fueron aplicados en su perjuicio los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos por el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios el treinta de octubre de dos mil dieciocho y que, con base en ellos, se le negó la autorización que solicitó.

Así, los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma disponen lo siguiente:

(se transcriben)

Así, el artículo 5, establece que tratándose de la Cannabis se considera que la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, consumo, y, en general, todo acto relacionado con ella, se realizan con fines de investigación médica y científica, cuando dichas actividades se desarrollen conforme al Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS.

Mientras que en el diverso 6, señala que para el caso de cualquier Derivado Farmacológico de la Cannabis, se considera que la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con ella, se realizan con fines de investigación médica y científica, cuando dichas actividades se desarrollen conforme al Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS.

12

El artículo 24 establece los términos en que podrá llevarse a cabo la importación de semillas y plantas de la Cannabis, para fines de investigación médica y científica.

Por su parte el numeral 35 establece los términos en que podrá llevarse a cabo la fabricación, comercialización, exportación e importación de los productos, materia prima o sustancias distintos a Medicamentos que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones de hasta el 1% de THC, así como de los productos, materia prima o sustancias industriales en general que sean o contengan derivados de la cannabis conocidos como cáñamo, cuya característica sea la presencia de trazas e incluso ausencia de THC (éstos últimos para su uso industrial).

Los numerales 42, 43 y 44 señalan los términos en que habrán de llevarse los permisos de importación y exportación de los productos referidos en el Título IV de dichos lineamientos.

Finalmente en los artículos 46 y 48 se regula lo relativo a la publicidad y promoción de medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la cannabis y de los productos referidos en el Título IV de los lineamientos relacionados.

Ahora bien, el oficio 183300EL040837 de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en que la solicitante de amparo sustenta la aplicación de la normatividad transcrita, es del tenor siguiente:

(se transcribe)

De la imagen inserta se advierte que a través del oficio antes referido no le fueron aplicados a la parte quejosa los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos por el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios el treinta de octubre de dos mil dieciocho, pues en éste únicamente se le hizo de su conocimiento que dada la normatividad relativa de la Ley General de Salud (artículos 245 y 245 bis) así como del Código Penal Federal (artículo 198) se negaba la autorización solicitada para llevar a cabo las siguientes actividades:

- a) Importación, siembra, cultivo y cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC.
- b) Procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de canabidiol (CBD).
- c) Comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales.
- d) Importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC.

Es decir, lo resuelto en dicho oficio no resulta suficiente para sostener que se hayan actualizado en su perjuicio las hipótesis normativas de los preceptos impugnados cuya reseña se realizó en párrafos procedentes.

Esto es, no existe plena evidencia de la aplicación de los artículos impugnados, en el oficio reclamado y, por tanto, no existe un perjuicio real, actual y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa.

k

En ese sentido, en el oficio reclamado no se advierte la aplicación de los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos por el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios el treinta de octubre de dos mil dieciocho; lo que se traduce en que no existe evidencia de un acto concreto de aplicación que actualice el perjuicio o agravio personal y directo, requerido para la procedencia del juicio de amparo.

Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, así como 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y por el acto que se le reclama consistente en la emisión de los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 46 y 48 de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y Derivados de la Misma, emitidos el treinta de octubre de dos mil dieciocho, ya que la quejosa no acreditó el interés jurídico para controvertirlos en el presente juicio de amparo."

(énfasis añadido)

(...)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

Primero. Se sobresee en el juicio en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia"


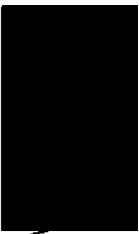


Como ese Alto Tribunal podrá advertir de la simple lectura de las consideraciones sustentadas por el Juez de Distrito para considerar improcedente el juicio de amparo en contra de los Lineamientos, tenemos que, en esencia, el ilegal criterio se sustentó en que no existió evidencia o prueba alguna a través de la cual el quejoso acreditara el acto de aplicación de los numerales reclamados de los Lineamientos COFERPIS.

Aún más, el propio Juez señaló que en el acto de aplicación de las normas reclamadas (oficio COPFEPRIS) no se advertía expresamente la aplicación de los artículos impugnados de los Lineamientos, razón por la cual, ilegalmente, determinó sobreseer en el juicio.

Sin embargo, estas consideraciones resultan por completo ajenas a lo señalado en la demanda de amparo, los antecedentes narrados en la misma, así como a los actos reclamados por lo que la sentencia viola el artículo 74, fracciones I y II, en relación con los artículos 61, fracción XII y 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo, tal como se acreditará a continuación.

B. En efecto, el Juez dejó de observar lo señalado en la demanda de amparo y, por lo tanto, no sólo la sentencia se emitió en contravención a los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V y 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo sino que, también, se



76
emitió en franca contraposición a las constancias que obran en el expediente en el que se actúa.

Así, para acreditar plenamente la ilegalidad en que incurrió el juez, en primer lugar, hay que tener presente lo señalado en la demanda de amparo y que, en la parte que interesa, se expresó lo siguiente:

"VIII.- PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO, POR LO QUE HACE AL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.

Como se señaló en el Capítulo de Antecedentes de la presente demanda de amparo¹⁵, el oficio emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la COFEPRIS, a través del cual no sólo se negó la autorización solicitada por mi representada sino que, también, fueron aplicados por primera vez en perjuicio de la misma las normas de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de los Lineamientos reclamados, fue notificado el día 7 de enero de 2019, a través de un Acta de Notificación.

X. PROCEDENCIA DEL AMPARO BI-INSTANCIAL EN FORMA INMEDIATA, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA.

Así, en el presente caso, nos encontramos frente a un acto del Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la COFEPRIS, en el que aplicaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y los Lineamientos de COFEPRIS —mismos que, también, constituyen actos reclamados en el presente juicio, tal como se señaló en el Capítulo correspondiente de la presente demanda— por lo que, en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, mi representada tiene la opción de promover el presente juicio de amparo indirecto de forma inmediata, es decir, sin agotar previamente los medios ordinarios de defensa.

CONSIDERACIÓN PREVIA

IV.- Impugnación de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos emitidos por la COFEPRIS como sistema normativo.

Por último, resulta importante hacer notar a ese H. Juzgado de Distrito que los artículos reclamados de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y los Lineamientos de la COFEPRIS se impugnarán en los Conceptos de Violación como un sistema normativo.

Lo anterior, pues a través de todos y cada uno de los artículos reclamados, se crea un sistema normativo que genera no sólo una categoría sospechosa (uso medicinal y científico del producto que sí puede sembrar, cultivar o cosechar frente al uso industrial que no le está permitido) sino que, también, con ese sistema que se creó tanto por el Legislador como por el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos

¹⁵ Vid supra punto 3 del Capítulo de Antecedentes, Hechos o Abstenciones de la presente demanda de amparo.

27

Sanitarios, se impide el ejercicio de un derecho legítimamente tutelado a favor de la ahora quejosa.

Adicionalmente, estos artículos ahora impugnados en la presente instancia constitucional, resultan indisolubles entre sí para la regulación de la marihuana y el cáñamo, CBD y THC, razón por la cual, en los Conceptos de Violación se demostrará que el sistema, como tal y no algún artículo de forma individual de los reclamados en el presente juicio, resultan violatorios de diversos derechos y garantías consagrados a favor de la quejosa no sólo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino, también por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Se insiste, si a través de todos y cada uno de los artículos ahora impugnados, tanto de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos se genera al quejoso una violación a sus derechos y garantías, pues a través de los mismos se le excluye de la posibilidad de ejercer un derecho, resulta procedente que ese H. Juzgado de Distrito analice los artículos como sistema normativo.

Lo anterior, se confirma con los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de rubro y texto siguientes:

(se transcriben)

Como se advierte de los criterios jurisprudenciales obligatorios recién transcritos, tenemos que cuando la Litis en el juicio de amparo se vincula necesariamente con el análisis de diversas disposiciones legales que constituyan un sistema normativo, el Juez deberá proceder al análisis de las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema correspondiente.

Más aún, la propia Suprema Corte determinó en esas jurisprudencias que, a través del juicio de amparo indirecto, se pueden reclamar disposiciones legales que guardan una íntima relación entre sí, no obstante que el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una o alguna de dichas normas, pues el perjuicio a su esfera jurídica deriva del propio sistema normativo.

Esta situación ocurre en el presente juicio de amparo pues, si bien en el oficio emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la COFEPRIS se aplican expresamente algunos de los artículos reclamados, los demás que también son reclamados en el presente juicio guardan una íntima relación entre sí y son aplicados implícitamente; máxime que a través del sistema como tal, es que se genera la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos pues es en el propio sistema que se crea una categoría sospechosa y se trata de forma desigual al quejoso."

(énfasis añadido).

Como ese Alto Tribunal podrá advertir, en la demanda de amparo se planteó no sólo la inconstitucionalidad de la LGS o el CPF sino que se planteó la inconstitucionalidad

28

del sistema normativo compuesto por la LGS, el CPF y los Lineamientos COFEPRIS, a través del cual se impide a la quejosa ahora recurrente, llevar a cabo la actividad de siembra, cultivo y cosecha de la planta de marihuana cuando ésta tenga un contenido igual o menor a 1% de THC.

Es decir, lo que se controvierte en el presente juicio de amparo es el sistema normativo como tal -sistema prohibitivo- compuesto por la LGS, el CPF y los Lineamientos COFEPRIS, a través de los cuales se crea una prohibición normativa para que la quejosa lleve a cabo la actividad de siembra, cultivo y cosecha de la planta de marihuana cuando ésta tenga un contenido igual o menor a 1% de THC.

En ese sentido, se señaló claramente en la demanda de amparo, que existió una aplicación implícita de los Lineamientos en el oficio COFEPRIS, sin que el Juez de Distrito si quiera analizara esta situación al momento de concluir, ilegalmente, la improcedencia del amparo, ante la supuesta falta de un acto concreto de aplicación.

Ello es así, pues si el Juez de Distrito hubiera analizado la demanda de amparo tal como fue planteada, analizando tanto los actos reclamados, los antecedentes, la Consideración Previa hecha valer y los Conceptos de Violación formulados, hubiera advertido que no se impugnó un artículo o artículos en concreto de alguna disposición legal sino que se controvertió la constitucionalidad de un sistema normativo integrado por la LGS, el CPF y los Lineamientos COFEPRIS.

Por ello, si el a-quo hubiera cumplido con la Ley de Amparo, no hubiera requerido un acto concreto de aplicación -o su demostración- respecto de los Lineamientos COFEPRIS, cuando éstos se impugnaron como sistema normativo en unión de diversas disposiciones legales, respecto de las cuales sí se acreditó el acto concreto de aplicación e, incluso, en ese sentido fue reconocido por el propio Juez; más aún cuando en la propia demanda de amparo se señala de forma clara que los referidos Lineamientos fueron aplicados implícitamente.

Confirman, entonces, la ilegalidad de la sentencia dictada por el Juez, el siguiente criterio de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por mayoría de razón, que es de rubro y texto siguiente:

"IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). LAS NDRMAS QUE PREVEN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL CONSTITUYEN UN SISTEMA NDRMATIVO, Y BASTA LA APLICACIÓN DE UNA SOLA DE ÉSTAS PARA PODER CONTROVERTIRLAS CONJUNTAMENTE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Suprema

99

Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, tratándose de disposiciones legales que guarden una estrecha vinculación o relación entre sí, el gobernado está legitimado para impugnar todas las que le sean aplicables o que eventualmente se le puedan aplicar, siendo suficiente que esté acreditado el acto de aplicación de una de las normas o que se ubica en el supuesto de una de ellas para controvertir todas las demás, conjuntamente, como un sistema normativo. Ello es así, en razón de que no existe justificación para obligar al quejoso a promover múltiples juicios de amparo para controvertir por separado cada una de las normas que forman parte del sistema pues, precisamente por la relación directa que existe entre ellas, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna o algunas necesariamente ha de repercutir en el sentido, alcance o aplicación de las demás. En ese sentido, los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 759, 760, 761, 762, 763 y 764 del Código Civil para el Estado de Veracruz, se encuentran estrechamente relacionados en la medida en que en ellos se especifican las peculiaridades inherentes al procedimiento que ante autoridad judicial ha de seguirse en esa entidad federativa para la adecuación de un acta del estado civil, como lo es el acta de nacimiento, cuando se solicite variar el nombre o algún otro dato esencial como lo es el sexo o género de la persona registrada. Ahora, si bien conforme a la técnica que rige el juicio de amparo, tratándose de normas heteroaplicativas, por regla general respecto a cada una de ellas se requiere la demostración de un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso para su procedencia, lo cierto es que las normas que prevén un procedimiento ante autoridad judicial para obtener la adecuación del acta de nacimiento, a fin de que sea acorde con la identidad de género auto-percibida, constituyen un sistema normativo que legitima al interesado a controvertirlas conjuntamente, bastando la aplicación de una sola de éstas. Lo anterior es congruente con los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues cuando una persona desea realizar dicha adecuación en los registros públicos y en los documentos de identidad, no debe someterse a cargas irrazonables para que ello tenga lugar, por lo que no debe exigirsele que cada una de las normas que conforman el procedimiento respectivo se controviertan por separado y a través de múltiples juicios de amparo, ya que ello derivaría en un resultado diverso al que pretende evitarse.¹⁶

Como se advierte del criterio anterior, si estamos frente a un sistema normativo cuyos componentes guardan estrecha relación entre sí, el gobernado está legitimado para impugnar todas las normas que le sean aplicables o le puedan aplicar, siendo suficiente que se acredite el acto de aplicación de una de las normas. Más aún, señala la Suprema Corte que no existe justificación para obligar al quejoso a promover múltiples amparos en donde se controvierta por separado cada una de las normas que forman el sistema, tal como lo pretende ilegalmente el Juez en la sentencia ahora recurrida.

¹⁶ Época: Décima Época, Registro: 2016669, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Torno I, Materia(s): Común, Civil, Tesis: 1a. CCXXXV/2018 (10a.), Página: 320

30

Lo anterior, ocurrió en la especie, pues como ese Tribunal ad-quem podrá advertir de la simple lectura de la demanda de amparo -integral y no de forma parcial como ilegalmente lo realizó el a-quo- podrá advertir que se impugnó un sistema normativo compuesto por la LGS, el CPF y los Lineamientos COFEPRIS y que, además, se acreditó plenamente la aplicación de diversas normas a través del oficio COFEPRIS.

Por ello, como lo señala el criterio de esa Suprema Corte, es ilegal -como lo hizo el Juez- exigir al quejoso se acredite el acto concreto de aplicación de todas y cada una de las normas que forman el sistema normativo impugnado.

Incluso, la ilegalidad en la actuación del Juez se acredita aún más, al tomar en cuenta que en ningún momento analizó lo señalado por mi representada, en el sentido de que los Lineamientos COFEPRIS fueron aplicados implícitamente, como sistema normativo -sistema prohibitivo- en el oficio COFEPRIS, pues el a-quo sólo señala sin mayor motivación que se trata de un amparo heteroaplicativo y que el quejoso no acreditó ningún acto de aplicación.

Es decir, en esta parte, la sentencia también es ilegal por falta de exhaustividad en el análisis de los planteamientos formulados por la quejosa en su demanda de amparo.

Aún más, tan es ilegal la sentencia que ahora se recurre que, incluso, esta consideración del a-quo es contraria a las jurisprudencias 2ª/J. 91/2018 (10ª) y 2ª/J. 100/2008, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁷ -que fueron citadas a fojas 26 y 27 de la demanda de amparo- y que, en esencia, establecen que en el juicio de amparo se puede impugnar un sistema normativo cuando los artículos o numerales estén estrechamente vinculados entre sí, tal como ocurre en el presente caso.

¹⁷ "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considere que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trata, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que queda al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que esa sistema no pueda operar sin alguna de ellas." Época: Décima Época, Registro: 2017869, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a/J. 91/2018 (10a.), Página: 938.

"AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrarse junto con otras un sistema impugnado a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisoluble en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas." Época: Novena Época Registro: 169558, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 2a/J. 100/2008, Página: 400.

En efecto, al haberse impugnado un sistema normativo y demostrar el acto de aplicación de una o varias norma de ese sistema -conforme al criterio de la Suprema Corte antes señalado- es procedente el juicio en contra de todas las normas que integran el propio sistema reclamado, sin que se tenga que acreditar un acto concreto de aplicación por cada norma controvertida; sin embargo, de forma ilegal, el a-quo determinó que el quejoso tenía la carga de acreditar un acto de aplicación por cada uno de los artículos de los Lineamientos COFEPRIS impugnados, no obstante que se acreditó plenamente la aplicación de diversos numerales integrantes del sistema controvertido y que, además, así fue reconocido por el propio Juez.

Por ello, al haberse demostrado la ilegalidad de la sentencia recurrida, al haber sobreido indebidamente el juicio respecto de los Lineamientos COFEPRIS, lo procedente es que la misma se revoque y se levante el sobreseimiento dictado por lo que hace a los Lineamientos COFEPRIS.

Independientemente de lo anterior, que es más que suficiente para revocar la sentencia recurrida, existe un motivo adicional de ilegalidad, pues el Juez determinó que el quejoso tenía que acreditar un acto de aplicación por cada artículo que reclamaba de los Lineamientos COFEPRIS.

Sin embargo, con esa consideración del a-quo sólo se acredita aún más la ilegalidad de la sentencia, pues a través de las mismas, se advierte que se emitió la sentencia sin analizar la demanda de amparo, tal como fue planteada por el quejoso en franca violación a las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo.

En efecto, el quejoso demostró en su demanda de amparo que el sistema normativo es inconstitucional (incluyendo, por supuesto, los Lineamientos COFEPRIS), en virtud de que violan el derecho humano a la igualdad, libertad de trabajo, proporcionalidad de la medida legislativa, generando una categoría sospechosa que no está motida de forma reforzada.

Con ello, si el A-quo hubiera analizado la demanda en su integridad, hubiera advertido que se reclama el sistema normativo (incluyendo los Lineamientos COFEPRIS) pero que el propio sistema implica una regulación permisiva para las actividades cuya finalidad es la investigación científica o médica y, por otro lado, una regulación prohibitiva respecto de actividades industriales. Lo que trae como consecuencia necesaria que los artículos que establecen el subsistema

2
3
permisivo no hayan sido aplicados a la quejosa pues, justamente, lo que se reclamó en el juicio de amparo, es una violación al derecho humano a la igualdad.

Incluso, esta ilegalidad se hace patente si se toma en cuenta lo señalado en la demanda de amparo, específicamente en el Noveno Concepto de Violación **-que no fue analizado por el Juez de Distrito-** y que señala lo siguiente:

"NOVENO.- Efectos que, se estima, deberá contener el amparo a favor de mi representada.

Al haberse demostrado la inconstitucionalidad del sistema normativo ahora reclamado, integrado por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos emitidos por la COFEPRIS, al concederse el amparo a mi representada y, a efecto de que, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituya en el pleno goce del derecho violado, se estima que los efectos de dicha protección constitucional deberán no sólo desincorporar de la esfera jurídica de la peticionaria la obligación de acatar las normas inconstitucionales sino que, además, se deberá prever, entre otros, lo siguiente:

- Obligar por efecto del amparo concedido, a que la COFEPRIS resuelva de forma favorable la solicitud de autorización que promovió mi representada;
- Permitírsele a mi representada importar o adquirir en territorio nacional las semillas necesarias para la siembra de la cannabis sativa L (cáñamo) y,
- Que se le permita sembrar, cultivar y cosechar, con fines industriales, cannabis sativa L (Cáñamo) a efecto de poder procesar este último y obtener CBD.

Estos efectos son conformes a lo señalado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 237/2014 en donde, en la parte que interesa, señaló:

(se transcribe)


Por lo tanto, se estima que el efecto de la protección constitucional solicitada no sólo debe consistir en desaplicar las normas que resultaron inconstitucionales sino que, también, se obligue a todas las autoridades responsables a respetar los derechos paralelos que tiene mi representada y que resultan necesarios para llevar a cabo o ejercer los derechos que han sido violados por los actos reclamados."

Es decir, que al haberse demostrado en la demanda de amparo la violación al derecho humano a la igualdad, lo que se solicitó como efecto natural del juicio, fue que se le permitiera a la quejosa acceder a esa regulación permisiva, por lo que resulta ilegal exigir al propio quejoso demostrar el acto de aplicación de una norma cuya inconstitucionalidad se hace valer por violación, justamente, al derecho humano de igualdad.

3

Ello, pues la violación a la igualdad ocurre porque el sistema normativo permisivo (los Lineamientos COFEPRIS) sólo aplica a actividades con fines médicos o científicos, por lo que resulta innecesario acreditar el acto de aplicación de una norma cuya constitucionalidad, bajo este argumento, es cuestionada pues sería material y jurídicamente imposible demostrar la aplicación de normas que violan el derecho humano a la igualdad y que excluyen al quejoso, justamente, de su aplicación.

Confirma la ilegalidad de la sentencia recurrida, el criterio sustentado por ese Poder Judicial de la Federación, que es de rubro y texto siguientes:



"RENTA. SI SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL CONSIDERAR QUE VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, BASTA QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE QUE ES SUJETO DEL TRIBUTO PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO, SIN QUE DEBA EXIGIRSE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. Cuando en el amparo se plantea la inconstitucionalidad del artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta porque da un trato inequitativo, privilegiando o beneficiando a las sociedades cooperativas de producción respecto de sociedades mercantiles que se ubican en la misma hipótesis de causación del tributo, al determinarlo conforme a reglas distintas, asimilando el régimen de las primeras al de las personas físicas con actividades empresariales, lo que implica excluirlas de realizar pagos provisionales del mencionado gravamen, resulta un contrasentido exigir que el quejoso demuestre la aplicación tácita o expresa de la citada disposición, pues precisamente ese planteamiento implica que se le ha excluido de ella; de ahí que en esos casos el interés jurídico se acredita con la demostración de que se es sujeto pasivo de la norma combatida, como en el caso, con la sola exhibición del comprobante del pago provisional que están obligadas a realizar las personas morales en términos del artículo 14 de la aludida ley, sin que deba exigirse un acto concreto de aplicación."¹⁸

Así pues, resulta un contrasentido (ilegalidad) exigir que se demuestre un acto de aplicación de una disposición o sistema que se impugna por violación al derecho humano a la igualdad pues, precisamente, el planteamiento es que el quejoso ha sido excluido de dicho tratamiento.

Ello ocurre en el presente caso, pues lo que se reclamó en la demanda de amparo es que las disposiciones de los Lineamientos COFEPRIS resultaban (como sistema) violatorias del derecho humano a la igualdad, por lo que resulta un contrasentido el ilegal criterio sustentado por el Juez de Distrito, en el sentido de exigirle al quejoso acreditar un acto concreto de aplicación de las mismas cuando el planteamiento

¹⁸ Época: Novena Época, Registro: 172155, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: XIX.2o.A.C.40 A, Página: 1166.

39
hecho en toda la demanda de amparo, es que el quejoso está excluido -de forma inconstitucional- de su aplicación.

D. Incluso, la ilegalidad de la sentencia se acredita aún más, por la falta de congruencia interna en la misma, con lo señalado por el propio Juez al desestimar la causal de improcedencia hecha valer por el Ejecutivo Federal respecto de la falta de interés jurídico o legítimo del quejoso (inciso d) del Considerando Sexto) en donde expresamente sostuvo lo siguiente:

"Con independencia de que los preceptos legales reclamados no hayan sido citados en su totalidad por la autoridad responsable cuando negó la autorización que la sociedad quejosa solicitó, su negativa conllevó su aplicación implícita porque dichas disposiciones normativas configuran un sistema prohibitivo que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal e impone un obstáculo jurídico para realizar lícitamente las acciones sobre las que versó la solicitud.

De modo que la autoridad responsable, al negar la autorización para realizar diversas actividades vinculadas con la importación, siembra, cultivo y cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC, implícitamente fundamentó su actuación a partir de los postulados de dicho sistema prohibitivo, los cuales como se explicó en el apartado de existencia, están contemplados en los artículos aludidos y, como se desprende de su contenido, ciertamente le impiden otorgar esa autorización sanitaria, por lo que sí fueron aplicados en perjuicio del quejoso

(...)

En el entendido que, los preceptos legislativos reclamados, junto con otras disposiciones, son parte de un sistema normativo, y ante tal circunstancia, de acuerdo con lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del juicio de amparo contra leyes que nos ocupa, basta que la parte quejosa acredite ubicarse en el supuesto jurídico de una de las normas impugnadas, tratándose de normas autoaplicativas, o bien acredite el acto de aplicación de alguna de ellas, en el caso de normas heteroaplicativas, para estimarla legitimada para controvertir las demás de manera conjunta, con independencia de que respecto de éstas no demuestre el perjuicio que le ocasionan desde su sola vigencia o con motivo de un acto concreto de aplicación, según sea el caso."

Como ese Alto Tribunal podrá advertir de las consideraciones recién transcritas, el propio Juez de Distrito desestimó la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, bajo el argumento de que al impugnar un sistema normativo que implique una prohibición, tratándose de un amparo heteroaplicativo, basta con que se acredite el acto de aplicación de una norma del propio sistema,

sin que exista la necesidad de acreditar la aplicación de todas y cada una de las normas cuestionadas en el propio sistema.

Sin embargo, en forma por demás incongruente y violatoria del principio de congruencia interna de toda resolución judicial¹⁹, el Juez determinó sobreseer en el juicio respecto de los Lineamientos COFEPRIS, en virtud de que el quejoso no acreditó un acto concreto de aplicación de cada uno de los numerales reclamados, no obstante que, como se ha acreditado, los mismos fueron reclamados como un

Por lo tanto, al haberse demostrado la ilegalidad de la sentencia recurrida, lo procedente es que se revoque la misma y, en consecuencia, se levante el sobreseimiento decretado ilegalmente por el a-quo respecto de los Lineamientos COFEPRIS.

E. Por último, es ilegal la sentencia ahora recurrida, pues en la misma se reconoce que (i) los numerales reclamados de los Lineamientos COFEPRIS están dirigidos a quienes realicen la actividad pero con fines médicos o científicos y (ii) que el planteamiento del quejoso lo hace consistir en una violación al derecho humano a la igualdad y no obstante ello, sobresee en el juicio ante la supuesta falta de acreditación de los actos de aplicación de los lineamientos.

En efecto, en la sentencia el a-quo consideró lo siguiente:

Así, el artículo 5, establece que tratándose de la Cannabis se considera que la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, consumo, y, en general, todo acto relacionado con ella, se realizan con fines de investigación médica y científica, cuando dichas actividades se desarrollen conforme al Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS.

Mientras que en el diverso 6, señala que para el caso de cualquier Derivado Farmacológico de la Cannabis, se considera que la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con ella, se realizan con fines de investigación médica y científica, cuando dichas actividades se desarrollen conforme al Protocolo de Investigación autorizado por la COFEPRIS.

El artículo 24 establece los términos en que podrá llevarse a cabo la importación de semillas y plantas de la Cannabis, para fines de investigación médica y científica.

¹⁹ Resulta aplicable, para demostrar la ilegalidad de la sentencia ahora recurrida, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Época: Sexta Época, Registro: 272666, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XI, Cuarta Parte, Materia(s): Común, Tesis, Página: 193

36

Por su parte el numeral 35 establece los términos en que podrá llevarse a cabo la fabricación, comercialización, exportación e importación de los productos, materia prima o sustancias distintos a Medicamentos que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones de hasta el 1% de THC, así como de los productos, materia prima o sustancias industriales en general que sean o contengan derivados de la cannabis conocidos como cáñamo, cuya característica sea la presencia de trazas e incluso ausencia de THC (éstos últimos para su uso industrial).

Los numerales 42, 43 y 44 señalan los términos en que habrán de llevarse los permisos de importación y exportación de los productos referidos en el Título IV de dichos lineamientos.

Finalmente en los artículos 46 y 48 se regula lo relativo a la publicidad y promoción de medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la cannabis y de los productos referidos en el Título IV de los lineamientos relacionados."

Como lo reconoce el propio Juez en las consideraciones recién transcritas, tenemos lo siguiente:



- El artículo 5° de los Lineamientos establece la regulación tratándose a los actos relacionado con la cannabis que se realizan con fines de investigación médica o científica y que las actividades se realicen cumplimiento al protocolo correspondiente;
- El artículo 6° de los Lineamientos señala que en cualquier derivado farmacológico se considera que es con finés de investigación médica o científica cuando estas actividades se realicen conforme al Protocolo correspondiente;
- El artículo 24 de los Lineamientos regulan lo relativo a la importación de semillas y plantas de cannabis para fines de investigación médica o científica;
- El artículo 35 de los Lineamientos señalan los términos en que podrá llevarse a cabo la fabricación, comercialización, exportación e importación de los productos, materia prima o sustancias distintos a Medicamentos que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones de hasta el 1% de THC;
- Los numerales 42, 43 y 44 señalan los términos en que habrán de llevarse los permisos de importación y exportación;
- Los artículos 46 y 48 se regulan lo relativo a la publicidad y promoción de medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la cannabis

Como se advierte de la transcripción anterior las propias consideraciones del a-quo confirman la procedencia del amparo en contra de los Lineamientos COFEPRIS/ pues el propio Juez reconoce que regulan supuestos que no le aplican al quejoso (investigación médica o científica).

32

Sin embargo, resulta ilegal el que haya sobreseído ante la supuesta falta de actos de aplicación pues, justamente, se reclamaron esas normas, bajo el argumento de violación al derecho humano a la igualdad y que, como lo reconoce el a-quo, no le aplican al propio quejoso, de ahí la violación al derecho humano a la igualdad.

Por lo tanto, al haberse acreditado plenamente la ilegalidad de la sentencia, al exigir acreditar actos de aplicación de normas que son cuestionadas por violar el principio de igualdad, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y levantar el sobreseimiento ilegalmente dictado por el Juez de Distrito respecto de los Lineamientos COFEPRIS, a efecto de conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la quejosa.

CUARTO.- Violación a las fracciones I, II y IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, al artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, así como indebida aplicación de interpretación de la jurisprudencia 2ª./J. 42/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo²⁰.

La sentencia que ahora se recurre, resulta contraria a las fracciones antes señaladas del artículo 74 de la Ley de Amparo así como al artículo transitorio referido, en virtud de que omitió fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, al momento de analizar los argumentos hechos valer por mi representada respecto a la violación al derecho humano a la igualdad así como, también, omite hacer un análisis sistemático de todos los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo y su ampliación y, por último, al formular su ilegal análisis en materia de igualdad, omitió motivar sus consideraciones en las que se apoyó para negar el amparo a mi representada.

Adicionalmente, la sentencia resulta ilegal, pues aplicó e interpretó indebidamente la jurisprudencia 2ª./J. 42/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se acreditará plenamente a lo largo del presente Agravio.

A. Ahora bien, en primer lugar, para acreditar plenamente la ilegalidad en que incurrió el Juez de Distrito, conviene tener presente lo señalado en el Considerando, en la parte que formula el análisis de los argumentos de violación al derecho humano planteado por mi representada en la demanda de amparo.

²⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.

Así, las ilegales consideraciones del a-quo son las siguientes:

De lo expuesto, es indispensable destacar que la medida cuya constitucionalidad será materia de análisis en el presente juicio es el "sistema de prohibiciones" configurado por los artículos impugnados, el cual forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos; asimismo, se precisa que de la solicitud de la parte quejosa presentada ante la autoridad administrativa y de la demanda de amparo se advierte que su pretensión material es obtener la autorización sanitaria que solicitó respecto de los actos consistentes en:

- a) La importación, siembra, cultivo y cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC.
- b) El procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de canabidiol (CBD).
- c) La comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales; y,
- d) La importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC.

Así, la litis en el presente asunto consiste en determinar si el sistema de prohibiciones previsto en los artículos reclamados, es inconstitucional porque no supera las gradas del test de proporcionalidad y porque vulnera, entre otros derechos, el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo, al impedir realizar diversas acciones vinculadas con la importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC.

(...)

De la transcripción anterior se desprende que la Ley General de Salud, en su artículo 235 Bis, prescribe la obligación de la Secretaría de Salud para diseñar y ejecutar las políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.

Asimismo, en su artículo 237 señala la prohibición de los actos referidos en el artículo 235 de la propia ley respecto de las sustancias y vegetales: Opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxilium novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Cabe señalar que los actos que refiere el artículo 235 de la Ley General de Salud son: la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto

relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga.

En el artículo 245 se prevé una clasificación de las sustancias psicotrópicas, para efectos de las medidas de control y vigilancia que deberán tomar las autoridades sanitarias.

Dicha clasificación se realiza en cinco grupos y el Tetrahidrocannabinol que contenga concentraciones mayores al 1% de los siguientes isómeros: Δ^6 a (10a), Δ^6 a (7), Δ^7 , Δ^8 , Δ^9 , Δ^{10} , Δ^9 (11) y sus variantes estereoquímicas, se encuentra clasificado en el segundo de los grupos por considerar que tiene algún valor terapéutico pero constituye un problema grave para la salud pública.

Asimismo, en el cuarto grupo se encuentra el Tetrahidrocannabinol que contenga concentraciones iguales o menores al 1% de los siguientes isómeros: Δ^6 a (10a), Δ^6 a (7), Δ^7 , Δ^8 , Δ^9 , Δ^{10} , Δ^9 (11) y sus variantes estereoquímicas, por considerar que se trata de una sustancia que tiene amplios usos terapéuticos y constituye un problema menor para la salud pública.

De igual forma se advierte que los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

Finalmente, de la porción normativa de la legislación penal transcrita se desprende la prohibición para la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana cuando dichas actividades no se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

Ahora bien, del análisis sistemático a los numerales señalados se advierte, en la parte que aquí interesa, lo siguiente:

- La Secretaría de Salud debe diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas.

- Se encuentra prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

- Que el tetrahidrocannabinol (THC) que sea o contenga en concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: Δ^6 a (10a), Δ^6 a (7), Δ^7 , Δ^8 , Δ^9 , Δ^{10} , Δ^9 (11) y sus variantes estereoquímicas, se encuentra clasificado en la Ley General de Salud como una sustancia psicotrópica que tiene algún valor terapéutico, pero que constituye un problema grave para la salud pública.



10

▪ Que el tetrahidrocannabinol (THC) que sea o contenga en concentraciones iguales o menores al 1%, los siguientes isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas se encuentra clasificado en la Ley General de Salud como una sustancia psicotrópica que tiene amplios usos terapéuticos y constituye un problema menor para la salud pública.

▪ Los productos que tengan derivados de la cannabis en concentraciones al 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, únicamente podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

▪ Las autorizaciones para importar, entre otros, derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, serán otorgadas por la Secretaría de Salud exclusivamente a las droguerías para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficiales que el propio establecimiento elabore y a los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría.

▪ La siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana será punible cuando estas actividades no se lleven a cabo con fines médicos y científicos.

Así, se advierte que tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal establecen un sistema prohibitivo respecto a la siembra, cultivo y cosecha de las plantas de marihuana cuando estas actividades no se lleven a cabo con fines médicos o científicos; es decir, si será punible cualquiera de esas actividades cuando se lleven a cabo con fines distintos, como el uso industrial o comercial.

Siendo precisamente dicha prohibición la cuestionada por la solicitante de amparo en el juicio y, en particular, en el concepto de violación que se analiza, la distinción que se realiza respecto a la autorización y no punibilidad de las actividades consistentes en la siembra, cultivo y cosecha de las plantas de marihuana con fines científicos o médicos y estas mismas actividades cuando se destinen a fines industriales.

Tomando en cuenta las premisas mencionadas, a continuación se emprenderá el análisis de igualdad siguiendo los criterios definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.42/2010.

En primer lugar, resulta imprescindible determinar si el parámetro de comparación sugerido por la parte quejosa es adecuado para llevar a cabo un juicio de igualdad entre los sujetos comparados y determinar si existe o no un tratamiento diferenciado que, en su caso, se encuentre justificado para no violentar el derecho de igualdad.

En este orden, es importante señalar que, si bien es cierto que conforme al artículo 198, último párrafo del Código Penal Federal, la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando dichas actividades se lleven a cabo con fines médicos o científicos y, en consecuencia, sí lo serán

cuando se lleven a cabo con diversa finalidad, es necesario establecer, en primer término, que la norma referida no distingue si la planta de marihuana que se pretenda sembrar, cultivar o cosechar contenga o no una concentración superior al 1.0% de tetrahidrocannabinol.

Por otro lado, como ya quedó anotado, el trato desigual denunciado como inconstitucional, se plantea a partir de que el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal prevé que la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando dichas actividades se lleven a cabo con fines médicos o científicos.

De tal suerte, el parámetro de comparación que realiza la quejosa es entre: a) las personas morales que lleven a cabo la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines médicos y científicos; y b) las personas morales que lleven a cabo la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines distintos, como lo es el uso industrial.

Delimitado lo anterior, es dable señalar que las situaciones respecto de los cuales la parte quejosa pretende hacer valer un trato discriminatorio no se encuentran en un plano de igualdad; es decir no existe una situación comparable, pues los motivos de distinción que realiza el sistema normativo analizado encuentran su origen en los fines para los cuales se realizan las actividades de siembra, cosecha y cultivo de la marihuana; así, los sujetos que pretenden realizar dichas actividades para fines médicos y científicos no se encuentran en una situación de igualdad respecto de aquellos que pretendan hacerlo con fines diversos, como lo sería el industrial; y en ese orden de ideas tampoco se crea una categoría sospechosa como erróneamente lo asevera la solicitante de amparo.

En este sentido, al no existir una situación comparable respecto de la cual se deba llevar a cabo un análisis a la violación del derecho de igualdad, resulta infundado el concepto de violación analizado.

Se considera lo anterior, ya que, como se señaló con antelación, la igualdad jurídica es un derecho expresado a través de un principio adjetivo que consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante, cuestión que no acontece en el caso a estudio, pues como ha quedado establecido, los fines por los cuales la norma establece una distinción de trato son diferentes (médicos y científicos/uso industrial).

En efecto, no puede entablarse una relación igualitaria entre la posición concreta que guarda una persona colocada en una situación determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a otra situación diferente; es decir, no es dable afirmar que exista un trato desigual entre personas que no se hallen en una misma situación, pues lo que la Constitución Federal ampara no es una igualdad absoluta, sino una igualdad entre personas que se encuentren en una posición idéntica o semejante.

(...)



42

Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra del Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código.

(...)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

(...)

Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Desart MX, sociedad anónima de capital variable contra el Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código, así como su aplicación, consistente en la emisión del oficio 183300EL040837, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia."



Como ese Alto Tribunal podrá advertir de la simple lectura de las consideraciones anteriores, el Juez de Distrito determinó negar el amparo, realizando su *análisis* de constitucionalidad "*siguiendo los lineamientos definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª/J. 42/2010*" y tomando en cuenta los siguientes elementos esenciales:

- De la porción normativa de la legislación penal se desprende la prohibición para la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana cuando dichas actividades no se lleven a cabo con fines médicos y científicos;
- Los productos que tengan derivados de la cannabis en concentraciones al 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, únicamente podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria;
- La siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana será punible cuando estas actividades no se lleven a cabo con fines médicos y científicos;
- Tanto la LGS como el CPF establecen un sistema prohibitivo respecto a la siembra, cultivo y cosecha de las plantas de marihuana cuando estas actividades no se lleven a cabo con fines médicos o científicos; es decir, sí será punible cualquiera de esas actividades cuando se lleven a cabo con fines distintos, como el uso industrial o comercial;

- B
- Resulta imprescindible determinar si el parámetro de comparación sugerido por la parte quejosa es adecuado para llevar a cabo un juicio de igualdad entre los sujetos comparados y determinar si existe o no un tratamiento diferenciado que, en su caso, se encuentre justificado para no violentar el derecho de igualdad;
 - El CPF no distingue si la planta de marihuana que se pretenda sembrar, cultivar o cosechar contenga o no una concentración superior al 1.0% de tetrahidrocannabinol;
 - El trato desigual denunciado como inconstitucional, se plantea a partir de que el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal prevé que la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando dichas actividades se lleven a cabo con fines médicos o científicos;
 - El parámetro de comparación que realiza la quejosa es entre: a) las personas morales que lleven a cabo la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines médicos y científicos; y b) las personas morales que lleven a cabo la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines distintos, como lo es el uso industrial;
 - Las situaciones respecto de los cuales la parte quejosa pretende hacer valer un trato discriminatorio no se encuentran en un plano de igualdad;
 - No existe una situación comparable, pues los motivos de distinción que realiza el sistema normativo analizado encuentran su origen en los fines para los cuales se realizan las actividades de siembra, cosecha y cultivo de la marihuana; así, los sujetos que pretenden realizar dichas actividades para fines médicos y científicos no se encuentran en una situación de igualdad respecto de aquellos que pretendan hacerlo con fines diversos, como lo sería el industrial;
 - Tampoco se crea una categoría sospechosa como erróneamente lo asevera la solicitante de amparo;
 - Al no existir una situación comparable respecto de la cual se deba llevar a cabo un análisis a la violación del derecho de igualdad, resulta infundado el concepto de violación analizado.
 - Los fines por los cuales la norma establece una distinción de trato son diferentes (médicos y científicos/uso industrial);
 - No puede entablarse una relación igualitaria entre la posición concreta que guarda una persona colocada en una situación determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a otra situación diferente; es decir, no es dable afirmar que exista un trato desigual entre personas que no se hallen en una misma situación, pues lo que la Constitución Federal ampara no es una igualdad absoluta, sino una igualdad entre personas que se encuentren en una posición idéntica o semejante.




44

B. Ahora bien, en primer lugar la sentencia recurrida resulta ilegal, en virtud de que aplicó un criterio que no resultaba aplicable, como premisa del análisis de igualdad planteado por el quejoso en sus Conceptos de Violación.

En efecto, el quejoso en su Primer Concepto de Violación demostró plenamente la violación del sistema normativo al derecho humano de igualdad, previsto en el artículo 1º de la Constitución Federal, así como en los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y el numeral 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es decir, el quejoso planteó y demostró la inconstitucionalidad del sistema normativo a la luz del nuevo *estándar* constitucional en materia de derechos humanos y la reforma constitucional al juicio de amparo.



Sin embargo, el a-quo ilegalmente aplicó un criterio de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido previo a las reformas constitucionales antes señaladas, lo que, inevitablemente, se tradujo en una ilegalidad de la sentencia reclamada, ya que el *estándar* de igualdad previsto en el artículo 1º constitucional y los tratados internacionales, es por completo distinto al utilizado en la Novena Época por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir la jurisprudencia 2ª/J. 42/2010.

En efecto, en la sentencia el a-quo determinó, ilegalmente, lo siguiente:

"Tomando en cuenta las premisas mencionadas, a continuación se emprenderá el análisis de igualdad siguiendo los criterios definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.42/2010."

Sin embargo, al utilizar un criterio emitido por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación el Juez de Distrito violó lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la propia Ley de Amparo, ya que aplicó y utilizó un criterio emitido previo a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo y, además, analizó la demanda de forma indebida, pues los argumentos de igualdad ahí expresados, se sustentan en el nuevo *estándar* constitucional, sin que el Juez hubiera advertido esa situación.

Así, al aplicar un criterio emitido previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo, el Juez de Distrito transgredió lo señalado en las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo así como el artículo sexto transitorio de la propia Ley, pues no realizó un análisis sistemático de todos los conceptos de violación hechos valer en la demanda y, en especial, sobre la argumentación llevada a cabo en los Conceptos de Violación.

De haber aplicado el estándar de igualdad previsto en el artículo 1º constitucional vigente, el Juez, indefectiblemente, hubiera concluido que el sistema normativo controvertido resulta contrario al Pacto Federal, pues no obstante que estamos frente a una misma categoría de sujetos (quienes se dediquen a la siembra, cultivo o cosecha de planta de marihuana) la norma crea una categoría sospechosa pues distingue y trata desigual a los sujetos exclusivamente por la finalidad o destino del bien, es decir, la actividad es la misma, pero el sistema normativo otorga un trato desigual (e injustificado) dependiendo de si la finalidad del producto es para fines industriales o para fines médicos y científicos.

Por ello, al haberse demostrado la ilegalidad de la sentencia recurrida, lo procedente es que ese Tribunal ad-quem revoque la misma y, en su lugar, conceda la protección constitucional solicitada por mi representada.

C. Independientemente de lo anterior, que es más que suficiente para revocar la sentencia recurrida, existe un elemento adicional de ilegalidad en las consideraciones del Juez de Distrito y que consiste en que aplicó e interpretó de forma indebida el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 2ª./J. 42/2010.

En efecto, en la sentencia que ahora se recurre, el Juez señaló lo siguiente:

"Tomando en cuenta las premisas mencionadas, a continuación se emprenderá el análisis de igualdad siguiendo los criterios definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.42/2010."

Así, se advierte que la premisa de análisis del Concepto de Violación formulado por mi representada en su demanda de amparo, se determinó siguiendo los criterios definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 42/2010, sin embargo, el a-quo aplicó e interpretó indebidamente dicho criterio y, por lo tanto, concluyó de forma ilegal que el argumento hecho valer es infundado.

Ahora bien, para demostrar cómo fue aplicado e interpretado indebidamente dicho criterio jurisprudencia, en primer lugar, hay que tener presente el contenido del mismo:

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto

46

constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos al diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."²¹

Como se advierte del propio criterio, tenemos que el análisis de igualdad presupone una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, por lo que el control de constitucionalidad de normas violatorias de este derecho humano no sólo se reduce a un juicio abstracto y de comparación entre la propia norma y la Constitución sino que requiere, necesariamente, el incluir otro régimen jurídico que funcione como

²¹ Época: Novena Época, Registro: 164779, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 42/2010, Página: 427

punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto.

Para ello, requiere elegir un término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en el mismo, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de individuos de otro régimen y si el trato otorgado por las distintas normas jurídicas es diferente.

Por último, conforme al criterio de referencia, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, entonces, se deberá analizar si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida.

No obstante la claridad del propio criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el a-quo lo aplicó e interpretó indebidamente, pues no obstante que se demostró en la demanda de amparo que se está frente a dos sujetos iguales (quienes siembren, cultiven o cosechen la planta de marihuana), el sistema jurídico les otorga un trato diferenciado dependiendo, exclusivamente de la finalidad a la que se destine dicho producto pues, por un lado, se permite esta actividad cuando la finalidad sea médica o científica y, por el contrario, cuando se destine a usos industriales constituye un delito, es decir, que sólo bajo esta finalidad se encuentra prohibida la misma actividad.

Es decir, el régimen jurídico a comparar es el de la consecuencia de la actividad, tal como se planteó en la demanda de amparo y que no fue analizado por el a-quo, ya que el término de comparación apropiado es la actividad que se desarrolla y, en este caso, es la siembra, cultivo y cosecha de la planta de marihuana.

Sin embargo, si el a-quo hubiera analizado el argumento tal como fue planteado en la demanda de amparo, hubiera concluido necesariamente en la inconstitucionalidad del sistema normativo, pues el término de comparación (la actividad de siembra, cultivo y cosecha) es la misma, aunque las consecuencias jurídicas cambian dependiendo de la finalidad a la que se destine el producto, lo cual constituye, justamente, la violación al derecho humano a la igualdad.

Por ello, resulta por demás ilegal la sentencia del a-quo, ya que pretendió hacer el análisis de igualdad, aplicando el término de comparación apropiado no sobre la actividad (siembra, cultivo y cosecha) sino sobre la finalidad (uso medicinal/científico frente al industrial) aplicando, entonces, de forma indebida el criterio jurisprudencial de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.

118

Aún más, de los propios precedentes que dan origen a la jurisprudencia 42/2010 se advierte la aplicación e interpretación indebida e ilegal llevada a cabo por el a-quo.

Así, en la parte que interesa, las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia de referencia señalan lo siguiente:

1.- Ejecutoria del Amparo en Revisión 50/2010:

"En tal virtud, si bien la industria minera constituye un sector relevante del desarrollo económico nacional, tan es así que quedó comprendido en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, no revela que esté en igualdad o similares condiciones que otras áreas del desarrollo nacional, que amerite darle el mismo incentivo social, ya que el legislador, considerando la productividad, valora el tipo de ayuda que requiere determinado sector, puesto que respecto de la minería en el citado programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil ocho, se dijo:

(...)

Se insiste, el Estado al planear, conducir, coordinar y orientar las actividades económicas del país debe fomentar aquellas que sean de interés general; sin embargo, no necesariamente con la misma intensidad o a través del mismo mecanismo, como pretende la quejosa por el solo hecho de participar en un sector importante de la economía, sino que a partir del Plan Nacional de Desarrollo contenido en el artículo 26, párrafo segundo, constitucional, puede apreciar o ponderar el tipo de impulso económico que requieren las distintas áreas de desarrollo, ya que tocante a la minería no está clasificada para efectos económicos como prioritaria o estratégica, ni de algún instrumento estatal se evidencia una relevancia igual o superior a ellas, que conduzca a que los sujetos que pertenecen a dicho sector minero se encuentren en una situación de igualdad o similitud jurídica respecto de los beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 16, apartado A, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve.

2.- Ejecutoria del Amparo en Revisión 2131/2009:

"Ahora bien, en el artículo Décimo Primero del Decreto expedido por el Ejecutivo Federal, por el cual se establecen las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de noviembre de dos mil seis, transcrito en párrafos anteriores, se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las que se encuentre adscrito el servidor público Federal cubrirá, del presupuesto de egresos que tenga asignado, el impuesto sobre la renta que cause la percepción que reciban sus trabajadores por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año.

Es decir, que contrario a lo afirmado por los recurrentes, esa disposición no exenta a los trabajadores de la Administración Pública Federal del pago del impuesto sobre la renta que genere la percepción por concepto de aguinaldo, sino que el Ejecutivo Federal, en su calidad de patrón, asume la carga tributaria, lo cual indiscutiblemente sólo puede hacerlo respecto de sus trabajadores y en el ámbito de la relación obrero patronal.

(...)

Bajo esa tesitura, es de concluirse que la naturaleza de la relación de los trabajadores al servicio del Estado es diversa a la que revisten los trabajadores regulados por el apartado A del artículo 123 constitucional; asimismo, que estas dos categorías de trabajadores no se encuentran en un plano de igualdad, porque aun en los ingresos, prestaciones, derechos y obligaciones que derivan de la relación es disímil en uno y en otro caso, existen particularidades que les son establecidas por la Constitución Federal y las leyes que la reglamentan.

(...)

Por todo lo anterior, se colige que la desigualdad entre las dos clases trabajadoras referidas no puede violentar en forma alguna la garantía de igualdad contenida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, por una parte, esta garantía consiste en que todo individuo recibirá el mismo trato en atención con la situación jurídica en que se encuentre; de tal manera que si la propia Constitución establece en su artículo 123, situaciones jurídicas diferentes para los trabajadores que se rigen conforme a su apartado A, respecto de los que se encuentran comprendidos en su apartado B, no puede haber desigualdad de trato frente a la ley, pues cada quien se rige por una normatividad diferente y, por ende, se colocan en situación jurídica diversa.

3.- Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 1818/2008:

El anterior contexto revela que los servidores públicos que sufren un riesgo de trabajo, no se encuentran en una situación de igualdad respecto de aquellos que están sujetos a una pensión por jubilación o por vejez, además, tal como lo reconoce la propia quejosa en su demanda de amparo, en todos los casos se toma en consideración el salario de cotización neto, para efectos de calcular el monto de la pensión -por riesgo de trabajo, jubilación o vejez, según sea el caso-, no existiendo desigualdad de trato; motivo por el cual no existe violación a la garantía de igualdad.

4.- Ejecutoria del Amparo en Revisión 221/2009:

De acuerdo con los criterios que anteceden, esta Segunda Sala ha sostenido que la igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz

de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual en cuestión.

Precisado lo anterior, debe decirse que la norma reclamada no viola la garantía de igualdad, toda vez que el supuesto problema de igualdad se plantea respecto de disposiciones que si bien se refieren a registros marcarios, también lo es que corresponden a trámites de diversa naturaleza que se realizan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En efecto, el precepto reclamado no da un trato diferenciado entre aquellos gobernados que realizan trámites de registros marcarios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porque el artículo 151 de la Ley, que forma parte de su Título Cuarto y Capítulo VII, se refiere exclusivamente a los supuestos en los que una marca será nula y los plazos de prescripción que corresponde a cada acción de nulidad que ahí se mencionan; a diferencia de lo ordenado en el artículo 90 que forma parte del mismo Título pero prevé los supuestos en los que una marca no será registrable, sin que ahí se precisen plazos de prescripción, por lo que es claro que dadas las características de cada disposición no puede haber entre ellas problemas de igualdad.

En otras palabras, si bien el ordenamiento reclamado se dirige a industriales, comerciantes o prestadores de servicios y en general a aquellos gobernados interesados en realizar un trámite ante ese Instituto, supuesto en el cual el trato que se les otorgue debe ser igual, también lo es que ante dicho organismo se llevan a cabo distintas actuaciones, que se rigen por reglas que atienden a las particularidades que cada trámite amerite, lo que implica que los supuestos de las normas referidas que se encuentran enfocados a registros marcarios, contemplen distintas hipótesis y tratamientos que no por ser diferentes y tener sus particularidades provocan que la Ley viole la garantía de igualdad.

5.- Ejecutoria del Amparo en Revisión 1155/2008:

Es fundado, pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida, el agravio en el que se afirma que el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, de los Servidores Públicos, si es susceptible de ser revisado confrontándolo con el principio de igualdad, dado que lo que prevé esa disposición, son las sanciones a que los servidores públicos están sujetos por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 constitucional.

(...)

Lo anterior pone de relieve que, al establecer distintas consecuencias para las infracciones en las que haya incurrido un servidor público, así como precisar que las sanciones debe establecerlas el legislador en la ley, para

15

que la autoridad administrativa, atendiendo, por lo menos, a los beneficios obtenidos por el responsable, y a los daños y perjuicios ocasionados, las individualice, el artículo 113 constitucional consagra el principio de igualdad en la imposición de sanciones, dado que, precisamente, reconoce diferentes sanciones y parámetros que, como mínimo, deben establecerse en la ley, exigiendo, por consiguiente, al legislador, razonabilidad en la diferencia de las sanciones aplicables por los actos u omisiones cometidos.

Conforme a estas bases, el principio de igualdad en la imposición de las sanciones se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación.

El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre servidores públicos que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

De ello se sigue que, el principio en comento, obliga al legislador a mantener la igualdad ante la misma ley de todos los servidores públicos, los que por los actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 constitucional, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente, entre otras, a las hipótesis de las sanciones; de ahí lo fundado del agravio, exclusivamente en cuanto a que sí procedía examinar el precepto impugnado a la luz de la garantía de igualdad consagrada en la Constitución.

(...)

Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita confrontar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran, o no, en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente.

De ello deriva que, en caso de que los sujetos comparados no sean iguales, o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual en cuestión.

(...)

En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no infringe la garantía de igualdad, pues no da trato diferenciado a los servidores públicos que se les imponga el plazo de inhabilitación de diez a veinte años, respecto de aquellos a quienes se les imponga una inhabilitación de uno hasta diez años, pues, además de que la primera sanción corresponde a conductas graves de los servidores públicos, en tanto que, la segunda se aplica a esos servidores públicos por un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, el artículo 14, fracción VI, de dicho cuerpo

25

normativo, establece los requisitos ordenados por el texto constitucional, relativos a que las sanciones deberán imponerse atendiendo, cuando menos, al monto del beneficio, lucro o daño, o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones."

Como se advierte de las ejecutorias anteriores, la constante en la premisa de la *ratio decidendi* consiste en determinar el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz del derecho humano a la igualdad y que consiste, justamente, en elegir el término de comparación apropiado.

Así, en las ejecutorias recién transcritas, se desprende que el *término de comparación apropiado* fue el siguiente:

1. **Amparo en Revisión 50/2010:** el término de comparación apropiado fue entre la industria minera y otras áreas del desarrollo nacional;
2. **Amparo en Revisión 2131/2009:** el término de comparación apropiado fue entre trabajadores regulados en el apartado A del artículo 123 constitucional y los trabajadores regulados en el apartado B del artículo 123 constitucional;
3. **Amparo Directo en Revisión 1818/2008:** el término de comparación apropiado fue entre trabajadores que sufren un riesgo de trabajo frente a trabajadores que están sujetos a una pensión por jubilación o por vejez;
4. **Amparo en Revisión 221/2009:** el término de comparación apropiado fue entre los distintos trámites que se siguen ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial; y,
5. **Amparo en Revisión 1155/2008:** el término de comparación apropiado fue entre las distintas sanciones que se pueden imponer a los servidores públicos en materia de responsabilidad administrativa.

Entonces, como se podrá advertir de lo anterior, tenemos que, para formular el análisis de igualdad, en términos de la jurisprudencia 42/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que realizar el análisis con un término de comparación apropiado y que, en los precedentes que dan origen a la propia jurisprudencia, fue entre el origen o causa (la actividad regulada) y no frente a sus consecuencias.

Sin embargo, el Juez de Distrito de forma por demás ilegal, aplicando incorrectamente la jurisprudencia de la Suprema Corte y violando el artículo 74 de la Ley de Amparo, formuló el análisis de igualdad, bajo un supuesto término de comparación apropiado no frente al origen de la actividad (siembra, cultivo o cosecha) o la actividad misma sino frente a sus consecuencias (destinados a fines de investigación médica o científica y no industriales), lo que implica que utilizó un

7

[REDACTED]

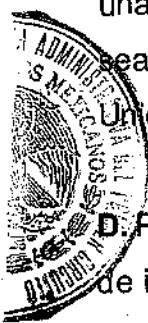
[REDACTED]

50

13
término de comparación que no es el correcto conforme al criterio de ese Alto Tribunal.

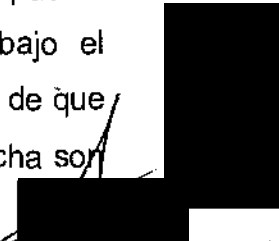
Ello resulta ilegal, pues aplica de forma indebida el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo tanto, torna en ilegal la conclusión del análisis de igualdad pues no se realizó comparando el origen, la situación o actividad regulada (siembra, cultivo o cosecha) para analizar las diversas consecuencias (permisión para fines médicos o científicos y prohibición para fines industriales) sino que analizó la igualdad sólo por sus consecuencias o finalidades y, de ahí, pretende ilegalmente justificar dicho trato desigual.

Por lo tanto, al haberse demostrado que el Juez de Distrito aplicó de forma indebida el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegando a una conclusión por demás incorrecta e ilegal, lo procedente es que dicha sentencia sea revocada y, en su lugar, se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.

 D. Por otro lado, resulta ilegal el análisis formulado por el Juez de Distrito, en materia de igualdad, al señalar, en un primer momento, que *el parámetro de comparación que realiza la quejosa es entre: a) las personas morales que lleven a cabo la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines médicos y científicos; y b) las personas morales que lleven a cabo la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines distintos, como lo es el uso industrial.*

No obstante lo anterior -que la comparación para efectos de igualdad se propuso por el quejoso frente a personas que llevan a cabo la misma actividad pero con una finalidad distinta- el Juez determinó ilegalmente que las situaciones respecto de las cuales la parte quejosa pretende hacer valer un trato discriminatorio no se encuentran en un plano de igualdad, en virtud de que, según el ilegal criterio, no existe una situación comparable, pues los motivos de distinción que realiza el sistema normativo analizado encuentran su origen en los fines para los cuales se realizan las actividades de siembra, cosecha y cultivo de la marihuana; así, los sujetos que pretenden realizar dichas actividades para fines médicos y científicos no se encuentran en una situación de igualdad respecto de aquellos que pretendan hacerlo con fines diversos, como lo sería el industrial.

Esta consideración resulta ilegal, pues pretende justificar la supuesta constitucionalidad del sistema normativo impugnado, exclusivamente bajo el argumento de que no se encuentran en una situación comparable derivado de que los fines para los cuales se realiza la actividad de siembra, cultivo o cosecha son



distintos, pues en un primer caso son para fines médicos o científicos y, en otro, para fines industriales.

Se insiste, la ilegalidad deviene en que el Juez confunde, para efectos de la comparación en materia de igualdad, entre la finalidad que tenga el producto (medico o científico frente al industrial) y el origen de la actividad o la actividad regulada (siembra, cultivo y cosecha). Por ello, arriba a una conclusión ilegal, pues al confundir las premisas de análisis en materia de igualdad, la conclusión será - como en este caso- ilegal por falsa.

Aún más, el supuesto análisis de igualdad formulado por el a-quo resulta ilegal, pues pretendió justificar la supuesta constitucionalidad del sistema normativo impugnado, exclusivamente en la diferencia de fines que existe entre la misma actividad.

Sin embargo, ello sólo confirma la inconstitucionalidad del sistema pues, contrario al argumento del Juez, cuando una misma actividad (siembra, cultivo o cosecha) tiene regulación totalmente distinta dependiendo, exclusivamente de los fines a los que se destine el producto, no sólo se viola el derecho humano a la igualdad de trato frente a la ley en situaciones similares sino que, también, se crea una categoría sospechosa que no encuentra justificación constitucional alguna, más aún si se toma en cuenta que esta categoría creada artificialmente por el legislador, no está motivada de forma reforzada.²²

También, la resolución ahora impugnada resulta ilegal, pues parte de una premisa falsa al realizar el supuesto análisis de igualdad, pues pretende que las situaciones fácticas sean exactamente iguales, pero que encuentren una regulación distinta; sin embargo, conforme al propio precedente jurisprudencial que sirvió de *sustento* a las consideraciones del Juez se puede advertir que el análisis de igualdad debe partir de situaciones similares que reciban un trato diferenciado.

²² **MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.** Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicho motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emite el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trata. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deban respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto al orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma." Época: Novena Época, Registro: 165745, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 120/2009, Página: 1255

Así, ante estas situaciones similares que reciban un trato diferenciado, el análisis de igualdad debió hacerse por el Juez de Distrito desentrañando si la regulación más favorable encuentra asidero constitucional.

Es decir, para que hubiera sido correcto el análisis de igualdad del sistema normativo impugnado, el Juez debió advertir que estaba frente a situaciones similares (la actividad consistente en la siembra, cultivo y cosecha de cannabis) y, entonces, desentrañar si la diferencia de trato basada exclusivamente en los fines a los que se destine el producto encuentra justificación constitucional.

Sin embargo, al haber formulado el análisis de igualdad de forma incorrecta, partiendo de la premisa que no son iguales (exactamente) las situaciones en virtud de que el fin al que se destina el producto es distinto, no sólo resulta ilegal, sino que viola el artículo 74, fracción I y II de la Ley de Amparo, pues dejó de analizar los Conceptos de Violación tal como fueron planteados en la demanda de amparo.

Efectivamente, si el Juez hubiera formulado su análisis conforme al planteamiento hecho en lo Conceptos de Violación en la demanda de amparo, hubiera advertido que frente a situaciones similares (actividad de siembra, cultivo y cosecha) se generaban consecuencias jurídicas distintas basadas exclusivamente en el destino del producto (fines médicos o científicos frente a industriales) y que, ahora sí, esta diferencia frente a situaciones similares no encuentra justificación constitucional alguna.

Este análisis indebido de igualdad generó, también, que el Juez de Distrito señalara ilegalmente en la resolución ahora combatida que los fines por los cuales la norma establece una distinción de trato son diferentes (médicos y científicos/uso industrial).

Ello, pues en esa consideración el propio Juez aplicó indebidamente el análisis de igualdad, ya que pretendió justificar la existencia de supuestas situaciones que no son comparables sólo en los fines de la regulación; es decir, parte de la conclusión para justificar la premisa, lo cual resulta ilegal.

En efecto, el Juez pretendió justificar que no se está frente a situaciones comparables exclusivamente con la finalidad distinta de la norma (médicos o científicos frente a industriales) sin tomar en cuenta que la actividad origen (siembra, cultivo o cosecha) no sólo es similar sino que es la misma y ello resulta ilegal, pues

los fines de la actividad sólo podrían servir para justificar la constitucionalidad de la diferencia de trato²³ más no así la inexistencia de situaciones comparables.

Dicho de otra manera, la diferencia en la finalidad de las actividades sólo serviría, en su caso, para analizar si la misma encuentra un sustento constitucionalmente válido y, por lo tanto, justificar que aún existiendo una diferencia de trato en situaciones similares, la misma es constitucional; situación que, incluso, no sucede en el caso concreto, pues no encuentra asidero constitucional esa diferencia de trato.

Sin embargo, pretender justificar la inexistencia de situaciones similares sólo por la finalidad a la que se destina el producto de esa actividad, es aplicar la conclusión para justificar la premisa, lo cual resulta no sólo ilegal, sino incorrecto y, con ello, se demuestra la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado ante la violación al derecho humano a la igualdad.

También, resulta ilegal la consideración del a-quo en la que determinó que "no puede entablarse una relación igualitaria entre la posición concreta que guarda una persona colocada en una situación determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a otra situación diferente; es decir, no es dable afirmar que exista un trato desigual entre personas que no se hallen en una misma situación, pues lo que la Constitución Federal ampara no es una igualdad absoluta, sino una igualdad entre personas que se encuentren en una posición idéntica o semejante".

Lo anterior, pues el Juez dejó de observar los Conceptos de Violación como fueron planteados en la demanda de amparo, pues en los mismos no se planteó la inconstitucionalidad del sistema normativo pretendiendo una igualdad absoluta sino que se demostró plenamente la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del sistema pues frente a situaciones similares se otorga un trato diferente y, más aún, cuando los tres fines (médico, científico o industrial) son lícitos.

Así, basta tener presente lo señalado en el Concepto de Violación, ilegalmente analizado por el juez, para advertir que en el mismo, en ningún momento se planteó la inconstitucionalidad por una igualdad absoluta (como fue analizado por el juez) y que implicaba no sólo igualdad en la actividad regulada sino en los fines a los que se destina el producto, sino que se planteó que ante situaciones similares (igualdad en la actividad pero desigualdad en la regulación de las consecuencias jurídicas) y

²³ Cuando exista una motivación reforzada y dicha categoría encuentre justificación constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, tal como se demostró en la demanda de amparo y su ampliación y que, de forma ilegal, el a-quo dejó de observar en la sentencia que ahora recurre.

125
con fines lícitos (los tres, es decir, el médico, científico o industrial)²⁴ y que este último recibe un trato prohibitivo frente al trato permisivo de los dos primeros.

Por lo tanto, al haber analizado de forma diversa a como se plantearon los argumentos en el Concepto de Violación relativo a la violación al derecho humano a la igualdad y que, también, la legislación crea una categoría sospechosa sin motivación reforzada, resulta ilegal la sentencia y deberá ser revocada a efecto de que, ante la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado por violar el derecho humano a la igualdad, lo procedente es que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada.

E. Por otro lado, también resulta ilegal la consideración del a-quo en el sentido de que *"en ese orden de ideas tampoco se crea una categoría sospechosa como erróneamente lo asevera la solicitante de amparo"* violando con ello el artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

Ello pues incumple con la obligación impuesta en la Ley de Amparo de motivar las resoluciones y, específicamente, de motivar el porqué determinó que no se creaba una categoría sospechosa derivada de la permisión de sembrar, cultivar y cosechar cannabis cuando su finalidad sea científica o médica y prohibir dicha actividad cuando tenga una finalidad industrial.

Como podrá advertir ese tribunal ad-quem de la simple lectura a la sentencia del Juez de Distrito, en ninguna parte motivó porque, según su ilegal criterio, el sistema normativo impugnado no crea una categoría sospechosa sino que, simplemente se limitó a realizar esa afirmación, sin que la misma esté justificada con la argumentación correspondiente.

Ahora bien, esta ilegalidad resulta relevante pues como podrá advertirse por esa Suprema Corte, en el Primer Concepto de Violación no sólo se demostró que el sistema normativo es inconstitucional por violar el derecho humano a la igualdad sino que, también, quedó plenamente acreditado que dicho acto reclamado genera una categoría sospechosa y que, por lo tanto, no cumple con los estándares impuestos por ese Alto Tribunal para ser constitucional pues permite sólo la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis cuando ésta se destine a fines medicinales o científicos, cuando esta categoría no está motivada de forma reforzada y genera, en si misma, un trato discriminatorio -violatorio del derecho.

²⁴ Incluso, contrario al legal criterio del Juez, tan los tres fines son lícitos que la propia Ley General de Salud permite importar, exportar o comercializar productos con igual o menor contenido al 1% de THC, pero el Código Penal Federal impide la siembra, cultivo o cosecha de la planta (cannabis sativa L. (cáñamo)) para para producir estos bienes.

humano a la igualdad- frente a quienes realicen la misma actividad pero con fines industriales.

Sin embargo, el Juez se limitó a afirmar sin realizar la menor motivación, que el sistema impugnado no crea una categoría sospechosa, es decir, sin motivar porqué no se crea esta categoría, si la misma es constitucional o porqué es constitucional.

Así pues, la ilegalidad ante la falta de motivación de la afirmación del Juez se confirma con el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS, MOTIVACION DE LAS. Si la responsable no motivó su fallo, no bastan sus solas afirmaciones dogmáticas para que el mismo sea legal."²⁵

Como se advierte del criterio, no basta una afirmación dogmática ("*tampoco se crea una categoría sospechosa como erróneamente lo asevera la solicitante de amparo*") para que se considere legal la sentencia pues, para cumplir con el mandato constitucional -que también es aplicable a cualquier órgano jurisdiccional- se tiene que motivar todas sus afirmaciones y consideraciones.

Así, en el caso concreto el Juez de Distrito se limitó a afirmar que no se crea una categoría sospechosa, sin motivar la razón de esta afirmación y, mucho menos, se justificó cómo es que esta categoría es constitucional.

Ello resulta más grave aún, si se toma en cuenta que legislativamente se creó una categoría sospechosa sin motivación alguna y que la misma no cumple con los estándares determinados por ese Alto Tribunal para ser considerada como constitucional, pues no existe justificación constitucional alguna para impedir la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) cuando tenga un uso o finalidad industrial, siendo que la propia LGS permite la comercialización, importación o exportación de productos derivados de esta planta y que contengan igual o menos del 1% de THC para fines industriales y sí permitir esa actividad exclusivamente para fines médicos o científicos; sin embargo, estos argumentos no fueron analizados por el Juez quien sólo se limitó a afirmar que no existe esa categoría sospechosa.

Entonces, al haberse demostrado la ilegalidad del análisis de igualdad llevado a cabo por el Juez de Distrito y, además, la violación del sistema normativo

²⁵ Época: Sexta Época, Registro: 273134, Instancia: Tercera Sala, Tipo d, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Cuarta Parte, Materia(s): Común, Tesis, Página: 144

impugnado al derecho humano a la igualdad, ante una categoría sospechosa que no encuentra una motivación reforzada en su proceso legislativo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por mi representada.

QUINTO.- Ilegalidad de la sentencia, por contravenir las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo y el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues al formular el análisis de violación al derecho humano de seguridad jurídica, apreció los Conceptos de Violación de forma indebida e interpretó incorrectamente el derecho humano violado, además de incurrir en la omisión de motivar las premisas y conclusiones respectivas.

En efecto, la sentencia ahora recurrida resulta por demás ilegal, tal como se demostrará a lo largo del presente Agravio, en virtud de que el sistema normativo impugnado sí resulta contrario no sólo al derecho humano a la seguridad jurídica sino que, también resulta contrario al principio de confianza legítima.

A. En primer lugar, para demostrar la ilegalidad de la sentencia, conviene tener presentes las consideraciones respectivas:

"En otro orden de ideas, en su segundo concepto de violación, la parte quejosa aduce que el sistema normativo reclamado resulta violatorio del derecho humano de seguridad jurídica contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no permitirse llevar a cabo la siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo), impide ejercer el derecho consagrado por la propia Ley General de Salud. Afirma lo anterior con sustento en las siguientes afirmaciones:

(...)

En el caso particular, este Juzgado de Distrito estima que no existe la antinomia alegada por la parte quejosa.

Para demostrar lo anterior, se debe indicar que una antinomia en términos generales es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea.

Si bien existen diversos criterios de solución de antinomias (jerárquico, cronológico y de especialidad), es un presupuesto para ello que exista una colisión normativa y que jurídicamente no sea posible resolverla mediante algún método interpretativo.

En relación con los preceptos combatidos, se estima que no existe dicha antinomia. Lo anterior en razón de que el artículo 245, fracción V, segundo párrafo, de la Ley General

60

de Salud y el artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, establecen diferentes hipótesis, pues mientras el primero señala que los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria; por su parte, el segundo numeral prevé que la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos o científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

Lo anterior evidencia que ambos numerales regulan supuestos normativos distintos, pues de su contenido se advierte que los supuestos fácticos que prevén son los siguientes.

- La comercialización, importación y exportación de productos que contengan derivados del cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales - artículo 245, fracción V, segundo párrafo, de la Ley General de Salud-; y,
- La punibilidad de realizar actividades consistentes en la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana (sin distinguir el porcentaje que contengan de THC) - con fines distintos a los médicos o científicos - artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal-.

En esa tesitura, los dispositivos respecto de los cuales la parte quejosa alega una supuesta antinomia atribuyen consecuencias jurídicas distintas a diversos supuestos fácticos, y esto impide su aplicación simultánea.

En efecto, dichas disposiciones no concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, (requisito indispensable para la configuración de una antinomia), pues es claro que a través de lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley General de Salud se prevé la posibilidad de comercializar, exportar e importar productos derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales; mientras que el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal prevé una excepción al tipo penal que se configura cuando una persona, en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares en circunstancias análogas a la hipótesis señalada en el primer párrafo de dicho numeral, es decir, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros. Dicha excepción consiste en que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

Lo expuesto quiere decir que los gobernados no tienen que resentir las consecuencias jurídicas previstas en los artículos referidos simultáneamente, sino que éstas serán aplicables únicamente cuando se actualicen los supuestos de hecho que prevén.

16

Por ende, no se deja en estado de incertidumbre a la quejosa, pues sabe a qué atenerse respecto del ordenamiento que aplica para cada una de las circunstancias de hecho que regulan.

De esta manera, ante la inexistencia de la antinomia que plantea la parte quejosa, resulta innecesario recurrir a alguno de los criterios de solución de conflictos normativos y, en consecuencia, procede desestimar por infundado el concepto de violación en estudio.

De igual manera, resulta infundado el argumento vertido por la sociedad quejosa en el sentido de que el sistema es contradictorio entre sí y, por lo tanto, violatorio del derecho de seguridad jurídica y su derivado de confianza legítima pues por una parte reconoce el derecho de poder llevar a cabo la comercialización, importación y exportación de los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales y, por otro lado, prohíbe la posibilidad legal de sembrar, cultivar y cosechar las propias plantas de marihuana que serán la materia prima básica de los productos que se comercializarán o exportarán.

Ello, en virtud de que dichas actividades no dependen para su realización entres sí; es decir, la comercialización, exportación e importación de productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC no se encuentra condicionada indefectiblemente a la siembra, cultivo y cosecha de las propias plantas de marihuana por parte de la sociedad quejosa.

Se explica, la posibilidad legal que prevé la Ley General de Salud para que se pueda llevar a cabo la importación, exportación y comercialización de los productos señalados se puede llevar a cabo a través de los mecanismos establecidos en la propia legislación, como puede ser la tramitación ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios de la evaluación sanitaria por medio de la cual se puede lograr la importación de materias primas con CBD, siempre que las mismas contengan menos del 1% de THC.

(...)

Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra del Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código.

(...)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

(...)

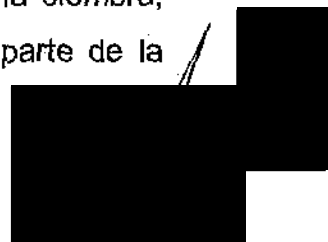


Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Desart MX, sociedad anónima de capital variable contra el Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código, así como su aplicación, consistente en la emisión del oficio 183300EL040837, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia."

Como esa Suprema Corte podrá advertir de la transcripción anterior, la consideraciones esenciales por las que el Juez, ilegalmente, determinó que el sistema normativo impugnado no resulta contrario al derecho humano a la seguridad jurídica son las siguientes:



- No existe antinomia, en virtud de que el artículo 245, fracción V, segundo párrafo de la LGS y el 198, último párrafo del CPF, establecen hipótesis diferentes, pues el primero señala que los productos con menos del 1% de THC y que contengan amplios usos industriales se pueden comercializar, exportar e importar; en cambio, el segundo numeral, señala que no será punible la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana sólo en el caso de que se destinen a fines médicos o científicos.
- Por lo tanto, los dispositivos señalados, atribuyen consecuencias jurídicas distintas a diversos supuestos fácticos y esto impide su aplicación simultánea.
- Además, las disposiciones señaladas no concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, que es un requisito indispensable para la configuración de una antinomia.
- Los gobernados no tienen que resentir las consecuencias jurídicas previstas en los artículos en cuestión de forma simultánea, sino que éstas serán aplicables únicamente cuando se actualicen los supuestos de hecho que prevén, por lo que no se deja en estado de incertidumbre a la quejosa, pues sabe a qué atenerse respecto del ordenamiento que aplica para cada una de las circunstancias de hecho que regulan.
- Resulta infundado que el sistema impugnado sea contradictorio entre sí, pues las actividades de comercialización, importación y exportación frente a la siembra, cultivo o cosecha, no dependen para su realización entre sí; es decir, la importación, exportación y comercialización de productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC no se encuentran condicionadas indefectiblemente a la siembra, cultivo y cosecha de las propias plantas de marihuana por parte de la quejosa.



63

Ahora bien, las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito resultan ilegales, tal como se demostrará en los siguientes apartados del presente Agravio.

B. Como se señaló anteriormente, las consideraciones que sustentó el Juez de Distrito no sólo aprecian los actos reclamados de forma distinta sino que, también, realizan el análisis de los argumentos vertidos por la quejosa en su demanda de amparo de forma distinta a como fueron planteados, además de realizar un análisis ilegal e incorrecto del derecho humano a la seguridad jurídica.

En efecto, en la demanda de amparo y su ampliación, se demostró plenamente la inconstitucionalidad del sistema normativo reclamado, ya que el mismo otorga el derecho a realizar una actividad consistente en la importación, comercialización y exportación de productos derivados de la planta de cannabis sativa L (cáñamo) que tengan un contenido igual o menor al 1% de THC pero, al impedir llevar a cabo otra actividad necesaria para cumplir con las primeras (siembra, cultivo o cosecha de la planta), genera un derecho imposible de cumplir, pues se encuentra vedado el inicio de la cadena productiva.

Eno, además, se señaló y acreditó plenamente en la demanda y su ampliación, que resulta en una violación al principio de confianza legítima, pues se reconoce un derecho (exportar, importar o comercializar) cuando la actividad previa y necesaria para llevarlo a cabo (siembra, cultivo o cosecha) se encuentra

Es importante señalar que la transgresión al derecho a la seguridad jurídica queda evidenciado desde el momento en que el sistema normativo otorga un derecho pero impide su ejercicio pleno y libre, lo que nulifica, entonces, el mismo derecho otorgado.

No obstante dichos argumentos, el Juez de Distrito al momento de analizar la constitucionalidad del sistema normativo impugnado, bajo la premisa de la violación al derecho humano a la seguridad jurídica, señaló que no existe la antinomia planteada, ya que el artículo 245, fracción V, segundo párrafo de la LGS establece una hipótesis diversa a la regulada en el artículo 198, último párrafo del CPF.

Sin embargo, esta consideración resulta violatoria al artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, en virtud de que se aleja del planteamiento hecho valer por la quejosa en su Concepto de Violación y analiza de forma diversa la inconstitucionalidad planteada pero, además, dicho análisis resulta ilegal ya que no se está frente a la regulación de una misma conducta bajo dos consecuencias jurídicas diversas (como fue analizado por el a-quo) sino que

la antinomia y, por lo tanto, inseguridad jurídica, se presenta en virtud de que el sistema permite llevar a cabo las actividades de importación, exportación y comercialización de productos con contenido de 1% o menor de THC pero, por otro lado, impide llevar a cabo una actividad primaria y necesaria para desarrollar las actividades permitidas, como es la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sátiua L (cáñamo).

Así pues, la ilegalidad de la sentencia ahora recurrida, deviene en que la antinomia del sistema normativo reclamado no deriva de que dos normas jurídicas (LGS y CPF) establezcan consecuencias jurídicas distintas a un supuesto igual -como ilegalmente fue analizado por el Juez- sino que deriva dicha inconstitucionalidad en que se otorga un derecho (importar, comercializar y exportar) pero se impide llevar a cabo una actividad primaria que resulta necesaria para ejercer, justamente ese derecho.



anterior, puede representarse gráficamente de la siguiente manera:

Planteamiento hecho en la demanda de amparo	Análisis formulado en la sentencia
<p>El sistema normativo contenido en la LGS y el CPF <u>permite llevar a cabo las actividades de importación, enajenación y exportación</u> de productos que contengan el 1% o menos de concentración de THC.</p> <p>Sin embargo, el propio sistema normativo impide llevar a cabo la actividad consistente en la siembra, cultivo y cosecha de la planta necesaria, cuando se destine el producto a fines industriales.</p> <p>Elo, genera que el sistema jurídico viole el derecho a la seguridad jurídica y confianza legítima, pues un sistema normativo no puede reconocer un derecho y, a la vez, impedir su ejercicio sin ser contradictorio e inconstitucional.</p>	<p>No existe la antinomia, pues el artículo 245, fracción V, segundo párrafo de la LGS regula un supuesto distinto al previsto en el artículo 198, último párrafo, del CPF.</p> <p>Por lo tanto, los numerales atribuyen consecuencias jurídicas distintas a diversos supuestos fácticos y ello impide su aplicación simultánea.</p>



65

Cómo se puede advertir, el análisis formulado por el a-quo resulta ilegal, ya que se realiza de forma diversa a como fue planteado por el quejoso en su concepto de violación correspondiente.

En efecto, la inconstitucionalidad del sistema jurídico reclamado no deriva de que la LGS atribuya consecuencias jurídicas diversas frente al CPF respecto de situaciones distintas -como ilegalmente fue analizado por el Juez- sino que la inconstitucionalidad deviene en que la LGS otorga un derecho que el CPF impide ejercerlo, sin que exista justificación constitucional válida.

De ahí que, contrario al ilegal criterio del Juez, el sistema resulte inconstitucional, pues si se otorga un derecho pero otra norma jurídica impide su pleno ejercicio, se traduce en una franca violación a la seguridad jurídica y existirá una antinomia (no porque, se insiste, dos normas atribuyan consecuencias jurídicas diversas a una misma situación) sino porque existe una oposición o conflicto en el sistema, al otorgarse un derecho para ejercer una actividad, consistente en la posibilidad de importar, comercializar o exportar bienes que contengan igual al 1% o menor de THC pero, al mismo tiempo, el propio sistema impide ejercer ese derecho, al penalizar la actividad necesaria que consiste en la siembra, cultivo y cosecha de la planta donde se extraerá el producto.


En otras palabras, la antinomia se genera pues el sistema permite llevar a cabo la etapa final de la cadena productiva (comercialización o exportación de productos con contenido igual o menor al 1% de THC, por ejemplo) pero impide llevar a cabo la primera etapa de la propia cadena productiva y que consiste en la siembra, cultivo y cosecha de la planta que generará esos productos.

Evidentemente, la LGS en su artículo 245 regula una situación diversa a la prohibida por el artículo 198 del CPF, sin embargo, la inconstitucionalidad del sistema no deviene en esta diferencia de regulación frente a supuestos distintos -como ilegalmente lo analizó el Juez- sino que deriva en que, por un lado, la LGS otorga el derecho a llevar a cabo diversas actividades consistentes en la importación, exportación y comercialización de productos con contenido del 1% o menor de THC para fines industriales, pero el Código Penal Federal penaliza (prohíbe) la siembra, cultivo y cosecha de este tipo de productos cuando tengan fines industriales. Más aún, la violación al derecho a la seguridad jurídica queda acreditada si se toma en cuenta que estamos frente a una actividad que resulta lícita, como lo es la importación, exportación y comercialización de productos que contengan contenido igual al 1% o menor de THC y que se destinen a fines industriales y, no obstante ser una actividad lícita -por así permitirla la LGS- el Código

66


Penal Federal impide llevarla a cabo a través de la penalización (prohibición) de la siembra, cultivo y cosecha del mismo producto cuando sea destinado la exportación o comercialización con fines industriales.

Por ello, contrario al argumento contenido en la sentencia que ahora se recurre, la violación a la seguridad jurídica no se genera ante la diversa regulación existente entre la LGS y el CPF respecto de actividades distintas sino que dicha inconstitucionalidad deriva -tal como fue acreditado en el Concepto de Violación respectivo- de que a través de la prohibición contenida en el CPF se impide llevar a cabo una actividad que resulta lícita como sería la exportación o comercialización de productos con contenido igual o menor al 1% de THC, ya que no resultará posible llevarla a cabo ante la falta de materia prima derivado, justamente, de la prohibición prevista en el CPF.

 C. Por otro lado, resulta ilegal la consideración del Juez de Distrito, en el sentido de que no existe la antinomia alegada por mi representada, ya que las disposiciones señaladas no concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, que es un requisito indispensable para la configuración de una antinomia.

Ello es así, pues la antinomia referida en el presente caso -como se señaló anteriormente- no deriva como ilegalmente fue analizada por el Juez, en el sentido de la existencia de dos normas jurídicas que regulen una misma situación y otorguen consecuencias jurídicas diversas sino que la antinomia se genera ante el otorgamiento de un derecho como lo es la posibilidad de llevar a cabo la importación, comercialización o exportación de bienes con contenido igual o menor al 1% de THC pero penalizar (prohibir) la siembra, cultivo o cosecha de la planta (cáñamo) de la cual se extraerá el CBD necesario para producir los bienes que se exportarán o comercializarán para fines industriales.

Pero, además, resulta ilegal la sentencia, pues la LGS y el CPF sí concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez de la norma, tal como se acreditará a continuación y, por lo tanto, al concurrir en el mismo ámbito de validez (temporal, espacial, personal y material) se acredita plenamente la antinomia y, por lo tanto, la inconstitucionalidad del sistema impugnado, ya que por un lado, se otorga un derecho en la LGS (importar, exportar o comercializar productos con igual o menos del 1% de THC para fines industriales) pero se prohíbe en el CPF sembrar, cultivar o cosechar la cannabis sátiva L (cáñamo) para fines industriales y que es el insumo fundamental para llevar a cabo la actividad permitida.



En efecto, la LGS y el CPF forman un sistema normativo que regula un proceso productivo de inicio a fin, siendo el inicio una actividad prohibida como lo es la siembra, cultivo o cosecha de la planta de cannabis y el fin del proceso la exportación o comercialización de los productos que hayan sido fabricados con esa planta de cannabis y que contengan 1% o menos de THC.

En ese sentido, tanto la LGS como el CPF sí están referidos al mismo ámbito temporal de validez pues ambas disposiciones se encuentran vigentes a partir del mismo momento, tal como se puede advertir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de reformas a ambos cuerpos normativos²⁶ y que, en la parte que interesa, señala lo siguiente:

"DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 237, párrafo primero; 245, fracciones I, II y IV; 290, párrafo primero; y se adicionan el artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

(...)

Artículo Segundo.- Se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

(...)

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Como ese Alto Tribunal podrá advertir de la parte relativa al Decreto que reformó la LGS y el CPF, ambos cuerpos normativos están referidos al mismo ámbito de validez temporal, pues los mismos se encuentran contenidos en el mismo Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y ambos se encuentran vigentes al mismo tiempo, es decir, al día siguiente al en que se publicó el Decreto de reformas en el DOF.

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio del Juez, queda plenamente acreditado que tanto la LGS y el CPF ahora reclamados, sí concurren en el mismo ámbito temporal de validez y, por lo tanto, resultan inconstitucionales ya que generan una antinomia al permitir la primera ejercer un derecho pero el segundo cuerpo normativo provocar un obstáculo jurídico para su realización.

²⁶ El Decreto de reformas a la LGS y al CPF se publicó en el Diario Oficial de la Federación del día 19 de junio de 2017.

68

Por otro lado, también dichas normas concurren en el mismo ámbito espacial de validez, pues ambas rigen situaciones de hecho ocurridas en territorio nacional estableciendo las consecuencias de derecho correspondientes.

Es decir, la LGS en su artículo 245 prevé el derecho a importar (**a territorio nacional**), exportar (**de territorio nacional**) o comercializar (**en territorio nacional**) bienes que contengan 1% o menos de THC destinados a fines industriales.

Por otro lado, el CPF en su artículo 198, último párrafo, establece una prohibición o pena para quien siembre, cultive o coseche **en territorio nacional** cannabis con fines industriales.

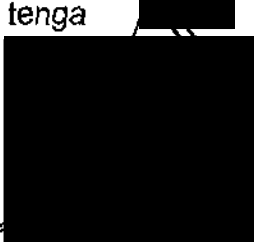
Así pues, resulta evidente que tanto la LGS como el CPF concurren en el mismo ámbito espacial de validez, ya que ambos cuerpos normativos -o el sistema reclamado- regulan situaciones sobre el mismo proceso productivo que se lleve a cabo en territorio nacional.

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio del Juez, queda plenamente acreditado que tanto la LGS y el CPF ahora reclamados, sí concurren en el mismo ámbito espacial de validez.

Adicionalmente, las normas reclamadas o sistema reclamado, también inciden en el mismo ámbito de validez personal pues tanto la LGS como el CPF regulan una misma actividad, salvo que en etapas distintas.

En efecto, la LGS regula la etapa final de una actividad, pues permite la importación, comercialización y exportación de bienes que contengan 1% o menos de THC fabricados con cannabis sátiva L (cáñamo) para fines industriales; en cambio, el CPF regula (prohíbe) el inicio de esa actividad y que consiste en impedir llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de la planta de cannabis que servirá para elaborar los productos que serán exportados o comercializados en territorio nacional con fines industriales.

Por lo tanto, ambas normas van dirigidas a regular la conducta de un mismo sujeto, tal como lo es la ahora quejosa, ya que por un lado, a ese mismo sujeto se le permite llevar a cabo una actividad lícita consistente en importar, comercializar o exportar bienes que contengan 1% o menos de THC para fines industriales pero también se le impide llevar a cabo otra actividad -dentro de la misma cadena productiva- consistente en sembrar, cultivar y cosechar la planta de cannabis cuando tenga fines industriales.



59

Así, las normas reclamadas contenidas en la LGS y el CPF regulan la conducta de un mismo sujeto, como lo es mi representada.

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio del Juez, queda plenamente acreditado que tanto la LGS y el CPF ahora reclamados, sí concurren en el mismo ámbito personal de validez.

Por último, también el sistema normativo impugnado, concurre en el mismo ámbito de validez material, pues el objeto mismo de la regulación como sistema lo constituye la cadena productiva de la enajenación de productos con contenido igual o menor al 1% de THC y que sean destinados a fines industriales.

Es decir, la materia misma de la regulación es compartida por ambas normas reclamadas, ya que las mismas se insertan en el Derecho a la Salud establecen la regulación respecto de dos actividades que se llevan a cabo en un mismo proceso respecto de bienes que contengan 1% o menos de THC y que se destinen a fines industriales.

Incluso, para acreditar que ambas normas inciden en el mismo ámbito material de validez, basta tener presente lo señalado por el artículo 1º de la LGS y el título en donde se encuentra ubicado el artículo 198 del CPF, en donde se señala, en la parte que interesa, lo siguiente:

Ley General de Salud.

"Artículo 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Código Penal Federal:

"TITULO SEPTIMO

Delitos Contra la Salud

Artículo 198...

(...)

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal."

Así pues, como ese Alto Tribunal podrá advertir de la transcripción anterior, tanto la LGS como el CPF en las partes reclamadas en el presente juicio de amparo, coinciden o concurren en el mismo ámbito material de validez, consistente en el Derecho a la Salud y, específicamente, respecto de la regulación de un producto como lo es la cannabis.

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio del Juez, queda plenamente acreditado que tanto la LGS y el CPF ahora reclamados, sí concurren en el mismo ámbito material de validez.

Así, al haberse demostrado que, contrario al ilegal criterio sustentado por el Juez, el sistema normativo reclamado sí concurre en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez y que, por ello, se reúnen los requisitos para la existencia de la antinomia acreditada por el quejoso en su Concepto de Violación, lo procedente es que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, ante la violación al derecho humano a la seguridad jurídica y la existencia de una antinomia, se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por mi representada.

D. No obstante lo anterior, que es más que suficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a mi representada, existe un motivo adicional en que incurrió el Juez de Distrito al momento de dictar su resolución y que consiste, en una violación a los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que el a-quo omitió motivar o expresar las consideraciones que sustentan la conclusión alcanzada.

En efecto, el Juez de Distrito, en la parte relativa de la sentencia ahora recurrida, sólo expresó lo siguiente:


"En efecto, dichas disposiciones no concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, (requisito indispensable para la configuración de una antinomia), pues es claro que a través de lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley General de Salud se prevé la posibilidad de comercializar, exportar e importar productos derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales; mientras que el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal prevé una excepción al tipo penal que se configura cuando una persona, en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares en circunstancias análogas a la hipótesis señalada en el primer párrafo de dicho numeral, es decir, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros. Dicha excepción consiste en que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades

7

se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal."

Como esa Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá advertir de la consideración antes transcrita, en ningún momento el Juez de Distrito cumplió con la obligación impuesta por los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sólo afirmó que "*dichas disposiciones -el sistema normativo impugnado- no concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, (requisito indispensable para la configuración de una antinomia)*", sin que haya motivado o expresado las consideraciones jurídicas relativas a justificar porqué el sistema impugnado no concurre en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez.

Así, tal omisión deja en estado de indefensión a la quejosa ahora recurrente, pues le impide combatir las consideraciones o motivos que tuvo el Juez de Distrito para considerar que las normas no concurren en los mismos ámbitos de validez.

 insiste, el Juez actuó ilegalmente, al simplemente afirmar que las normas impugnadas no concurren en los mismos ámbitos de validez y, por ello, no se configura la antinomia apuntada por el quejoso en su demanda cuando, conforme a la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, tenía la obligación de motivar o justificar con argumentos esa afirmación.



Así pues, la ilegalidad ante la falta de motivación de la afirmación *dogmática* del Juez se confirma con el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS, MOTIVACION DE LAS. Si la responsable no motivó su fallo, no bastan sus solas afirmaciones dogmáticas para que el mismo sea legal."²⁷

En efecto, como lo determinó esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio recién transcrito, no basta una afirmación *dogmática* en la sentencia para que ésta se entienda legal, pues conforme a nuestro marco constitucional y legal, es requisito que las mismas estén motivadas, es decir, que justifiquen o razonen sus conclusiones con la argumentación suficiente.

Sin embargo, como se ha acreditado a lo largo del presente apartado, el Juez de Distrito incumplió esa obligación, violando los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sólo afirmó

²⁷ Época: Sexta Época, Registro: 273134, Instancia: Tercera Sala, Tipo d, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen I Cuarta Parte, Materia(s): Común, Tesis: , Página: 144




72

dógmáticamente que las disposiciones no concurren en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez (como requisito indispensable para la configuración de la antinomia) pero, en ningún momento justificó o motivó esa afirmación.

Por lo tanto, lo procedente es que se revoque la sentencia ahora recurrida y, en su lugar, se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la quejosa ahora recurrente.

E. Por otro lado, también resulta ilegal que el Juez haya determinado que los gobernados no tienen que resentir las consecuencias jurídicas previstas en los artículos reclamados de forma simultánea, sino que éstas serán aplicables únicamente cuando se actualicen los supuestos de hecho que prevén, por lo que no se deja en estado de incertidumbre a la quejosa, pues sabe a qué atenerse respecto del ordenamiento que aplica para cada una de las circunstancias de hecho que regulan.

En efecto, resulta ilegal pues transgrede el artículo 74 de la Ley de Amparo esa consideración vertida por el Juez de Distrito, ya que analiza los conceptos de violación, específicamente el planteado por el quejoso en donde se demostró la violación al derecho humano a la seguridad jurídica, de forma distinta a como fue planteado.

Elo, pues el quejoso planteó en su demanda de amparo que el sistema normativo ahora cuestionado, resulta contrario al derecho humano a la seguridad jurídica, en virtud de que la LGS concede un derecho (importar, exportar o comercializar bienes con igual o menor contenido al 1% de THC para fines industriales), sin embargo, el CPF -como sistema que se integra a la LGS- implide ejercer ese derecho ya que penaliza la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis cuando ésta tenga fines industriales.

Es decir, tal como se planteó y demostró la inconstitucionalidad en el Concepto de Violación respectivo, implica la imposibilidad de ejercer un derecho otorgado por la LGS ante la prohibición del CPF pero, en ningún momento, se planteó dicha inconstitucionalidad, derivado de que si se aplican al mismo tiempo ambos ordenamientos generan inseguridad jurídica.

Incluso, esta consideración del Juez, no sólo resulta ilegal sino ilógica pues no se podría, en el mismo momento, pretender (i) sembrar, cultivar o cosechar la planta de cannabis sativa L. (cáñamo) para fines industriales y (ii) importar, exportar o/

[REDACTED]

[REDACTED]

comercializar los productos que tengan fines industriales y cuya materia prima sea la propia cannabis sátiua L (cáñamo) referida en el inciso anterior.

Por lo tanto, al haberse analizado la inconstitucionalidad planteada bajo argumentos que no fueron hechos valer por la quejosa sino que fueron introducidos ilegalmente por el propio Juez en su análisis (variación de la litis), se torna en ilegal la sentencia combatida.

Pero, aún más, es ilegal la sentencia en esta consideración pues el supuesto analizado resulta, fácticamente, imposible de cumplirse.

En efecto, el Juez señala que no existe inseguridad jurídica, pues los gobernados no tienen porqué resentir los efectos de la aplicación del sistema de forma simultánea sino que los efectos irrumpirán en la esfera jurídica del quejoso cada que se actualicen las hipótesis normativas correspondientes. Ello implica, según el ilegal criterio del a-quo, que el particular o gobernado sabe a qué atenderse.

Sin embargo, el sistema combatido no es contrario a la seguridad jurídica porque el gobernado no sepa a qué atenderse sino porque, como se ha acreditado previamente, el gobernado que está sujeto al mismo, no puede ejercer el derecho de importar, exportar o comercializar bienes que tengan 1% o menos de THC para fines industriales -siendo que, además, es una actividad lícita- pues el CPF prohíbe la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis a efecto de destinarla a fines industriales.

Por ello, contrario al ilegal criterio del Juez, la inconstitucionalidad se presenta en virtud de que el gobernado ni siquiera podrá llegar al momento de aplicación del derecho previsto en la LGS consistente en exportar o comercializar productos de cannabis cuyo contenido sea igual o menor al 1% de THC pues, simplemente, no tendrá la posibilidad legal de sembrar, cultivar y cosechar la planta que será el insumo necesario para esos productos, ante la prohibición del CPF.

Es decir, no se podrá presentar la aplicación de las consecuencias de derecho de la LGS pues resultará jurídicamente imposible llegar a las mismas, ante la prohibición del CPF.

Por ello, resulta también ilegal la sentencia recurrida, pues dejó de analizar que el ejercicio del derecho contenido en la LGS será jurídicamente imposible (en especial, tratándose de la exportación o comercialización de bienes que tengan un contenido igual o menor al 1% de THC para fines industriales) pues tienen prohibido (delito) el

sembrar, cultivar o cosechar la planta de cannabis que será destinada a la obtención de los productos que serán exportados o comercializados.

F. Por último, resulta también ilegal la consideración del Juez de Distrito consistente en que el sistema impugnado no es contradictorio entre sí, pues las actividades de comercialización, importación y exportación frente a la siembra, cultivo o cosecha, no dependen para su realización entre sí; es decir, según el ilegal criterio del a-quo, la importación, exportación y comercialización de productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC no se encuentran condicionadas indefectiblemente a la siembra, cultivo y cosecha de las propias plantaciones de marihuana por parte de la quejosa.

Así, en primer lugar, hay que señalar que esas consideraciones vertidas por el Juez de Distrito, resultan ilegales, pues pretenden justificar o analizar la constitucionalidad de una norma, a través de supuestos fácticos que ni siquiera se encuentran demostrados.

Ello, pues el Juez pretende justificar la constitucionalidad del sistema impugnado, bajo un argumento no demostrado y, además, falso, en el sentido de que la importación, comercialización y exportación de bienes que tengan contenido igual o menor al 1% de THC para fines industriales, no están condicionadas necesariamente a la siembra, cultivo o cosecha de la planta de cannabis para fines industriales.

Es falso el argumento utilizado por el Juez, pues la comercialización y exportación de este tipo de bienes requieren, necesariamente de la planta de cannabis sea sembrada, cultivada y cosechada en territorio nacional, para producir los bienes que se comercializarán o exportarán; así, por ese simple hecho, resulta falso el argumento utilizado por el a-quo para pretender justificar la constitucionalidad del sistema impugnado.

Incluso, llevando la consideración del Juez al argumento *ad absurdum*, implicaría que para exportar un bien que contenga igual o menos del 1% de THC para fines industriales, se tendría primero que importar al país ese mismo bien, pues en territorio nacional está prohibida la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis para fines industriales y "esas actividades no se encuentran efectivamente condicionadas".

Continuando con el argumento *ad absurdum*, bajo las consideraciones del Juez de Distrito implicaría, necesariamente, que todas los bienes que contengan igual o

menos del 1% de THC y que sean para fines industriales, que se vayan a comercializar en territorio nacional tendrán que ser, necesaria e inexorablemente, de importación. Ello, pues la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis para fines industriales está penada (prohibida) y, según el criterio del Juez, la comercialización de estos productos en territorio nacional no está condicionada necesariamente a la siembra, cultivo o cosecha de la planta que genera la materia prima necesaria.

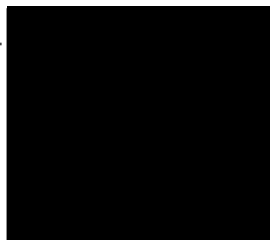
Pero, además de resultar ilegales esas consideraciones por los motivos antes expuestos, también resultan ilegales en virtud de que pretenden justificar la constitucionalidad de un sistema normativo bajo argumentos fácticos no demostrados en el juicio e introducidos por el Juez de Distrito y no bajo un análisis jurídico en donde se realice el estudio de la norma o sistema normativo frente a los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales invocados por la quejosa en su demanda de amparo.



Adicionalmente, el hecho de que se requiera o no, necesariamente, de la actividad de sembrar, cultivar o cosechar la cannabis para fines industriales, a efecto de llevar a cabo la actividad de importar, comercializar o exportar bienes que deriven de esa planta, que contengan menos del 1% de THC y que sean para fines industriales, no justifica su constitucionalidad pues, tal como se planteó en la demanda de amparo, el sistema resulta contrario a los derechos humanos en virtud de que impide el ejercicio de una actividad y derecho como lo es la comercialización o exportación de estos productos cuando prohíbe el inicio de la cadena productiva, como es la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis para fines industriales.

Así, aceptar de legal las consideraciones del Juez de Distrito en las que pretende justificar la constitucionalidad del sistema normativo impugnado sería tanto como validar la premisa de que una norma o sistema prohibitivo puede ser constitucional cuando viole derechos humanos pues el particular puede dedicarse a otra actividad.


Incluso, tan resulta ilegal la consideración del Juez que, ante la prohibición expresa contenida en el CPF, no se puede llevar a cabo la actividad de siembra, cultivo o cosecha de cannabis para fines industriales, por lo que tampoco existe evidencia de que las actividades de importación, comercialización y exportación se encuentran *"condicionadas indefectiblemente a la siembra, cultivo y cosecha de las propias plantas de marihuana por parte de la quejosa"*.



26

G: Confirma la ilegalidad de la sentencia, lo resuelto por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 3/2019 (10a.)²⁸, en la que sostuvo ese Alto Tribunal que la prohibición para el uso lúdico de la marihuana, en la parte de la siembra, cultivo o cosecha de la planta se constituye en un obstáculo jurídico que impide ejercer un derecho, es decir, "impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera."

En efecto, la jurisprudencia que resultaba obligatoria su aplicación para el Juez de Distrito, señala en la parte que interesa, lo siguiente:



"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la

²⁸ Jurisprudencia que dejó de observar el Juez de Distrito no obstante que le era obligatoria y, por lo tanto, violó con ello el artículo 217 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decreta el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales."

27

marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera."²⁹

Como se puede advertir del criterio jurisprudencial anterior, aplicado por mayoría de razón, la prohibición de sembrar, cultivar o cosechar marihuana (ó cannabis sátiua L cáñamo, en el caso concreto que nos ocupa) se constituye como un obstáculo que impide ejercer un derecho.

Tal obstáculo también ocurre en el presente caso, pues la Ley General de Salud otorga el derecho a importar, comercializar o exportar productos con fines industriales que tengan 1% o menos de THC y cuyo origen es la cannabis sátiua L cáñamo, pero impide la siembra, cultivo o cosecha, justamente, de la propia cannabis que será la materia prima necesaria para fabricar o producir esos productos.



Por lo tanto, con el criterio de la Suprema Corte se acredita aún más, no sólo la ilegalidad de la sentencia recurrida sino, también, la violación al derecho humano a la seguridad jurídica, pues existe en el sistema normativo impugnado un derecho pero, a la vez, un obstáculo que impide ejercer ese derecho, como lo es el último párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal.

Aún más, esta violación al derecho humano a la seguridad jurídica se confirma con lo sustentado por la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 547/2918³⁰ y que constituye uno de los precedentes que integró la jurisprudencia antes referida.

Así, en dicha ejecutoria la Primera Sala sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"66. Así, esta Primera Sala entiende que las normas impugnadas comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera)."

Como se advierte de la consideración de la Primera Sala, la prohibición administrativa y legal se convierte en un obstáculo para realizar lícitamente una actividad, por lo que resulta inconstitucional el mismo.


²⁹ Época: Décima Época, Registro: 2019356, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a/J. 3/2019 (10a.), Página: 488

³⁰ Ejecutoria visible en la <https://sjf.scjn.gob.mx/SJF/Sist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=28352&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=2019356>

25

Este criterio también confirma la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado pues, contrario al ilegal criterio del Juez, la prohibición de llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) para fines industriales, se convierte en un "obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias" a efecto de poder importar, exportar o comercializar productos para fines industriales con contenido igual o menor al 1% de THC, por lo que resulta evidente la violación al derecho humano a la seguridad jurídica.

Por lo tanto, al haberse demostrado plenamente no sólo la ilegalidad de la sentencia dictada por el Juez de Distrito sino, también, que el sistema normativo impugnado resulta contrario al derecho humano a la seguridad jurídica al impedir ejercer efectivamente un derecho consagrado u otorgado en la LGS, así como al principio de confianza legítima, lo procedente es que se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por mi representada.




SEXTO.- Ilegalidad de la sentencia recurrida, al violar lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles pues, al formular el análisis de la violación del sistema normativo al derecho humano a la libertad de trabajo y comercio, se concluye que resulta infundado.

El Juez de Distrito, al momento de formular sus consideraciones respecto de porqué el sistema normativo impugnado no resulta contrario a los derechos humanos de libertad de trabajo y comercio previstos tanto en la Constitución Federal como en diversos tratados internacionales determinó, esencialmente, que de llevarse a cabo las actividades de siembra, cultivo y cosecha de la planta de cannabis para fines industriales se actualizaría el delito contenido en el artículo 198, segundo párrafo, del Código Penal Federal y, por lo tanto, no se actualiza la violación constitucional alegada por mi representada.

Sin embargo, dichas consideraciones resultan ilegales, tal como se acreditará a lo largo del presente agravio.

A. Ahora bien, en primer término, resulta necesario tener presente lo señalado por el Juez de Distrito en su sentencia y que, en la parte que interesa, señaló lo siguiente:

"En otro aspecto, en su séptimo concepto de violación, la solicitante de amparo aduce que el sistema normativo que



75

impugna viola el derecho a la libertad de trabajo y comercio consagrado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que se le impide llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) que contenga concentraciones menores al 1% de THC o cualquier otra de las actividades por las que solicitó autorización ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios pero que se destinan para usos industriales.

A efecto de analizar el argumento esgrimido por la quejosa, en principio debe acudir al contenido del artículo 5 constitucional, el cual señala:

(se transcribe)

El primer párrafo del precepto constitucional transcrito protege, como derecho humano, la libertad de todas las personas para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que elijan, siendo lícitos.

Establece de manera general la libertad de trabajo de la que goza todo individuo, en el entendido de que esta no es un derecho diferente al de profesión, industria y comercio, ya que estas últimas constituyen una subespecie de la libertad genérica de trabajo, pues no debe soslayarse que éste se entiende como toda actividad humana, intelectual y material, independientemente del grado de preparación técnica y circunstancias específicas requeridas por cada profesión u oficio.

A su vez, la libertad de trabajo no es absoluta, irrestricta e ilimitada, puesto que es necesario que la actividad sea lícita y que con ella no se afecten derechos de terceros o de la sociedad en general, lo cual significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/98, definió los presupuestos fundamentales que identifican a la libertad de trabajo, a saber:

a) Que no se trate de una actividad ilícita.

Se refiere a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley, de ahí que dicha libertad es permisiva; por tanto, la garantía no podrá exigirse cuando la actividad sea ilícita, es decir que esté prohibida por la ley o que, aun y cuando no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano.

b) Que no se afecten derechos de terceros.

Implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación a derechos de terceros, esto es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley a favor de otro u otros que se ubiquen en una situación jurídica determinada que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aquél.

c) Que no se afecten derechos de la sociedad en general.

Conlleva a que la garantía sea exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los



80

gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en general.

Lo anterior es así, ya que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el interés de la sociedad por encima del interés particular, por lo que cuando este último puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél (interés de la sociedad) en una proporción mayor del beneficio que en lo individual obtendría un solo individuo.

Las consideraciones anteriores dieron origen al criterio contenido en la siguiente jurisprudencia:

(se transcribe)

Además, debe precisarse que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse en los siguientes supuestos:

- Por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros.
- Por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Ahora bien, establecidos los presupuestos fundamentales que identifican la libertad de trabajo, es necesario señalar que ésta tiene restricciones constitucionales y, por tanto, debe sujetarse a las disposiciones de interés público que no contraviniendo su ejercicio, dicten las autoridades para reglamentar su realización.

De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

En este orden, el legislador de manera fundada y motivada puede restringir la libertad de trabajo mediante ley, siempre que ésta sea emitida de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es ilícita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía en relación con los gobernados en particular, aunque éstos se mencionen de modo implícito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposición, ésta perderá su eficacia, ya que la ley debe tener los atributos señalados; además, el artículo 5 constitucional reserva a la función judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales (mediante resolución judicial cuando se afecten derechos de terceros y por resolución gubernativa en los términos que señale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad), tal como se definió en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 29/99 (Registro: 194151) de rubro:

(se transcribe)

Lo anterior deriva en que la ley reglamenta a mayor detalle las condiciones en qué debe ejercerse la libertad de trabajo consagrada en la norma constitucional, pero con las limitaciones que se señalan en la propia Constitución, de forma que tal reglamentación debe desarrollarse en el sentido de determinar las condiciones en que se puede ejercer y armonizar, en beneficio de la colectividad, el ejercicio de este derecho humano.

En tales términos, las normas de la reglamentación implican el establecimiento de las modalidades en que las libertades deben



ejercerse, señalando las condiciones y los requisitos necesarios para ello, sin que éstos puedan llegar al extremo de coartar el derecho humano mediante el establecimiento de modalidades que no sean razonables y superables.

En efecto, la libertad de trabajo exige reglas que determinen las condiciones para su ejercicio, las cuales pueden estar contenidas en el texto constitucional o en las leyes secundarias; así, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 5º de la Constitución se establece que la ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo, lo anterior por cuestiones de orden público e interés general y una vez superado tal requerimiento la libertad de trabajo es expedita para el individuo.

Lo anterior se justifica por el hecho de que podría ser inconveniente que cualquier profesión pudiera ejercerse sin obstáculos, incluso por quienes carecieran de la capacitación profesional necesaria; por tanto, a cada entidad federativa le corresponde expedir los títulos para el ejercicio de ciertas profesiones, según las leyes que se emitan al efecto.

A su vez, los párrafos tercero y cuarto del artículo 5º constitucional prevén otras restricciones a la libertad de trabajo, las cuales consisten en el trabajo obligatorio y/o gratuito, como es el caso del impuesto como pena, el de los servicios públicos, el de armas, los jurados, los cargos conciliares y los de elección popular, directa o indirecta, las funciones electorales y censales que se realicen de manera profesional y los servicios profesionales de índole social.

De igual modo, las restricciones impuestas a la libertad de comercio tienden a proteger el interés público, mediante la imposición de ciertos requisitos, obligaciones y prohibiciones a quienes se dediquen a la actividad mercantil, pues tales medidas impuestas a los comerciantes en las diversas disposiciones tienden a que no se vea afectado el interés público sin limitar sus derechos públicos subjetivos, puesto que éstos una vez que cumplan con tales prevenciones podrán libremente ejercer su actividad.

Es decir, cuando una norma secundaria imponga determinadas cargas jurídicas a los ciudadanos que pretendan realizar una actividad de índole comercial, no merece por ese simple hecho la calificativa de inconstitucional al considerar que afecta la libertad de comercio consagrada en el artículo 5º constitucional, ya que esas disposiciones tienden a proteger a la colectividad, sin limitar los derechos públicos subjetivos de los comerciantes, los que pueden libremente ejercer su actividad cumpliendo con las prevenciones fijadas, para hacer de éste un acto lícito que no afecte el interés público.

Asimismo, entre otras restricciones a la libertad de trabajo, cuya fuente es la propia Constitución, se encuentran las siguientes:

- Artículo 3, fracción VI, consistente en la potestad de enseñar e impartir educación, pero en caso de que deseen que sus estudios cuenten con validez oficial deben contar con el reconocimiento del Estado;
- Artículo 28, párrafo veintitrés, fracción III, dispone como requisito para ser comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica no haber sido condenado por delito doloso;
- Artículo 101, párrafo primero, establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Secretarios, Consejeros de la Judicatura



82

Federal o Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia;

- Artículo 102, Apartado A, segundo párrafo, indica que para ser Fiscal General de la República se deben cubrir determinados requisitos, entre ellos, no haber sido condenado por un delito doloso;

- Artículo 123, Apartado A, fracciones II, III y V, prohíben las laborales insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y cualquier otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; la utilización del trabajo de los menores de quince años; así como el horario de trabajo de los mayores de quince años de edad y menores de dieciséis; y, a las mujeres embarazadas, trabajos que exijan esfuerzo considerable y signifiquen peligro para la salud en relación con la gestación;

- Artículo 123, Apartado A, fracción XX, octavo párrafo, dispone que quien pretenda ser designado titular del organismo descentralizado que se encargará de la función conciliatoria en materia laboral también debe cubrir como requisito el no haber sido condenado por delito doloso; y,

- Artículo 130, fracción d) prohíbe a los ministros de culto religioso ejercer cargos públicos.

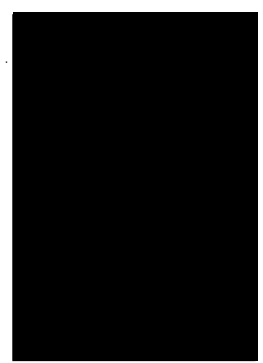
Además, resulta conveniente señalar que el legislador está facultado para regular el derecho al trabajo, para determinar su contenido y delimitar sus alcances, pero siempre bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a una cancelación de su contenido esencial.

Así, para realizar el control de la constitucionalidad de las restricciones a la libertad de trabajo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 173/2008 determinó que se deben satisfacer los siguientes requisitos para considerarlas válidas:

a) La restricción reglamentada por el legislador debe ser admisible en la Constitución. El legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su artículo 1. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer limitaciones a los derechos humanos adicionales a las que derivan de la Norma Fundamental, por tanto, sus facultades de producción normativa sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a las mismas.

b) La medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional. Es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de ese fin, sino que de hecho esa medida debe ser la idónea para su realización. Por ende, debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos. Las restricciones constitucionalmente previstas a los derechos tienen un carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar mano de ellas sólo cuando sea estrictamente necesario.

c) Debe ser proporcional. La medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.



Lo anterior se desprende del contenido de los siguientes criterios:

(se transcriben).

Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales.

Una vez expuesto el contenido esencial del derecho a la libertad de trabajo a que se refiere el artículo 5 de la Carta Magna, analizadas las restricciones constitucionales a dicho derecho y cómo realizar el control de la constitucionalidad de dichas restricciones, resulta necesario verificar si este derecho humano se encuentra contenido en alguno de los tratados internacionales signados por nuestro país; lo anterior, a efecto de determinar si, conforme al principio pro persona, brindan una mayor protección.

Sobre el tema, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su artículo 23.1 lo siguiente:

(se transcribe)

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su artículo 6, lo siguiente:

(se transcribe)

A su vez, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador", establece en su artículo 6.1 lo siguiente:

(se transcribe)

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas analiza el derecho al trabajo en su Observación General N°18⁵⁰, dedicada exclusivamente al estudio sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aunque posee una formulación normativa distinta a la del artículo 6.1 del Protocolo de San Salvador, las variaciones son mínimas, lo que permite el uso de la observación como referente de apoyo.

En virtud de lo anterior, resulta conveniente destacar las siguientes consideraciones del Comité:

1. El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales:

- libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública;
- derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; y,
- dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.

2. Refiere que el derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo; que engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos



83

dependientes sujetos a un salario y, que no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo.

3. El ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia de los siguientes elementos interdependientes y esenciales, cuya aplicación dependerá de las condiciones existentes en cada Estado:

- Disponibilidad, se refiere a que los Estados deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
- Accesibilidad, comprende el derecho de procurar, obtener y difundir información sobre los medios para obtener acceso al empleo mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los planos local, nacional e internacional.
- Aceptabilidad y calidad, la protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente el empleo.

4. Indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente". En este aspecto, el Comité reafirma la necesidad de que los Estados Partes procedan a abolir, condenar y luchar contra todas las formas de trabajo forzado, como preceptúan la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4 y el artículo 5 de la Convención sobre la Esclavitud, así como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Asimismo, destacó que se deberá respetar el derecho al trabajo mediante, entre otras cosas, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, y absteniéndose de denegar o limitar el acceso igualitario a trabajo digno a todas las personas, especialmente a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, en particular presos o detenidos, miembros de minorías, trabajadores migratorios, mujeres y jóvenes.

6. Señaló que deberá prohibirse el trabajo de niños menores de dieciséis años, prohibirse toda forma de explotación económica y de trabajo forzoso de niños, así como adoptar medidas efectivas para velar por que la prohibición del trabajo infantil sea plenamente respetada.

De los ordenamientos internacionales citados se desprende que la libertad de trabajo se otorga a todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo; circunstancias que permiten concluir que el derecho de igualdad se encuentra implícita en el de libertad de trabajo, así como la libre elección de su trabajo y las garantías que ha de adoptar cada Estado para lograr la efectividad de ese derecho, sin que se advierta que aporte algún elemento adicional a los constitucionalmente establecidos.

Precisado lo anterior, conviene señalar que en el marco de los Estados americanos opera el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, dentro del cual se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, el derecho a la libertad de trabajo no ha sido abordado como tal en los casos que ha resuelto dicho tribunal.

Finalmente, resulta importante señalar que el artículo 5 de la Constitución Federal prevé las siguientes garantías para el ejercicio de la libertad de trabajo:

1. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa (párrafo quinto).

2. Se prohíben los convenios por los que una persona pacte su proscripción o destierro, o que renuncie temporal o permanentemente al ejercicio de una profesión, industria o comercio determinado (párrafo sexto).

3. Un contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo fijado por la ley; sin que tal tiempo exceda de un año en perjuicio del trabajador; del mismo modo, el contenido de tal contrato no podrá extenderse a la renuncia, pérdida o menoscabo de los derechos políticos o civiles (párrafo séptimo).

Una vez asentado lo anterior, debe decirse que el concepto de violación que se analiza deviene infundado en virtud de que, como ha quedado precisado con antelación, la libertad de trabajo no es absoluta, irrestricta e ilimitada, puesto que es necesario que la actividad sea lícita y que con ella no se afecten derechos de terceros o de la sociedad en general. lo cual significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés, mayor se limita o condiciona el individual cuando con este puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado.

En este sentido, conviene reiterar que el artículo 198 del Código Penal Federal establece pena de prisión de uno a seis años al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares en circunstancias análogas a la hipótesis señalada en el primer párrafo de dicho numeral, es decir, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros.

Ahora bien, dicho numeral no distingue si la planta de marihuana que se pretenda sembrar, cultivar o cosechar contenga o no una concentración superior al 1.0% de tetrahidrocannabinol y si bien el último párrafo de dicho numeral señala que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, lo cierto es que la quejosa pretende fines industriales y no así médicos o científicos.

Así, la actividad que pretende realizar la quejosa, esto es, importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L. (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC; procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de cannabidiol (CBD); comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales; e importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC en terrenos de su propiedad, dicha conducta actualizaría el tipo penal contemplado en el artículo 198, párrafo segundo, del Código Penal Federal, sin que opere la excepción prevista en el último párrafo del aludido numeral pues este se refiere a la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana únicamente cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos.

De esta manera, la restricción a las actividades que pretende la solicitante de amparo no implican una limitación inconstitucional a su derecho al trabajo, pues las mismas



16

conllevarían la actualización de un delito, pues, como ya quedó señalado la libertad al trabajo es permisiva y por tanto, no podrá exigirse cuando la actividad sea ilícita, es decir que esté prohibida por la ley o que, aun y cuando no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano, como sucede en el caso a estudio.

Por los motivos expuestos es que resulta (sic) infundado el concepto de violación en estudio.

(...)

Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra del Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código.

(...)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

(...)

Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Desart MX, sociedad anónima de capital variable contra el Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código, así como su aplicación, consistente en la emisión del oficio 183300EL040837, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia."

Como esa Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá advertir de la simple lectura a las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito, en esencia, señaló que era infundado el argumento de violación a la libertad de trabajo y comercio, por lo siguiente:

- La libertad de trabajo no es absoluta, irrestricta e ilimitada, pues es necesario que la actividad sea lícita y que con ella no se afecten derechos de terceros o de la sociedad en general;
- Se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor, se limita o condiciona el individual cuando éste puede afectarse por aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado;
- La actividad que pretende realizar la quejosa (importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que

contengan concentraciones menores al 1% de THC; procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de canbidiol (CBD); comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales; e importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC en terrenos de su propiedad) actualizaría el tipo penal contemplado en el artículo 198, segundo párrafo, del Código Penal Federal, sin que se esté en el supuesto de excepción del último párrafo, es decir, que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de cannabis sea únicamente para fines médicos o científicos;

- La restricción de las actividades que pretende llegar a cabo la quejosa, no implican una limitación inconstitucional a su derecho al trabajo, pues las mismas conllevarían la actualización de un delito;
- Es decir, la libertad de trabajo es permisiva y, por ello, no podrá exigirse cuando la actividad sea ilícita, des decir, que esté prohibida por ley o que, aún y cuando no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar trasgresión al derecho positivo mexicano, como sucede en el caso a estudio.

Sin embargo, estas consideraciones resultan ilegales y deberán revocarse, tal como se acreditará en los siguientes apartados del presente Agravio.

B. El juez parte aplica indebidamente las premisas de análisis sobre la violación a la libertad de trabajo o comercio, pues señala que si bien la libertad de trabajo o comercio no es irrestricta, se requiere que la actividad a desarrollar por el gobernado sea lícita y que con la misma no se afecten derechos de terceros o de la sociedad en general.

Continúa señalando, ilegalmente, el Juez de Distrito que se protege el interés general de la sociedad frente al del particular y, en aras de ese mayor interés, se limita o condiciona el individual cuando éste puede afectarse por aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado.

Ahora, si bien es cierto que esas premisas para el análisis de la posible violación a la libertad de trabajo o comercio son correctas, en el caso concreto, el Juez las aplicó de forma indebida e incorrecta, generando la ilegalidad de la sentencia, al violar las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo.


Ello, pues el análisis de constitucionalidad debe partir de la base de si la afectación a la sociedad es mayor que el beneficio que pudiera tener el gobernado al dedicarse a determinada actividad y simplemente hay que recordar que la propia actividad,

en género, está permitida por la propia LGS, situación que no fue advertida por el Juez.

En efecto, conforme a la LGS vigente, la actividad de importación, comercialización o exportación de bienes que tengan igual o menos del 1% de THC para fines industriales, se encuentra permitida.

En ese sentido, queda claro que estamos frente a una actividad lícita y que, además, no estamos frente a una afectación a la sociedad en general, ya que la propia norma (LGS) permite esa actividad.

Sin embargo, una parte de esa actividad se encuentra prohibida -cuando el resto está permitida- y no por ello, se generaría una afectación mayor a la sociedad respecto del beneficio que pudiera obtener la quejosa en caso de llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de cannabis (cáñamo) con contenido igual o menor al 1% de THC con fines industriales pues, se insiste, ya está permitido el importar, comercializar o exportar los productos con fines industriales de este tipo.

 Se insiste, contrario al ilegal criterio del Juez, no habrá afectación a la sociedad cuando está reconocida la licitud de la importación, exportación o comercialización de este tipo de productos pero sí existe una violación al derecho humano a la libertad de trabajo o comercio, pues no obstante esta situación, se prohíbe una parte de la misma actividad, como lo es la siembra, cultivo o cosecha de cannabis con igual o menos del 1% de THC para fines industriales.

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio del Juez, resulta evidente la violación al derecho humano a la libertad de trabajo o comercio, pues no obstante que está reconocido legislativamente que una parte de esa actividad es lícita (importación, exportación o comercialización) y que, por ello, no existe afectación a la sociedad o derechos de terceros, se encuentra prohibido sin justificación constitucional alguna una actividad como lo es la siembra, cultivo o cosecha de cannabis con igual o menos del 1% de THC para fines industriales y que resulta necesaria para llevar a cabo la actividad lícita.


Así, queda evidenciada la ilegalidad de la sentencia ahora recurrida, al haber aplicado indebidamente las premisas para el análisis de la violación a la libertad de trabajo o comercio y, en cambio, haberse demostrado que dicha violación constitucional es flagrante, por lo que deberá revocarse la sentencia recurrida y, en su lugar, dictar otra en la que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso.

58

C. Por otro lado, resulta ilegal la sentencia del Juez en la parte que sostiene que la importación de cannabis con fines industriales que contenga concentraciones igual o menores al 1%, comercialización del CBD para insumo de procesos industriales, e importación de semillas actualizaría el tipo penal contemplado en el segundo párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal.

En efecto, el Juez en la parte que interesa, señaló ilegalmente lo siguiente:

"Así, la actividad que pretende realizar la quejosa, esto es, importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC; procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de canbidiol (CBD); comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales; e importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC en terrenos de su propiedad, dicha conducta actualizaría el tipo penal contemplado en el artículo 198, párrafo segundo, del Código Penal Federal, sin que opere la excepción prevista en el último párrafo del aludido numeral pues este se refiere a la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana únicamente cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos"



Como esa Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá advertir de la transcripción anterior, ilegalmente el Juez considera que la importación con fines industriales del producto en cuestión, el procesamiento del cáñamo, la comercialización de aceite de CBD como insumo para procesos industriales; importación o adquisición en territorio nacional de semillas se encuentra prohibida, pues llevarlas a cabo implicaría actualizar el tipo penal contemplado en el artículo 198, párrafo segundo, del Código Penal Federal.

Sin embargo, esta consideración también es ilegal, ya que desatiende el contenido del artículo 245 de la Ley General de Salud e interpreta de forma incorrecta el contenido del segundo párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal.

Así pues, en primer lugar hay que tener presente lo señalado en el último párrafo del artículo 245 de la LGS y el segundo párrafo del artículo 198 del CPF mismos que señalan, en la parte que interesa, lo siguiente:

Ley General de Salud:

"Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

(...)

Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan

90


amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

Código Penal Federal:

"Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembra, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior."

Así, basta la simple lectura de los artículos anteriores para evidenciar la ilegalidad de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, pues de los mismos se advierte claramente lo siguiente:

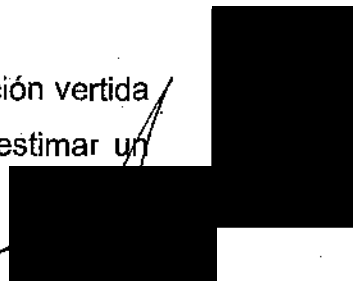
- 
- La Ley General de Salud permite llevar a cabo la importación, exportación o comercialización de productos derivados de la cannabis en concentraciones igual o menores al 1% de THC que tengan amplios usos comerciales;
 - El Código Penal Federal en ningún momento prevé el delito de comercializar, importar o exportar productos derivados de la cannabis en concentraciones igual o menores al 1% de THC que tengan amplios usos comerciales.

Por ello, resulta evidente la violación en que incurrió el Juez de Distrito al artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, pues el artículo que utilizó para señalar que se actualizaría el tipo penal no es aplicable y sí, por el contrario, la propia ley (LGS) permite llevar a cabo las actividades que el Juez ilegalmente considera como conductas típicas en materia penal.

Aún más, esta consideración también es ilegal por falta de congruencia interna en la propia sentencia, ya que el propio Juez previamente había señalado lo siguiente:

"Se explica, la posibilidad legal que prevé la Ley General de Salud para que se pueda llevar a cabo la importación, exportación y comercialización de los productos señalados se puede llevar a cabo a través de los mecanismos establecidos en la propia legislación, como puede ser la tramitación ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios de la evaluación sanitaria por medio de la cual se puede lograr la importación de materias primas con CBD, siempre que las mismas contengan menos del 1% de THC."

Como se podrá advertir fácilmente de la simple lectura de la consideración vertida por el propio Juez de Distrito, en la resolución impugnada para desestimar un



diverso Concepto de Violación señaló que la Ley General de Salud permite llevar a cabo la importación, exportación o comercialización de productos que contengan igual o menos del 1% de THC.

Sin embargo, en forma por demás incongruente e ilegal, para desestimar el Séptimo Concepto de Violación el Juez, señaló que las mismas actividades que ya había sustentado estaban permitidas, ahora actualizarían el tipo penal previsto en el artículo 198, segundo párrafo del Código Penal Federal.

Ello, resulta una evidente ilegalidad por incongruencia interna pues, además, una norma no puede interpretarse en el sentido de que permite llevar a cabo una actividad para desestimar un concepto de violación pero para desestimar un diverso concepto de violación, señalar que de llevarse a cabo la misma actividad se actualizaría un delito.

Aún más, del análisis del segundo párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal se hace evidente la ilegalidad de la sentencia recurrida, pues en dicho numeral se prevé lo siguiente:

- **Sujeto activo del delito:** la persona física que sea propietario, ostente la tenencia o posesión de un inmueble o predio;
- **Conducta sancionable:** llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de las plantas descritas en el primer párrafo del propio artículo.

Por lo tanto, se advierte que, incluso, el numeral que el Juez consideró que prevé el tipo penal, ni siquiera contempla la conducta señalada por el Juez y tampoco al sujeto activo, por lo que resulta ilegal la conclusión alcanzada y, por lo tanto, se demuestra aún más la inconstitucionalidad del sistema impugnado.

Ello, pues la conducta señalada por el Juez consiste en importar, exportar o comercializar productos con 1% o menos de THC, cuando el CPF en el artículo referido por el Juez, prevé una conducta distinta y que consiste en sembrar, cultivar o cosechar las plantas ahí descritas.

Tampoco el numeral referido por el Juez prevé al sujeto activo que refirió ilegalmente el Juzgador, ya que el CPF señala como sujeto activo al propietario, poseedor o tenedor de un inmueble y, en cambio, el activo referido es un importador, comercializador o exportador.

Por lo tanto, al haberser demostrado no sólo la ilegalidad sino, también, la incongruencia de la sentencia ahora recurrida, lo procedente es que se revoque la

misma y se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada.

D. Por otro lado, también resulta ilegal la sentencia, pues formula el supuesto análisis de la libertad de trabajo o comercio previsto en sede constitucional y convencional, de forma incorrecta e indebida, ya que pretende justificar que el sistema normativo no es violatorio de ese derecho humano realizando un análisis sólo del contenido de la norma y su prohibición, pero en ningún momento realizó un análisis de dicho sistema frente a la propia Constitución.

Así, el Juez estimó que la norma no es inconstitucional pues no implica una limitación al derecho humano de libertad de trabajo o comercio, pues de llevar a cabo la misma implicaría la actualización de un delito.

Sin embargo, este análisis formulado por el a-quo pretende justificar la constitucionalidad de la prohibición de sembrar, cultivar o cosechar cannabis con fines industriales simplemente porque llevar a cabo esa actividad es un delito cuando, justamente, lo que se impugna es la clasificación normativa de la actividad como delito.

Es decir, el Juez consideró que es constitucional la norma, simplemente, porque la ley prevé que se cometería un delito al llevar a cabo esa actividad.

Sin embargo, si hubiera realizado un correcto análisis de constitucionalidad de normas generales, hubiera tenido que confrontar el contenido normativo impugnado frente a los postulados constitucionales y, de ahí, desprender si la prohibición contenida en una norma secundaria encuentra sustento en la propia Constitución. Ello implica, necesariamente, comparar la norma frente a la Constitución y no, simplemente, señalar que es constitucional porque simplemente está previsto en la norma impugnada la prohibición de llevar a cabo la actividad.

De haberlo hecho así, el a-quo indefectiblemente hubiera concluido que el sistema normativo resulta inconstitucional, pues la prohibición de llevar a cabo una actividad como lo es la siembra, cultivo o cosecha de cannabis sátiwa L (cáñamo) para fines industriales no afecta a la sociedad ni derechos de terceros y, aún más, tan no estamos frente a una actividad ilícita que la comercialización, importación o exportación de los productos derivados de esta planta, con fines industriales, está permitida por la propia LGS.

Incluso, la ilegalidad de la sentencia se advierte si se toma en cuenta que la propia Constitución en ningún momento prevé expresamente una prohibición referida a la actividad de sembrar, cultivar o cosechar cannabis para fines industriales, por lo

que, si el Juez hubiera hecho un correcto análisis de constitucionalidad de normas, forzosamente hubiera concluido en que los actos reclamados son inconstitucionales.

Más aún, la propia Constitución señala, en su artículo 5º, no sólo el derecho humano a la libertad de trabajo o comercio sino que, también, prevé un mandato al creador de las normas secundarias -Congreso de la Unión- en el sentido de que *"a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos"*.

Pero, además, la propia Constitución señala cuándo serán ilícitas estas actividades, al referir que *"sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad"*.

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio del juez, para que una Ley impida o prohíba a los gobernados dedicarse a una profesión, trabajo o comercio sea constitucional, deberá cumplir con lo siguiente:

- Se ataquen derechos de terceros o de la sociedad.

Así pues, la única excepción al derecho a la libertad de trabajo o comercio, es que la actividad que pretenda desarrollar el gobernado afecte derechos de terceros o de la sociedad; por lo que el Legislador sí tendrá la facultad para emitir una norma secundaria que prohíba dicha actividad y, por lo tanto, la misma será constitucional.

Sin embargo, contrario al ilegal criterio del Juez de Distrito, en el caso concreto no estamos frente a una actividad que afecte derechos de terceros o de la sociedad por lo que el producto legislativo reclamado resulta violatorio de la libertad de trabajo o comercio.

Ello es así, pues en primer lugar, hay que tener presente lo señalado en el dictámen de la Cámara de Senadores -origen- respecto de la iniciativa de reformas a la LGS y CPF que origina los actos reclamados, en donde se señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:

"A diferencia de la marihuana, que proviene de la misma planta, el cáñamo carece de propiedades psicoactivas. Según la forma en que se cultive es posible obtener de ella toda clase de productos de uso industrial que nada tienen que ver con las propiedades farmacológicas de la planta, por lo que de ningún modo significan algún riesgo para la salud.

...
Como se mencionó anteriormente, la imposibilidad legal actual de cultivar cáñamo en muchos países, entre los que se encuentra México, deriva en buena medida del




04

desconocimiento de la planta misma a la que suele identificársele únicamente por sus efectos psicoactivos; es decir como marihuana.

Sin embargo, las plantas de cannabis cultivadas para fines industriales contienen alrededor 0.3% - 1.5% de THC; de modo tal que según la forma de cultivo que se realice se determina el uso final de la misma. Una vez convertida en cáñamo, los productos de éste carecen por completo de cualquier propiedad psicoactiva."

Como se advierte del dictámen de la Cámara de origen antes transcrito, en el caso del cáñamo no representa un problema de salud pública pues carece de propiedades psicoactivas. Además, de este producto, es posible su uso industrial que nada tiene que ver con las propiedades farmacológicas de la planta.

Más aún, la propia Cámara de origen reconoce que la prohibición o imposibilidad legal de sembrar, cultivar o cosechar esta planta deriva en buena medida del desconocimiento mismo de la planta.

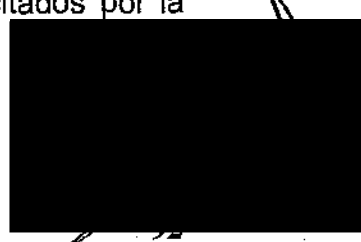


Pero, además, la propia Ley General de Salud, en su artículo 245, fracción V señala que este tipo de productos "*carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria*", es decir, que los mismos no representan ninguna afectación a derechos de terceros o a la sociedad, pues carecen de valor terapéutico y no son sustancias psicotrópicas.

Por lo tanto, resulta ilegal el criterio sustentado por el Juez, ya que estimó que la prohibición contenida en el sistema impugnado, sí es constitucional, ya que de permitirse la siembra, cultivo o cosecha de cannabis para fines industriales afecta a la sociedad o derechos de terceros.

Ello pues como se ha demostrado, no existe afectación a los derechos de terceros o de la sociedad, ya que este tipo de productos carecen de propiedades psicoactivas -como fue reconocido por la cámara de origen y en los tres dictámenes rendidos ante el Juzgado de Distrito- pero, además, porque las actividades relacionadas con la siembra, cultivo o cosecha de este producto sí están permitidas, como lo es su importación, exportación o comercialización con contenido igual o menor al 1% para fines industriales.

Por lo tanto, al haberse demostrado que, contrariamente al ilegal criterio del Juez, el sistema normativo sí representa una violación al derecho a la libertad de trabajo o comercio, lo procedente es que ese Alto Tribunal revoque la resolución recurrida y, en su lugar, conceda el amparo y protección constitucional solicitados por la quejosa.



E. Por otro lado, el Juez incurre en otra ilegalidad más, al señalar que resulta constitucional limitar la libertad de trabajo o comercio frente a actividades que, si bien no están prohibidas expresamente por la Ley, *"de alguna manera pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano, como sucede en el caso a estudio"*.

Lo anterior es así, pues el Juez violó el artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, al dejar de motivar cuáles son esas afectaciones que se dan al derecho positivo mexicano y, además, deja de fundar cuáles son las normas que, en su ilegal criterio, se verían afectadas por una conducta que no está expresamente prohibida.

Es decir, la sentencia resulta ilegal, al violar expresamente el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues por un lado dejó de motivar cuáles son las trasgresiones que se dan al orden jurídico mexicano con la siembra, cultivo o cosecha de cannabis para ser destinada a fines industriales y que contenga menos del 1% de THC y, además, dejó de motivar cuáles normas del "orden jurídico mexicano" se verían trasgredidas con esa actividad.

No obstante esta ilegalidad, también el Juez incurre en otra diversa ilegalidad, pues para justificar la constitucionalidad del sistema normativo señaló que no obstante no estar expresamente prohibida la actividad, sí podría transgredir normas del orden jurídico mexicano.

Lo anterior es así, pues esta interpretación resulta contraria a la disposición expresa contenida en el artículo 5º de la Constitución Federal, ya que la misma prevé que la libertad de trabajo o comercio sólo se podrá limitar **por disposición expresa** del legislador; es decir, que para que sea constitucional la limitación a este derecho se requiere, necesariamente, de una ley en sentido formal y material que, **de forma expresa determine qué actividad estará prohibida**.

Sin embargo, ilegalmente, el juez consideró que resulta válida la prohibición no obstante que en la misma no esta expresamente descrita en el orden jurídico mexicano, bajo el simple argumento de que llevar a cabo la siembra, cultivo o cosecha de cannabis con 1% o menos de THC para fines industriales, trasgrediría el propio orden jurídico nacional.


Es decir, el Juez considera en un primer momento, que no es expresa la prohibición de llevar a cabo esta actividad y, no obstante la previsión del artículo 5º constitucional, determina que es válido limitar de forma implícita una actividad laboral o comercial.

96
Ello resulta ilegal, pues interpreta de forma indebida el contenido del artículo 5º constitucional, por lo que deberá revocarse la resolución recurrida y, en su lugar,

SÉPTIMO.- Ilegalidad de la sentencia recurrida, pues en sus consideraciones determinó como inoperantes los Conceptos de Violación marcados como Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la demanda de amparo violando, con ello, el artículo 74 de la Ley de Amparo y las jurisprudencias 40/2000 y 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, el Juez de Distrito determinó, ilegalmente, que los Conceptos de Violación identificados como Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto hechos valer en la demanda de amparo promovida por mi representada eran inoperantes pues, según el ilegal criterio del a-quo, no se señaló cuál es el derecho en cuestión que incide la normatividad impugnada.

Sin embargo, dichas consideraciones resultan por demás ilegales, tal como se acreditará a continuación.

En primer lugar, conviene tener presentes las ilegales consideraciones vertidas por el a-quo, a través de las cuales calificó como inoperantes los Conceptos de Violación Tercero a Sexto de la demanda de amparo; así, dichos argumentos son los siguientes:

"Finalmente, la parte quejosa alega en sus conceptos de violación identificados como tercero, cuarto, quinto y sexto que el sistema normativo impugnado incumple con las cuatro gradas del test de proporcionalidad pues no tiene una finalidad constitucionalmente válida, no resulta una medida idónea, es una medida innecesaria y los costos de la medida superan los beneficios de la misma, los cuales se analizarán en conjunto dada su estrecha vinculación, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.

Ahora, respecto a los argumentos vertidos por la parte quejosa es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas.

En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. De esta manera, corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas por el derecho y debe decidirse si la norma tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis (test de proporcionalidad).

En esta segunda etapa, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga el derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente:

1. Finalidad constitucionalmente válida. Que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido;
2. Idoneidad. Que la medida legislativa resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional;
3. Necesidad. Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y,
4. Proporcionalidad. Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida legislativa impugnada.

En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie.

En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo.

Es aplicable, la tesis aislada 1a. CCLXIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 915, cuyo texto es:

(se transcribe)

Atendiendo a las premisas anteriores, los conceptos de violación propuestos resultan inoperantes, pues la parte quejosa no señalo (sic) cual es el derecho en cuestión respecto del cual aduce que incide la normatividad impugnada. De esta manera, el suscrito se encuentra imposibilitado para determinar, en primer lugar, cuáles son las conductas cubiertas por el derecho para decidir si la norma tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho y de esta manera llevar a cabo el nivel de análisis (test de proporcionalidad) que propone.

(...)

Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra del Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete;

específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código.

(...)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

(...)

Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Desart MX, sociedad anónima de capital variable contra el Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código, así como su aplicación, consistente en la emisión del oficio 183300ELO40837, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia."

Como se advierte de lo anterior, el Juez de Distrito consideró, ilegalmente, que los conceptos de violación marcados como Tercero a Sexto de la demanda de amparo resultaban inoperantes pues, supuestamente, en los mismos no se señaló cuál es el derecho en cuestión respecto del cual adujo la quejosa que incide la normatividad impugnada.

Por lo tanto, concluye ilegalmente el Juez de Distrito que se encuentra, supuestamente, imposibilitado para decidir si la norma tiene algún efecto sobre dicha conducta, es decir, si incide en el ámbito de protección del derecho y, de esta manera, llevar a cabo el nivel de análisis propuesto por la quejosa.

Sin embargo, estas consideraciones, además de ser ambigüas y, por ello, carentes de motivación violando las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, también resultan ilegales por diversos motivos, tal como se demostrará en los siguientes apartados.

B. En primer lugar, hay que señalar que las consideraciones del Juez son ambigüas y vagas, pues de las mismas, no se desprende a qué se refiere el Juez al señalar que "la parte quejosa no señalo (sic) cual es el derecho en cuestión respecto del cual aduce que incide la normatividad impugnada".

Ello es así, pues el Juez, en franca violación a las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, omite determinar o clarificar a qué se refiere al momento de decir que no se señaló el derecho en cuestión respecto del cual se aduce que incide el acto reclamado.

Es decir, es ambigua esta consideración, pues la misma puede referirse a que, supuestamente, el quejoso no señaló cuál fue el derecho humano violado con el sistema normativo reclamado o cuáles son las "conductas cubiertas por el derecho".

Así entonces, esta consideración, al ser ambigua e inexacta, resulta ilegal, por violar el artículo 74 de la Ley de Amparo y dejar en un estado de indefensión a la ahora recurrente, por lo que procede sea revocada la misma y, en su lugar, al analizar los Conceptos de Violación marcados como Tercero a Sexto de la demanda de amparo, se conceda la protección constitucional solicitada, ante la violación al principio (o derecho) de proporcionalidad de la medida legislativa.

C. No obstante lo anterior, en el presente apartado se demostrará que la sentencia es ilegal, pues el quejoso sí señaló, de forma clara, cuáles son los derechos humanos violados con el sistema normativo, para efectos de que el Juez pudiera hacer un análisis de los Conceptos de Violación marcados como Tercero a Sexto de la demanda de amparo.

En efecto, en el Capítulo VII de la demanda de amparo, expresamente se señaló lo siguiente:

"VII.- LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE AMPARO, CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAMA:

El actuar de las autoridades responsables viola directamente los derechos humanos contenidos en los artículos 1º y 2º de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 1º 5º 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."


Como se advierte de lo anterior, contrario al ilegal criterio del Juez, el quejoso sí señaló cuáles son los derechos humanos violados con los actos reclamados, por lo que, simplemente, resulta ilegal la sentencia, al partir de un supuesto (falta de señalamiento de los derechos violados) falso e inexistente, tal como se demostró con la simple transcripción anterior.

Confirma la ilegalidad de la sentencia, la jurisprudencia de la Suprema Corte -misma que, aún siendo obligatoria para el juzgado, no observó, lo cual torna en ilegal la sentencia- de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro

100

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.³¹

Aún más, basta la simple lectura de los Conceptos de Violación marcados como Tercero a Sexto, para advertir que en los mismos, se demostró que se viola el derecho a que las normas cumplan con un parámetro de proporcionalidad.

Incluso, en cada uno de ellos se demostró lo siguiente:


- **Tercero Concepto de Violación:** se viola el derecho a una medida legislativa proporcional, ya que el sistema normativo no persigue una finalidad constitucionalmente válida;
- **Cuarto Concepto de Violación:** se viola el derecho a una medida legislativa proporcional, ya que el sistema normativo no alcanza los fines perseguidos por el legislador;
- **Quinto Concepto de Violación:** se viola el derecho a una medida legislativa proporcional, ya que el sistema normativo pues la medida no es necesaria y, además, existen medidas alternativas que también son idóneas, pero menos invasivas; y,
- **Sexto Concepto de Violación:** se viola el derecho a una medida legislativa proporcional, ya que en el sistema normativo impugnado el nivel de intervención del Estado es mayor al nivel de realización del fin constitucional buscado por la medida.

³¹ Época: Novena Época, Registro: 191384, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P/JJ. 68/2000, Página: 38

101

Por lo tanto, contrario al ilegal criterio que sustentó el Juez, al estimar como inoperantes estos Conceptos de Violación, queda evidenciado que en los mismos sí se señaló cuál derecho constitucional se violó y se viola con el sistema normativo impugnado.

Confirma la ilegalidad de la sentencia, la jurisprudencia de la Suprema Corte -misma que, aún siendo obligatoria para el juzgado, no observó, lo cual torna en ilegal la sentencia- de rubro y texto siguientes:



"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."³²

Aún más, la sentencia recurrida, en esta consideración resulta contraria al artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, ya que en ningún momento fundamenta en algún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo o del Código Federal de Procedimientos Civiles su simple afirmación consistente en que *"la parte quejosa no señalo (sic) cual es el derecho en cuestión respecto del cual aduce que incide la normatividad impugnada"*.

Ello es así, pues para que fuera legal la sentencia no sólo debe contener afirmaciones sino que se requiere, forzosamente, que estas afirmaciones estén sustentadas en motivos y fundamentos correctos y en el caso concreto, el a-quo

³² Época: Novena Época, Reglato: 191384, Instancia: Pleno., Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 68/2000, Página: 38

102

estaba obligado a fundamentar en alguna norma jurídica la exigencia legal para que el quejoso repitiera en cada uno de los conceptos de violación los derechos violados cuando ya lo había hecho en el capítulo respectivo de la propia demanda de amparo y ampliación a la misma.

Pero, al no haberlo hecho así, el Juez violó lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo, más aún, si se toma en cuenta que en ninguna disposición que regule el juicio de amparo se requiere que, aparte de señalar los derechos humanos violados en el Capítulo específico -como se hizo en la demanda de amparo- se tenga que cumplir con el requisito impuesto por el Juzgador a-quo.

Por otro lado, también resulta ilegal la sentencia del Juez de Distrito, pues dejó de observar el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los juzgadores, incluidos los Jueces de Distrito como es el caso, están obligados a preferir la resolución del fondo de la controversia frente a los formalismos procesales que impidan una solución al litigio, así como el contenido de la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y **que resultaba obligatoria para el a-quo -por ese simple hecho de haber dejado de aplicarla, resulta ilegal la sentencia-**, ya que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad.

En efecto, el criterio de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."³³

Como se advierte del criterio anterior, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, **en jurisprudencia que era obligatoria para el Juzgado de Distrito**³⁴, que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido

³³ Época: Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32

³⁴ Confirma la ilegalidad de la sentencia, al haber dejado de aplicar y observar una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo señalado por el artículo 217 de la Ley de Amparo, mismo que señala que: Artículo. **"La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decreta el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales."** así como el criterio sustentado por el propio Pleno de esa Suprema Corte, aplicado a contrario sensu que es de rubro y texto siguientes: **"JURISPRUDENCIA, TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA QUE NO LA CONSTITUYEN. SU APLICACION POR LOS JUECES DE DISTRITO NO CAUSA AGRAVIO.** Cuando un Juez Federal hace suyas las tesis sustentadas por este Tribunal Pleno para fallar en el sentido en que lo hace, los fundamentos y motivos que se utilizaron por esta Suprema Corte para llegar a la determinación de que se trate sirve igualmente como soporte de la sentencia del Juez a quo; además, la práctica seguida por los tribunales al fundar sus sentencias en precedentes judiciales establecidos, cuando comparten la tesis que en ellos se sustenta, redundan en la satisfacción de los fines del derecho y lejos de causar agravio es título de exaltación para la administración de justicia, máxime cuando el criterio es exactamente aplicable al caso." Época: Séptima Época, Registro: 232135, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-218, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis, Página: 137

de liberalidad y no restrictivo, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar las sentencias correspondientes.

En ese sentido, si el Juez de Distrito hubiera aplicado la jurisprudencia que le resultaba obligatoria, tendría la necesidad de analizar e interpretar la demanda en su integridad, por lo que hubiera llegado, invariablemente, a la conclusión de que sí se señalaron los derechos humanos violados conforme a los argumentos vertidos en los Conceptos de Violación marcados como Tercero a Sexto de la demanda de amparo y el Capítulo respectivo de la demanda de amparo y su ampliación, marcado como VII, en el que se señaló claramente cuáles derechos humanos se violentan con los actos reclamados y, por lo tanto, queda evidenciada la violación del sistema normativo impugnado a la proporcionalidad de la medida legislativa.

Sin embargo, al no haberlo hecho así, la sentencia recurrida resulta por demás ilegal y deberá ser revogada, a efecto de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de analizar debidamente los Conceptos de Violación respectivos, ante la violación al principio (o derecho) de una medida legislativa proporcional, conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por mi representada.

Por otro lado, también resulta ilegal la sentencia ahora recurrida, pues mi representada sí señaló cuáles son las "conductas cubiertas por el derecho", por lo que la sentencia resulta violatoria del artículo 74, fracciones I y II de la Ley de Amparo.

En efecto, basta una simple lectura a la demanda de amparo, específicamente a los Conceptos de Violación Tercero a Sexto para advertir la ilegalidad de la sentencia del Juez, pues en los mismos se expresó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO.- El sistema normativo ahora controvertido no tiene una finalidad constitucionalmente válida, por lo que incumple con la primer etapa del test de proporcionalidad y, por lo tanto, resulta inconstitucional.

(...)

Con ello, tendríamos que al carecer de estas propiedades psicoactivas y no representar riesgo alguno para la salud, las actividades alrededor del cáñamo no deberían estar sujetas a una restricción o intervención estatal.

(...)

Entonces, tenemos que la acción legislativa de intervención por parte del Estado, en los derechos fundamentales de la ahora quejosa, no encuentran una finalidad constitucionalmente válida, pues no obstante haberse reconocido en el proceso legislativo (motivación) que estos productos que tienen menos del 1% de THC, que no tienen efectos psicoactivos y que no representan un problema de salud pública, se impidió llevar a

104

cabo las actividades de siembra, cultivo y cosecha de la planta correspondiente.

Es decir, el sistema normativo impugnado y, en especial los artículos 245 de la Ley General de Salud y 198 del Código Penal Federal sólo podrían tener un fin constitucionalmente válido tratándose de las actividades médicas o científicas pero tratándose de actividades industriales, al impedirse llevar a cabo la siembra, cultivo y cosecha de la planta correspondiente, carecen de una finalidad constitucionalmente válida.

Lo anterior es así, pues no puede considerarse válida constitucionalmente una finalidad consistente en prohibir una actividad como sería la siembra, cultivo y cosecha de un determinado producto, pero permitir, respecto del mismo producto, la comercialización, exportación o importación del mismo o del CBD, más aún cuando el propio legislador reconoció que estos productos (cáñamo) no tienen propiedades psicoactivas y no representan un riesgo a la salud.

Dicho de otra manera, podría entenderse que el impedimento normativo para llevar a cabo las actividades de siembra, cosecha y cultivo de este producto tuvieran una finalidad constitucionalmente válida si y sólo si el mismo no solamente tuviera efectos psicoactivos sino que representara un verdadero riesgo a la salud.

Sin embargo, ello no ocurre así por lo siguiente:

- a. En el caso de los productos que sí tienen efectos psicoactivos y que, además, representan un riesgo a la salud, como es el caso de la marihuana con concentraciones mayores al 1% de THC, el propio legislador sí permitió las actividades de siembra, cosecho y cultivo de la misma; y,
- b. Para el caso del cáñamo, no tiene efectos psicoactivos y tampoco representa ningún riesgo para la salud.

Por ello, la intervención normativa del Estado en los derechos de mi representada carece de una finalidad constitucionalmente válida, ya que resulta injustificable que tratándose de un producto que no tiene efectos psicoactivos, contiene menos del 1% de THC y tampoco representa un problema o riesgo a la salud pública se impida llevar a cabo la siembra, cosecha y cultivo del mismo pero, en aquéllos que sí representan un riesgo a la salud, tienen efectos psicoactivos y concentración de más del 1% de THC la propia norma sí permita sembrar, cultivar y cosechar."

"CUARTO.- El sistema normativo ahora controvertido, no resulta una medida idónea y, por lo tanto, incumple con la segunda etapa del test de proporcionalidad, por lo que resulta inconstitucional.

(...)

En efecto, si la finalidad de la emisión de estas reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos de la COFEPRIS fue desregular el uso de la cannabis, resulta que a través de los actos reclamados no se alcanza esa finalidad pues, al contrario, se impide el ejercicio de ese derecho, al vedar la actividad consistente en la siembra, cultivo y cosecha de la cannabis cuando ésta tenga un contenido menor al 1% de THC y sea destinada para usos industriales no obstante que si se permite su comercialización, exportación o importación.

105

(...)

Por ello, si la finalidad fue la desregulación del uso de la cannabis con contenido mayor al 1% de THC y para el caso de aquella que tenga concentración menor a ese 1% con fines industriales, considerarla como un producto sin interés en su regulación sanitaria por carecer de efectos psicoactivos, resulta por demás contradictorio que se haya impedido las actividades de siembra, cultivo y cosecha de la cannabis en este último supuesto pero sí sea permisivo el sistema respecto de las actividades de comercialización, exportación e importación."

"QUINTO.- El sistema normativo ahora controvertido, previsto en la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos emitidos por la COFEPRIS resultan en una medida innecesaria y, por lo tanto, incumplen con la tercera etapa del test de proporcionalidad, por lo que resultan inconstitucionales.

(...)

Entonces, esta medida prevista en los artículos recién transcritos, no obstante que estamos frente a productos que tienen menos del 1% de THC, no tienen la característica de ser psicoactivos y no representar un problema de salud pública, impide llevar a cabo las actividades de siembra, cultivo y cosecha de los bienes necesarios.

Por ello, es que resulta innecesaria la medida, conforme a la tercera etapa del test de proporcionalidad, ya que si para el caso de los productos que (i) sí representan un problema grave o menor para la salud pública, (ii) contienen una concentración mayor de THC y, (iii) sí tienen efectos psicoactivos se permite la siembra, cultivo y cosecha resulta por demás innecesario que el legislador impida llevar a cabo estas últimas tres actividades respecto de un producto que no representa un problema de salud pública, no tiene valor terapéutico, carece de efectos psicoactivos y presenta una concentración igual o menor al 1% de THC.

(...)

Así pues, resulta innecesaria la medida pues los productos, materia prima o sustancias distintos a los medicamentos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones menores al 1% de THC y que tengan amplios usos industriales, así como el cáñamo no son considerados como estupefacientes o sustancias psicotrópicas, por lo que no encuentra justificación constitucional la necesidad de impedir las actividades de siembra, cultivo y cosecha de los productos correspondientes.

C. Adicionalmente, también la medida de intervención del Estado en los derechos de mi representada, consistente en la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los Lineamientos de la COFEPRIS incumplen con la tercer etapa del test de proporcionalidad, ya que existen medidas alternativas que también son idóneas pero menos invasivas."

"SEXTO.- El sistema normativo ahora reclamado, tampoco cumple con la cuarta etapa del test de proporcionalidad de la medida, en virtud de que los costos de la medida superan, en mucho, los beneficios de la misma.

(...)

En efecto, no existe ningún beneficio en restringir la siembra, cultivo y cosecha de los productos que tengan

106

contenido igual o menor del 1% de THC para dedicarlo a fines o usos industriales pero sí permitir comercializar, exportar o importar estos productos.

Ello es así, pues tal como se ha acreditado a lo largo de los Conceptos de Violación hechos valer en la presente demanda de amparo, esta medida restrictiva no reporta ningún beneficio ya que estamos frente a productos que no tienen ningún efecto psicoactivo, tienen igual o menos concentrado del 1% de THC y no representan ningún riesgo a la salud pública.

(...)

Por ello, no se advierte ningún beneficio directo o indirecto a la sociedad, al Estado o cualquier otro que justifique la medida invasiva a los derechos constitucionalmente reconocidos a favor de mi representada pues, se insiste, no estamos frente a productos que representen algún problema o riesgo a la salud pública."

Como se advierte fácilmente de la simple lectura a la transcripción formulada de los Conceptos de Violación marcados como Tercero a Sexto, la quejosa señaló en cada uno de ellos cuáles son las actividades reguladas por el Derecho, es decir, la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sativa L. (cáñamo) para fines industriales.

Así pues, de la simple lectura a la transcripción anterior, mi representada no sólo señaló cuáles son las "conductas cubiertas por el derecho" a efecto de que el Juez pudiera estudiar la inconstitucionalidad planteada sino que, también, señaló en los Conceptos de Violación marcados como Tercero a Sexto cuáles son los derechos humanos violados por el sistema normativo controvertido, por lo que deberá revocarse la sentencia recurrida y, en su lugar, después de analizar los Conceptos de Violación omitidos por el a-quo, concluir en la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, ya que éste no cumple con el principio (y las cuatro etapas del test) de proporcionalidad de una medida legislativa que afecta la esfera jurídica del quejoso.


Confirma la ilegalidad de la sentencia, la jurisprudencia de la Suprema Corte -misma que, aún siendo obligatoria para el juzgado, no observó, lo cual torna en ilegal la sentencia- de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEOR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio

107

radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."³⁵

Por lo tanto, queda acreditada una vez más la ilegalidad de la sentencia recurrida pues, contrario al argumento del Juez, mi representada sí señaló los derechos humanos violados y las "conductas cubiertas por el derecho", a efecto de que el propio juzgador realizara el estudio constitucional planteado y, entonces, concluyera sobre la violación constitucional provodada por los actos reclamados.



Por lo tanto, al haber omitido el análisis de estos Conceptos de Violación, bajo el argumento o *pretexto* de inoperancia de los mismos cuando, como se ha acreditado en el presente Agravio, ello no ocurre, genera que la sentencia deba ser revocada y, por lo tanto, ese Alto Tribunal analice los argumentos omitidos por el Juez a efecto de concluir que el sistema normativo impugnado resulta contrario al principio de proporcionalidad de la medida legislativa, al no superar ninguno de las cuatro etapas del test de proporcionalidad y, en consecuencia, violar el derecho humano a la seguridad jurídica.

E. Además, resulta ilegal la consideración del Juez, en el sentido de que "...se encuentra imposibilitado para determinar, en primer lugar, cuáles son las conductas cubiertas por el derecho para decidir si la norma tiene algún efecto sobre dicha conducta, esto es, si incide en el ámbito de protección *prima facie* del derecho y de esta manera llevar a cabo el nivel de análisis (test de proporcionalidad) que propone".

Lo anterior es así, pues como se señaló y acreditó plenamente en el apartado anterior del presente Agravio, en los Conceptos de Violación Tercero a Sexto de la

³⁵ Época: Novena Época, Registro: 191384, Instancia: Pleno., Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P.J.J. 68/2000, Página: 3e

168

demanda de amparo, sí se señaló en forma por demás clara cuál es la conducta que regula el sistema normativo controvertido.

Ello es así, pues en innumerables ocasiones dentro de los referidos Conceptos de Violación, mi representada se refirió a que la conducta consiste en la "siembra, cultivo o cosecha" de la cannabis a efecto de destinarla a fines industriales.

Así, si mi representada sí se refirió expresamente y en innumerables ocasiones en los Conceptos de Violación Tercero a Sexto, a cuál es la conducta regulada por el sistema impugnado, resulta ilegal la sentencia del Juez en donde señala que "...se encuentra imposibilitado para determinar, en primer lugar, cuáles son las conductas cubiertas por el derecho para decidir si la norma tiene algún efecto sobre dicha conducta" pues como se acreditó anteriormente, mi representada sí señaló cuál es la conducta respectiva y que consiste en la siembra, cultivo o cosecha de cannabis para fines industriales y con contenido igual o menor al 1% de THC.

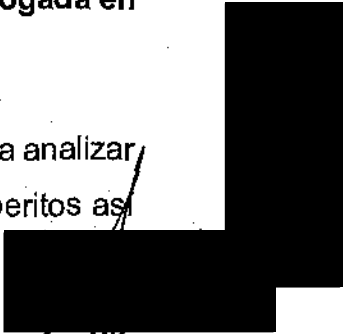
Por otro lado, tampoco el Juez estaba imposibilitado para determinar cuáles conductas eran reguladas por el sistema normativo impugnado, pues bastaba la simple lectura de los artículos en cuestión, para que dicho juzgador estuviera en la capacidad de determinar cuál conducta estaba referida en la hipótesis normativa reclamada.

Incluso, si el Juez hubiera hecho un verdadero análisis de la demanda de amparo como lo obligan las disposiciones que rigen el propio juicio, en términos de los artículos 74 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 40/2000, no hubiera considerado inoperantes los Conceptos de Violación sino que, por el contrario, al contener todos los elementos requeridos para su análisis, hubiera concluido necesariamente en la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado.

Por lo tanto, al haberse demostrado la ilegalidad de la sentencia ahora recurrida, lo procedente es que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación la revoque y, en su lugar, dicte otra en la que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada.

OCTAVO.- Ilegalidad de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, en violación a las fracciones I, II y III del artículo 74 de la Ley de Amparo y el diverso numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que dejó de valorar la prueba pericial desahogada en esa primera instancia.

En efecto, el Juez de Distrito, bajo un argumento simplista y sin detenerse a analizar el ofrecimiento de la prueba pericial, las preguntas y respuestas de los peritos así



109

como su relación con todos y cada uno de los Conceptos de Violación hechos valer en la demanda de amparo, simplemente afirmó que no resulta procedente analizar dicha probanza, al señalar que las respuestas no le generan convicción a efecto de declarar la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, pues la inconstitucionalidad que se hizo valer por el quejoso depende de la prohibición que subsiste respecto a llevar a cabo la siembra, cosecha y cultivo de cannabis sativa L (cáñamo) con fines de procesamiento industrial, sin que se haga depender dicha prohibición de la cantidad de sustancia denominada tetrahidrocannabinol.

Ahora bien, esta consideración (simple afirmación sin estar motivada) que sustentó el Juez de Distrito resulta ilegal, tal como se acreditará a continuación.

A. Para demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida conviene, en primer lugar, tener presente las consideraciones (afirmaciones sin ninguna motivación) que realizó el Juez:

"Sin que sea necesario emitir pronunciamiento sobre la prueba pericial en materia química farmacéutica biológica ofrecida por la parte quejosa, cuyo desahogo versó sobre las siguientes preguntas:

Questionario formulado por la parte quejosa

(se transcribe)

Lo anterior, en razón de que las preguntas referidas se encuentran encaminadas a demostrar, esencialmente, las características y diferencias químicas, farmacológicas y biológicas de la cannabis sativa L (cáñamo), la marihuana y el cannabidiol (CBD), los efectos que tienen en el ser humano si se consumen productos de contenido igual, mayor y menor al 1% de tetrahidrocannabinol; y, si dichas sustancias pueden ser utilizadas con fines de investigación científica o médica; es decir, las respuestas a dichos cuestionamientos no generan convicción en el suscrito a efecto de declarar la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, pues la inconstitucionalidad que hace valer la parte quejosa la hace depender de la prohibición que subsiste respecto a llevar a cabo la siembra, cosecha y cultivo de cannabis sativa L. (cáñamo) con fines de procesamiento industrial.

Esto es, la prohibición contemplada en el sistema normativo que la parte quejosa impugna se refiere a las actividades de siembra, cultivo y cosecha de la cannabis sativa L. (cáñamo) con fines de procesamiento industrial, pues únicamente son permisibles legalmente dichas actividades cuando se realicen para fines médicos o científicos, sin hacer depender dicha prohibición de la cantidad de la sustancia denominada tetrahidrocannabinol.

(...)

Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal

110

solicitados en contra del Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código.

(...)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

(...)

Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Desart MX, sociedad anónima de capital variable contra el Decreto que reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; específicamente por lo que hace a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la ley mencionada y 198, último párrafo del citado código, así como su aplicación, consistente en la emisión del oficio 183300EL040837, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia."

Ahora bien, esta consideración del Juez, en donde determinó que no resulta necesario emitir pronunciamiento alguno respecto de la prueba pericial ofrecida y desahogada en el juicio, bajo el argumento de que la inconstitucionalidad no se hizo depender de cantidad de la sustancia denominada tetrahidrocannabinol, resulta contraria a lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, tal como se acreditará a continuación.

B. La sentencia resulta ilegal, pues dejó de analizar todas y cada una de las preguntas que fueron propuestas por la quejosa y respondidas por los peritos, ya que sólo se limitó a señalar que no resultaba necesario emitir pronunciamiento respecto de dicho medio probatorio, ya que la inconstitucionalidad se hace valer por el quejoso de la prohibición que subsiste en el sistema normativo para sembrar, cultivar y cosechar cannabis sátiva L (cáñamo) con fines industriales, sin detenerse a analizar cada una de las preguntas y su relación con los Conceptos de Violación formulados en la demanda de amparo.

En efecto, la sentencia viola las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, pues en la misma sólo se contiene una afirmación del porqué no es necesario emitir pronunciamiento de la prueba pericial desahogada en el juicio, sin siquiera analizar las preguntas propuestas por la quejosa y las respuestas formuladas por los peritos y su relación con los Conceptos de Violación.

Es decir, para que hubiera cumplido con la obligación impuesta por las fracciones I y II del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el juez estaba obligado a motivar porqué cada una de las preguntas no ameritaba pronunciamiento alguno por parte del órgano jurisdiccional al momento de resolver el juicio; sin embargo, como se advierte de la simple lectura de la sentencia, la misma resulta carente de motivación en esta parte.

Con ello, además, se genera una ilegalidad más, pues se dejó en estado de indefensión a la quejosa, ya que ante la falta de motivos por los cuales se determine que cada pregunta no merece pronunciamiento, se impide ejercer su derecho a controvertir la decisión del juez.

Así pues, la ilegalidad ante la falta de motivación de la afirmación del Juez se confirma con el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS, MOTIVACION DE LAS. Si la responsable no motivó su fallo, no bastan sus solas afirmaciones dogmáticas para que el mismo sea legal."³⁶

Como se advierte del criterio, no basta una afirmación dogmática ("*...Sin que sea necesario emitir pronunciamiento sobre la prueba pericial en materia química farmacéutica biológica ofrecida por la parte quejosa... sin hacer depender dicha prohibición de la cantidad de la sustancia denominada tetrahidrocannabinol...*") para que se considere legal la sentencia pues, para cumplir con el mandato constitucional -que también es aplicable a cualquier órgano jurisdiccional- se tiene que motivar todas sus afirmaciones y consideraciones.

Por lo tanto, ante la falta de motivación de la sentencia, del porqué no merece pronunciamiento alguno las preguntas formuladas por mi representada y sus respuestas hechas por los peritos, resulta ilegal la sentencia recurrida, por lo que deberá revocarse y, en su lugar, analizar todas y cada una de las preguntas y respuestas en dicha probanza, a efecto de concluir la inconstitucionalidad del sistema impugnado.

C. Además, las consideraciones vertidas por el Juez resultan por demás violatorias de lo señalado en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que analizó de forma incompleta e indebida tanto el objeto de la prueba pericial, las

³⁶ Época: Sexta Época, Registro: 273134, Instancia: Tercera Sala, Tipo d, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen Cuarta Parte, Materia(s): Común, Tesis: , Página: 144

preguntas propuestas por la quejosa y las respuestas a éstas formuladas por los peritos de la quejosa, oficial y de la autoridad responsable.

En efecto, en el escrito a través del cual se ofreció la prueba pericial, la quejosa señaló de forma clara lo siguiente:

"Esta prueba pericial se ofrece para demostrar las características químicas farmacéuticas y biológicas tanto de la Cannabis Sativa L (Cáñamo), como del canabidiol o CBD, la marihuana y el tetrahidrocannabinidiol ó THC, así como sus efectos químicos farmacológicos y biológicos en el consumo o ingesta por parte del ser humano y está relacionada con todos los Conceptos de Violación hechos valer en la demanda de amparo."

En ese sentido, queda por demás claro que el objeto de la prueba, era aportar elementos técnicos que sustentaran los argumentos hechos valer en todos y cada uno de los Conceptos de Violación formulados por la quejosa en su demanda de amparo.

Pero, además, de las propias preguntas propuestas por la quejosa se advierte esta relación con los Conceptos de Violación, tal como se advierte de su simple lectura:


1. Señale a qué especie de planta corresponden la Cannabis Sativa L (Cáñamo) y la Marihuana.
2. Señale si existen y cuáles son, en su caso, las diferencias químicas, farmacéuticas y biológicas entre la Marihuana y la Cannabis Sativa L (Cáñamo).
3. Señale el contenido de tetrahidrocannabinidiol ó THC en la Cannabis Sativa L (Cáñamo), así como el porcentaje que representa.
4. Señale si existen diferentes efectos químicos, farmacológicos o biológicos en el ser humano, si consumen productos con contenido igual o mayor al 1% de tetrahidrocannabinidiol ó THC y si ese contenido es igual o menor al 1%.
5. Señale las características químicas, farmacológicas y biológicas del canabidiol o CBD.
6. Señale si el consumo, en cualquier forma, por parte del ser humano, de canabidiol o CBD, por sus características químicas, farmacológicas o biológicas, puede tener algún efecto eufórico, sin importar la cantidad que se consuma.
7. Señale si la Cannabis Sativa L (cáñamo) y el canabidiol o CBD, por sus características químicas, farmacológicas o biológicas, podría tener algún efecto psicoactivo.
8. Señale si existen diferencias químicas, farmacológicas y biológicas entre el canabidiol o CBD y el tetrahidrocannabinidiol ó THC.
9. Conforme a las características químicas, farmacológicas y biológicas, señale si existen diferencias en cuanto al uso que pueden tener el canabidiol o CBD y el tetrahidrocannabinidiol ó THC.
10. Conforme a las características químicas, farmacológicas y biológicas, señale si el canabidiol o CBD, ante su ingesta o consumo por parte del ser humano, podría tener algún efecto parecido al consumo de narcóticos, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
11. Conforme a las características químicas, farmacológicas y biológicas, señale si la Cannabis Sativa L (cáñamo) puede ser sembrada, cultivada y cosechada en territorio nacional.
12. Conforme a las características químicas, farmacológicas y biológicas, señale si la Cannabis Sativa L (cáñamo) y el canabidiol o CBD pueden ser utilizados con fines de investigación científica o médica.

- 113
13. Señale si existe alguna diferencia química, farmacológica o biológica entre la Cannabis Sativa L (cáñamo) sembrado, cultivado y cosechado en el extranjero y el que se pudiera sembrar, cultivar y cosechar en territorio nacional.
14. Dará la razón de su dicho."

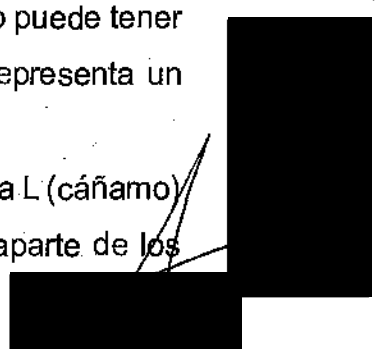
Como se advierte, contrario al ilegal criterio del juez, todas las preguntas están encaminadas a fortalecer los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en la demanda de amparo, aportando elementos técnicos suficientes que lleven a la convicción judicial respecto a la violación de los derechos humanos de la quejosa.

En efecto, las preguntas formuladas por mi representada aportaron elementos técnicos necesarios que fortalecieron los Conceptos de Violación y demostraron la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado.

Ello, pues basta la simple lectura de las preguntas y respuestas dadas a la prueba pericial, para que ese Tribunal ad-quem se pueda percatar que, de las mismas, se desprenden datos técnicos importantes como son los siguientes:


- 
- Existen diferencias fundamentales entre la cannabis sativa L (cáñamo) y la planta de la marihuana utilizada como estupefaciente;
 - La cannabis sativa L (cáñamo) no tiene efectos psicotrópicos en el ser humano ante la eventualidad de su consumo;
 - El cáñamo sólo tiene aplicaciones industriales y no de uso recreativo;
 - La cannabis sativa L (cáñamo) sí puede ser sembrada en territorio nacional;
 - La cannabis sativa L (cáñamo) puede también ser utilizada para fines de investigación médica o científica.

Así pues, contrario al ilegal criterio del Juez, la pericial no versó exclusivamente en demostrar las diferencias entre las plantas con contenido mayor o igual al 1% de THC sino que a través de dicha probanza se acreditó plenamente la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, pues a través de las respuestas del perito de la quejosa, de la autoridad responsable y del propio Juzgado, se acreditó plenamente lo siguiente

- Resulta violatorio del derecho humano a la igualdad, que se otorgue un trato distinto a las consecuencias de una actividad, cuando el origen es el mismo;
 - No es posible que exista una afectación a la sociedad o derecho de terceros para limitar la libertad de trabajo o comercio (en la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo), en virtud de que la misma sólo puede tener fines industriales y no de consumo humano y, más aún, no representa un problema de salud pública al no ser una sustancia psicotrópica.
 - Se viola el derecho humano a la igualdad, pues la cannabis sativa L (cáñamo) también puede ser utilizada para fines médicos o científicos, aparte de los
- 

114
fines industriales, pero se prohíbe sólo la siembra, cultivo o cosecha de la misma para fines industriales cuando sí se permite para fines médicos o científicos.

Por lo tanto, el Juez de Distrito no sólo violó la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo sino que, también violó lo dispuesto en la fracción IV del artículo 93 y 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria pues el Juez de Distrito omitió siquiera valorar las preguntas propuestas por la quejosa en la prueba pericial y las respuestas dadas por el perito de la quejosa, el de la autoridad responsable y el oficial y, al haber hecho eso, dejó de advertir que de las mismas se advierte claramente no sólo la relación que tienen con los Conceptos de Violación formulados en la demanda de amparo y su ampliación sino que, también, a través de las mismas se aportaron elementos técnicos que fortalecen los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer, como son el de violación al derecho humano a la igualdad y la libertad de trabajo.

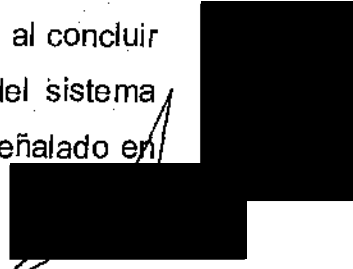


Pero, aún más, de las propias preguntas y respuestas a la prueba pericial, se advierte con facilidad la violación al derecho de una legislación que sea proporcional o, dicho de otra manera, la falta de proporcionalidad de la medida, pues se acreditó en dicha probanza que no existe justificación constitucional válida para prohibir una actividad como lo es la siembra, cultivo o cosecha de la cannabis sativa L (cáñamo) para fines industriales, cuando (i) el mismo producto también puede ser utilizado para un fin permitido como lo es la investigación científica o médica; (ii) este producto no representa ningún peligro a la salud humana, pues carece de efectos psicotrópicos y, por lo tanto, no es un producto cuya siembra, cultivo o cosecha merezca, constitucionalmente, estar prohibida.

D. Por último, la sentencia resulta ilegal al haber dejado de analizar la prueba pericial desahogada en esa primera instancia, pues la misma no versó exclusivamente en demostrar las diferencias entre las plantas con contenido mayor o igual al 1% de THC.

En efecto, como se señaló en los alegatos rendidos por el abogado autorizado Fernando Esteban Ismael Salmerón ante el a-quo, las respuestas dadas por los tres peritos a las preguntas propuestas por mi representada, *"se acredita plenamente la inconstitucionalidad de los actos reclamados"*.

Es más, en el propio escrito de alegatos, se acreditó que tanto el dictamen de la perito del quejoso como de la autoridad responsable fueron conformes al concluir diversas cuestiones técnicas que confirman la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, tal como se acredita de la simple lectura a lo señalado en dicho escrito de alegatos:



115

Número de pregunta	Punto de coincidencia entre la pericial de la quejosa y de la autoridad responsable.
1	El cáñamo y la marihuana son dos subespecies de la planta Cannabis sativa.
2	El cáñamo y la marihuana tienen usos distintos.
3	El cáñamo tiene menos del 1% de THC.
4	Existen diferencias claras, en cuanto a los efectos que produce el consumo de productos con contenido mayor al 1% de THC y aquéllos con contenido menor al 1% de THC.
5	El cannabidiol es un fitocannabinoides que carece de actividad psicoactiva.
6	El consumo de CBD no tiene ningún efecto eufórico, ya que carece de actividad psicoactiva. El CBD es un cannabinoide no psicotrópico.
7	El CBD no es una sustancia psicoactiva, carece de propiedades intoxicantes y es un cannabinoide no psicotrópico.
8	El CBD y el THC son sustancias completamente diferentes.
9	El CBD no es una sustancia psicoactiva y carece de propiedades intoxicantes.
10	El CBD, al no tener efectos psicoactivos, no produce efecto nocivo alguno en la salud, frente a su ingesta o consumo por el ser humano.
11	El cáñamo sí puede ser sembrado, cultivado y cosechado en territorio nacional.
12	Ante la falta de efectos psicoactivos, el CBD también puede tener usos de investigación médica o científica.
13	No existen diferencias sustanciales entre el cáñamo sembrado, cultivado y cosechado en el extranjero frente al que se pudiera sembrar, cultivar y cosechar en territorio nacional.

Así pues, tanto la prueba pericial de la quejosa como la desahogada por la perito de la autoridad responsable, confirman la Inconstitucionalidad de los actos reclamados en el presente juicio de amparo.

Adicionalmente, el dictamen pericial rendido por el perito nombrado por ese H. Juzgado de Distrito, es coincidente con los anteriores dictámenes, por lo que queda acreditada, aún más, la inconstitucionalidad de los actos reclamados en el presente juicio de amparo."

Como se advierte de lo anterior, contrario al ilegal criterio del a-quo, la pericial no versó exclusivamente en demostrar las diferencias entre las plantas con contenido mayor o igual al 1% de THC sino que, a través de las preguntas formuladas por mi representada y las respuestas dadas por los peritos, se acreditó la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado.

Pero, aún más, la ilegalidad de la sentencia se acredita, también, pues dejó de analizar los alegatos rendidos por el abogado autorizado de la parte quejosa, en los que se acreditó como es que las respuestas de los peritos de la quejosa y de la autoridad responsable, confirmaron la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado.

En efecto, conforme al criterio de ese Poder Judicial de la Federación, el estudio de los alegatos formulados previo a la celebración de la audiencia constitucional es una

obligación del Juez de Distrito, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo³⁷.
Dicho criterio es de rubro y texto siguientes:

"ALEGATOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO PREVÉ EL DERECHO PROCESAL DE LAS PARTES DE FORMULARLOS Y UNA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE RECIBIRLOS Y PRONUNCIARSE RESPECTO DE ELLOS EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. El precepto citado, vigente a partir del 3 de abril de 2013 dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, lo cual implica un razonamiento expreso cuando la parte que los formula haga valer: a) causas de improcedencia y/o sobreseimiento en el juicio, o se desvirtúen esos motivos; b) exhiban pruebas supervenientes; c) informen situaciones trascendentes relacionadas con la tramitación del juicio constitucional; y, d) tengan como fin demostrar lo planteado en la demanda, el informe justificado o la contestación del tercero interesado, en relación con las actuaciones procesales. Lo anterior, ya que la finalidad del legislador al justificar la creación de la nueva legislación en materia de amparo, fue la de regular el juicio y cumplir los parámetros internacionales en materia de derechos humanos en los que se sustenta la Constitución Federal, esto es, constituir un medio de control más eficiente de las actuaciones de las autoridades en beneficio de las partes, sin que ello implique una oportunidad para formular nuevos conceptos de violación, o bien, exponer razones y fundamentos distintos a los previamente presentados; en el entendido de que el pronunciamiento realizado por los juzgadores respecto de los alegatos puede hacerse de la forma siguiente: 1. Debe existir pronunciamiento expreso cuando se controviertan o destruyan los fundamentos de la o las causas de improcedencia y/o sobreseimiento invocadas por uno o varios de los sujetos procesales en el juicio de amparo, o se informe de alguna situación trascendental relacionada con la tramitación del juicio constitucional; 2. Remitir al estudio que realizó en la resolución relativa, si en ella quedó inmerso su correspondiente análisis; 3. Declarar no analizables los argumentos, cuando se consideró fundado un concepto de violación y se dejaron de estudiar aquellos argumentos relacionados con los alegatos, o cuando la resolución favorece los intereses de la parte que los expone; 4. Calificar de inoperantes los alegatos en los que se hagan valer nuevos conceptos de violación, o bien, se expongan razones y fundamentos distintos o novedosos a los presentados en el informe justificado y/o escrito de apersonamiento; y, 5. Dar respuesta de manera clara, precisa y destacada en la resolución relativa, conforme en derecho corresponda, cuando no se actualice algún supuesto previamente mencionado; lo anterior, toda vez que la formulación de alegatos no implica el dictado de

³⁷ Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Aflerte la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por ascrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

una resolución favorable, sino únicamente la calificación que se haga de ellos en la resolución relativa.³⁸

Por lo tanto, si en los alegatos se acreditó, también, que las respuestas formuladas por los peritos de la quejosa y de la autoridad responsable confirmaban la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, el a-quo tenía la obligación de analizar dichos alegatos y, por lo tanto, darle valor probatorio a la prueba pericial.

Sin embargo, al no haberlo hecho así, violó el artículo 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que la sentencia deberá revocarse y, en su lugar, dictar otra en la que no sólo se analicen los alegatos rendidos sino la prueba pericial desahogada ante el Juzgado de Distrito, en la que se aportan elementos técnicos suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado y, ante ello, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por mi representada.

Así pues, al haberse demostrado la ilegalidad en que incurrió el Juez de Distrito al dejar de analizar la prueba pericial en conjunto con los Conceptos de Violación hechos valer tanto en la demanda de amparo como en su ampliación, procede que se revoque la sentencia recurrida y se analicen las respuestas formuladas por los peritos correspondientes, a efecto de concluir, necesariamente, en la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado.

Por lo expuesto, a ese Juzgado de Distrito se solicita:

PRIMERO.- Tener por interpuesto el presente recurso de revisión, en contra de la sentencia constitucional de fecha 2 (dos) de septiembre de 2019, notificada al día siguiente (tres de septiembre) a mi representada.

SEGUNDO.- Distribuir las copias de traslado del presente recurso de revisión entre las partes en el juicio de amparo y, una vez integrado el expediente, remitirlo junto con el escrito original de expresión de agravios, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se solicita:

PRIMERO.- Admitir a trámite el presente recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia constitucional de 2 de septiembre de 2019, notificada al día siguiente (tres de septiembre de 2019) a la quejosa.

³⁸ Época: Décima Época, Registro: 2018547, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: (I Región)7o.5 K (10a.), Página: 1005

MS
SEGUNDO.- Previos los trámites de ley, revocar la sentencia ahora recurrida y, en su lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la quejosa.

PROTESTO LO NECESARIO.

Autorizado por la parte quejosa en términos amplios de la Ley de Amparo.
Ciudad de México, al día de su presentación.



ESCANEADO